

OROTOY, HISTORIAS DE UN RÍO MÁS ALLÁ DEL AGUA
Conflictos socioambientales en torno a un río de la Orinoquia colombiana

SILVIA ESTEFANÍA GAMBA SÁNCHEZ

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Comunicación

Directora:

Ph.D Maryluz Vallejo Mejía

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Maestría en Comunicación

Bogotá, 2017

Bogotá D.C., junio 5 de 2017

Doctora

Marisol Cano Busquets

Decana Facultad Comunicación y Lenguaje

Pontificia Universidad Javeriana

Ciudad

Cordial saludo,

Valoro este trabajo de Silvia Estefanía que pone a dialogar la comunicación con el periodismo ambiental en torno a un objeto de estudio de interés tanto para las comunidades afectadas de la Orinoquia como para la academia. La estudiante logró demostrar los impactos que ha sufrido la cuenca del río Orotoy debido a las distintas explotaciones mineras y agrícolas, y lo hizo mediante una juiciosa documentación y reportería en el terreno.

El resultado es un amplio reportaje periodístico, escrito con los estándares de calidad del periodismo narrativo, que también está presentado en formato multimedia con visualización de datos, videos y galerías de fotos. Estos recursos, sumados a una escritura creativa y rigurosa, le garantizarán mayor difusión al trabajo.

Asimismo, en el marco teórico se recoge la literatura pertinente tanto del estado del arte como de las categorías de análisis, que resultaron iluminadoras para realizar la reportería e interactuar con expertos, como los del Instituto Humboldt, donde la estudiante tuvo una experiencia laboral que supo capitalizar para este trabajo de grado. Desde un comienzo, Silvia Estefanía se plantea preguntas con una perspectiva crítica situándose en una zona de conflictividad de las ciencias sociales en donde los comunicadores pueden hacer lecturas más equilibradas y trazar nuevas cartografías del objeto de estudio.

Este relato sobre una región poco narrada del país adonde los medios llegan cuando ocurren hechos como el derrame de petróleo de Ecopetrol (llamado “incidente” por la empresa), pero se olvidan del seguimiento, demuestra que los campos de exploración de la academia son tan extensos como los de las empresas extractivas en este país y en tiempos de posconflicto.



Maryluz Vallejo Mejía
Profesora Titular Facultad Comunicación y Lenguaje
Pontificia Universidad Javeriana
Tel: 3208320 ext. 4587

Perfil

Profesora Titular de Tiempo Completo del Departamento de Comunicación. Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Reportera y editora cultural del diario El Mundo de Medellín. Con Doctorado en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra (Pamplona, España). Fue profesora asociada de la Universidad de Antioquia entre 1994 y 2001. Cofundadora en el 2002 de la revista Directo Bogotá, y directora desde el 2004. Ha publicado los siguientes libros: *La crítica literaria como género periodístico*, *La crónica en Colombia: medio siglo de oro*, *A plomo herido. Una crónica del periodismo en Colombia 1880-1980*, *Antología de crónicas barriales*, *Crónicas bogotanas de Felipe González Toledo*, *Antología de notas ligeras* (con Daniel Samper Pizano) *Antología de crónicas Memorias del agua*, *Las bases de la discordia*. Dicta las asignaturas Proyecto Profesional I y II, pasantía Directo Bogotá y Periodismo de Opinión en el pregrado; dirige trabajos de grado del campo de periodismo y de la Maestría en Comunicación. Investigadora de la historia de la prensa en Colombia, de géneros periodísticos y miembro del Observatorio de Medios. Coordina la Línea de Estudios de Periodismo del grupo de Comunicación, Medios y Cultura.

Bogotá D.C., junio 5 de 2017

Doctora

Marisol Cano Busquets

Decana Facultad Comunicación y Lenguaje

Pontificia Universidad Javeriana

Ciudad

Cordial saludo,

Hoy, en el día Mundial del Medio Ambiente, me permito presentarle mi trabajo de grado para optar al título de Magíster en Comunicación titulado *Orotoy, historias de un río más allá del agua. Conflictos socioambientales en torno a un río de la Orinoquia colombiana*, dirigido por la profesora Maryluz Vallejo Mejía.

En este trabajo presento las causas, actores involucrados y manifestaciones de los conflictos socioambientales asociados a las actividades productivas que se presentan en la cuenca del río Orotoy, al igual que los impactos que estas tienen en los ecosistemas y recursos naturales.

Agradezco el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y del Departamento de Comunicación en este proceso académico.

Cordial saludo,

Silvia Estefanía Gamba Sanchez

Comunicadora social – Periodista

c.c 1110478350 de Ibagué

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN**

**ASESORIA DEL TRABAJO DE GRADO
EVALUACION DEL ASESOR**

Sr.(a) Asesor(a): La Asignatura Proyecto de Tesis II o Seminario de Tesis II requiere, como las demás asignaturas, de dos notas parciales correspondientes al 60% y una nota final correspondiente al 40% para una definitiva correspondiente al 100%. En esta evaluación usted debe considerar el proceso de elaboración del Trabajo y su producto final.

TITULO DEL TRABAJO: OROTOY, HISTORIAS DE UN RÍO MÁS ALLÁ DEL AGUA
Conflictos socioambientales en torno a un río de la Orinoquia colombiana

ESTUDIANTE (S): Silvia Estefanía Gamba Sánchez

Calificación: (1-5)

30%

30%	40%	Definitiva	En letras	
5.0	5.0	5.0	5.0	Cinco

OBSERVACIONES (Justificación de la Calificación)

Valoro este trabajo de Silvia Estefanía que pone a dialogar la comunicación con el periodismo ambiental en torno a un objeto de estudio de interés tanto para las comunidades afectadas de la Orinoquia como para la academia. La estudiante logró demostrar los impactos que ha sufrido la cuenca del río Orottoy debido a las distintas explotaciones mineras y agrícolas, y lo hizo mediante una juiciosa documentación y reportería en el terreno.

El resultado es un amplio reportaje periodístico, escrito con los estándares de calidad del periodismo narrativo, que también está presentado en formato multimedia con visualización de datos, videos y galerías de fotos. Estos recursos, sumados a una escritura creativa y rigurosa, le garantizarán mayor difusión al trabajo.

Asimismo, en el marco teórico se recoge la literatura pertinente tanto del estado del arte

como de las categorías de análisis, que resultaron iluminadoras para realizar la reportería e interactuar con expertos, como los del Instituto Humboldt, donde la estudiante tuvo una experiencia laboral que supo capitalizar para este trabajo de grado. Desde un comienzo, Silvia Estefanía se plantea preguntas con una perspectiva crítica situándose en una zona de conflictividad de las ciencias sociales en donde los comunicadores pueden hacer lecturas más equilibradas y trazar nuevas cartografías del objeto de estudio.

Este relato sobre una región poco narrada del país adonde los medios llegan cuando ocurren hechos como el derrame de petróleo de Ecopetrol (llamado “incidente” por la empresa), pero se olvidan del seguimiento, demuestra que los campos de exploración de la academia son tan extensos como los de las empresas extractivas en este país y en tiempos de posconflicto.

Fecha: junio 5 de 2017

Nombre del asesor: Maryluz Vallejo Mejía

Documento: C.C. 43021555

Teléfono: 255 37 02

Email: maryluz.vallejo@javeriana.edu.co

Firma:

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is cursive and appears to read 'Maryluz Vallejo Mejía'.

Agradecimientos

Mi mayor agradecimiento es con la comunidad de la cuenca del río Orotoy que –con una bondad infinita– abrió sus puertas para mostrarme desde múltiples perspectivas la realidad de un territorio desconocido. Igualmente, agradezco al Instituto Humboldt por permitirme hacer parte del Proyecto Orotoy y darme toda la confianza y el apoyo para plasmar en este trabajo los principales aprendizajes de tan valioso proceso.

Doy gracias a Juan Sebastián, mi compañero. Gracias por todo este tiempo de amor y apoyo incondicional en medio de nuestro proyecto académico y de vida. Tu comprensión ante mi ausencia y tus constantes palabras de aliento me dieron la seguridad y fuerza para enfrentar este gran reto que fue estudiar una maestría.

A mi mamá, mi papá, mi hermana y toda mi familia por su amor y confianza en cada etapa de esta iniciativa académica, y a mis amigos –ahora inseparables– de la maestría.

A la Universidad Javeriana y, por supuesto, a mi directora Maryluz, quien fue verdaderamente una *luz* en este proceso y me acompañó con el mayor profesionalismo y rigor. Además de su entusiasmo, invaluable aporte y dedicación, agradezco su determinación para impulsarme a escoger el tema y enfoque de este trabajo.

Doy gracias a Dios, por ponerme aquí y ahora, y por enseñarme que con decisión y dedicación todo lo puedo.

Tabla de contenido

1. Introducción	10
2. Capítulo I	15
2.1 La cuestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	15
2.2 ¿ Qué se considera un conflicto ambiental?	11
2.3 El Meta y sus conflictos socioambientales	19
2.4 El modelo primario exportador	21
2.5 Impulso al modelo extractivista y agroindustrial en Colombia	23
2.6 Continuidad, la política de Juan Manuel Santos	26
2.7 Un modelo extractivista ‘conflictivo’	29
2.8 Desarrollo sostenible, concepto en disputa	34
2.9 La coyuntura del cambio climático y la necesidad de adaptación a partir de la comunicación	37
3. Capítulo II	41
3.1 El <i>comunicador mediador</i> y el <i>Otro</i> , protagonistas de la investigación	41
3.2 Pretextos sobre la unidad de análisis	42
3.3 Etnografía y la necesidad de construir relaciones de confianza	44
3.4 Los métodos complementarios	45
3.5 Una aproximación desde el periodismo ambiental	47
4. Capítulo III - www.historiasdelorotoy.com	51
4.1 Historia de un ‘incidente’	51
4.2 Orotoy: siete décadas de petróleo	55
4.2.1 La llama inagotable	60
4.3 Un motor de cambios llamado petróleo	61
4.3.1 Lógica de la probabilidad: la estrategia de Ecopetrol	64
4.3.2 Las ‘gafas’ del petróleo	66
4.3.3 Agua, petróleo y trabajo: vínculo inquebrantable	67
4.3.4 Migrantes y los conflictos entre iguales.....	69

4.3.5	Petróleo, ¿“caballito de batalla” de la comunidad?	70
4.3.6	Mientras haya petróleo	74
4.3	Cultivos de palma, como el agua y el aceite	76
4.3.1	Conflictos ambientales asociados con la palma	82
4.4	Del hato ganadero al pozo petrolero	86
4.4.1	Bajón en la ganadería, ¿alivio para el territorio?	87
4.5	Arroz en bajo	92
4.6	Un territorio pionero en iniciativas de adaptación	96
4.6.1	Compensación, la estrategia inmediata de Ecopetrol	97
4.6.2	La apuesta del Instituto Humboldt por el fortalecimiento comunitario	99
4.6.3	Guardianes del Orotoy, los superhéroes de la cuenca	103
5.	Conclusiones	107
5.1	Orotoy, una ventana hacia la Orinoquia	107
5.2	Conocimiento a escala local, aprendizajes desde lo metodológico	109
5.3	Cuando el río suena... ..	111
5.4	Los <i>Otros</i> y Yo.....	112
6.	Entrevistas	116
7.	Referencias bibliográficas	120

Introducción

*...Yo no sé lo que dicen los cuadros ni los libros
(no todos los cuadros ni todos los libros, sólo algunos),
pero sé lo que dicen todos los ríos.
Tienen el mismo idioma que yo tengo.
En las tierras salvajes el Orinoco me habla
y entiendo, entiendo
historias que no puedo repetir...*

Fragmento de El río, Pablo Neruda.

Este trabajo gira en torno al agua de un río y las tantas historias que susurran sus corrientes. Aunque cada relato lleva a otro y ese otro recuerda al río, todos siguen su curso: el mismo del Orotoy, un afluente que nace en un cerro del Llano colombiano pero se las ingenia para ir siempre al encuentro con su hermano mayor, aquel que lleva consigo la memoria de todo un continente: el gran Orinoco.

Las aguas del Orotoy bañan a Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta, Colombia. A pesar de ser un afluente pequeño, desconocido para muchos e irrelevante para otros, resulta que este río es sustento de vida para cerca de 6.000 personas que habitan esos cuatro municipios y, de alguna manera, logra brindar –al mismo tiempo– agua para el consumo humano, para la pesca, para el riego de cultivos extensos, para alimentar a los animales, y también para emplear en las industrias ganadera, palmera y de hidrocarburos.

Me sumergí por completo en sus aguas hace algo más de un año, cuando empecé a trabajar en un proyecto del Instituto Humboldt que buscaba fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climático de las comunidades que habitan su cuenca. En ese momento no imaginaba que lo sería todo para mí, sus corrientes me envolvieron y más allá de un trabajo, este río se convirtió en

sinónimo de recorridos, amigos, viajes, encuentros y sabiduría. El Orotoy, con sus aguas tranquilas, a veces frías a veces tibias, me arrastró a un territorio que jamás imaginé explorar.

En algún momento, *Orotoy, historias de un río más allá del agua* fue un salvavidas que prometió aliviar el sinsabor que originó su concepción. Inicialmente, mi proyecto de investigación pretendía ser un trabajo que visibilizara las expectativas e ilusiones de los niños del país en torno a las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, el 2 de octubre de 2016, tras los resultados del plebiscito que evidenciaron una realidad nacional que se alejaba del espíritu de la reconciliación y la paz, fui incapaz de seguir adelante con una idea que me resultó poco aterrizada y que –de alguna manera– desconocía al 50 % de los habitantes de un país que claramente decía No.

Así, las historias que había conocido de ese territorio escondido en la Orinoquia colombiana al igual que sus protagonistas, aparecieron como una respuesta inmediata y como un reto que no podía perder de vista. La vulnerabilidad social y ambiental ante el cambio climático, los conflictos socioambientales, la agresividad de las actividades productivas, y las iniciativas que allí se gestaban para hacer frente a distintas problemáticas, se convirtieron rápidamente en un nuevo propósito: retratar una pequeña porción de ese país que se forja en medio de la realidad regional, aquel que –como investigadora– había sido incapaz de percibir en mi planteamiento inicial.

Este trabajo es entonces el esbozo de una realidad: la de la cuenca del río Orotoy, un territorio que se ha transformado de manera acelerada en las últimas tres décadas como resultado de un proceso migratorio y de desarrollo industrial. En donde se dan una serie de conflictos sociales asociados con la escasez de recursos y las disputas por acceder a ellos, su uso por parte de grandes industrias allí establecidas y el deterioro de los ecosistemas naturales.

También busca reflejar una realidad ambiental de cara a la coyuntura mundial de cambio climático, no únicamente relacionada con los impactos que tienen las actividades humanas en los ecosistemas naturales, sino también con el modelo de desarrollo nacional impulsado desde inicios del presente siglo, el cual pareciera poner en riesgo la biodiversidad y sus servicios

ecosistémicos en Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, pero también el segundo con mayor número de conflictos socioambientales.

La posición destacada que tiene el cambio climático en las agendas mediáticas nacionales e internacionales permite insertar este trabajo en medio de un problema apremiante, pero desde miradas poco comunes en su abordaje, como la transformación de los territorios, la acentuación de los conflictos socioambientales en escenarios de cambio climático y, más importante aún, las iniciativas de adaptación.

Para lo anterior, teniendo en cuenta mi formación y trayectoria profesional, el desarrollo de este trabajo se planteó desde las lógicas del periodismo y la etnografía, que sirvieron como herramientas integrales que además de permitir recolectar la información, también facilitaron su posterior análisis y presentación.

Pero ese enfoque periodístico no es fortuito. Es una perspectiva imprescindible para abordar los conflictos ambientales, máxime cuando la academia se ha visto limitada al momento de socializar temas urgentes como la fragilidad de los ecosistemas en el país, la disminución de los servicios ecosistémicos que ofrece la biodiversidad, la importancia de la planificación territorial para alcanzar el bienestar comunitario y el diseño de un modelo económico que contemple la conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. Además de no siempre presentar resultados en un lenguaje entendible y claro para ciudadanos promedio, las herramientas de divulgación científica no tienen el amplio espectro de difusión con el que sí cuentan los medios masivos de comunicación en Colombia, los cuales, parecieran negarse a cubrir estas problemáticas integralmente.

En esa medida, recurrir al trabajo periodístico es al tiempo una manera de cuestionar las lógicas del oficio que mandan la parada en los comités editoriales y las salas de redacción de medios masivos, en donde el rigor periodístico pareciera estar supeditado a la inmediatez, la primicia, la pauta comercial y, peor aún, a la comodidad del escritorio, las fuentes en Twitter y a las posibilidades que ofrece internet.

Rescatar las historias que suceden en las regiones de Colombia desplazándose físicamente hacia rincones olvidados e invisibilizados como la cuenca del río Orotoy, es una manera de demostrar que en el periodismo aún es imprescindible el conocimiento del territorio, el contacto con las personas y el establecimiento de relaciones de confianza con ellas. Pero también es una forma de dar prioridad a la verdad etnográfica que proporcionan los hechos y los testimonios.

El trabajo consiste entonces en presentar historias de país a través de la mirada de sus protagonistas, historias que –aunque deberían– no se ven reflejadas en los medios masivos y que, entre otros, responden a cuestionamientos como: ¿Cómo se vive la crisis del petróleo en hogares en los que esta actividad era la única fuente de ingresos?, ¿de qué manera la industria de hidrocarburos afectó el tejido social de un territorio?, ¿por qué un modelo industrial avasallador transforma la vocación económica y la cultura de una región? y ¿cuáles son las perspectivas futuras de comunidades que, a pesar de vivir en medio de proyectos productivos de gran magnitud e importancia para el desarrollo económico de un país, no tienen garantizado su bienestar?

Así, después de un primer capítulo para conceptualización teórica y un segundo con detalles metodológicos, el tercer capítulo aparece como reportaje periodístico. En él se rescatan las voces de miembros de las comunidades que habitan el territorio y se contraponen a los argumentos principales de representantes de las industrias con las que se dan relaciones de conflicto, al igual que con actores institucionales involucrados o con poder de decisión en la región. Además, se evidencia la consulta y revisión en detalle de estudios técnicos y científicos inéditos que el Instituto Humboldt ha llevado a cabo en la región en los últimos tres años.

El reto fue, en efecto, consolidar un trabajo de periodismo investigativo con un enfoque ambiental pero también con el interés de difundir la ciencia sin perder de vista el conocimiento y la sabiduría propia de los pobladores de la región. También lo fue lograr un trabajo hecho *en* el territorio a partir de su reconocimiento y de la interacción con sus habitantes y no *desde* una visión centralista. Pero sin duda, el principal desafío es que ese producto periodístico – presentado también en una plataforma digital multimedia– resulte de interés para un público lector general, y sea capaz de sensibilizarle e invitarle a asumir una posición crítica respecto a los

conflictos socioambientales que se desarrollan en la cuenca del río Orotoy, pero también en otras zonas de la Orinoquia colombiana y ¿por qué no? de todo el territorio nacional.

Como lo planteó Neruda, las historias que cuentan los ríos no se pueden repetir o, al menos no con exactitud y, en efecto, todos aquellos relatos y vivencias del Orotoy (tan diversos, tan complejos, tan infinitos) me resultan imposibles de narrar. Por eso, este trabajo no representa más que la osadía de recordar e intentar construir un relato de agua, de petróleo, de aceite, de tierra, de dinero, de diversidad, de región, de gente y de país. De oro, de *Oro-toy* y de la indivisible relación entre la riqueza y el conflicto.

Apreciado lector: es probable que al *navegar* por las aguas del río Orotoy se transporte a un lugar desconocido que, de alguna manera, puede resultarle familiar. Le confieso que a mi me recuerda las corrientes sosegadas del río Combeima que baña a Ibagué, mi ciudad natal. Pero también debe saber que ese río místico de la llanura es como un espejo de agua que en lugar de reflejar el cielo, muestra una realidad nacional poco visibilizada y aún desconocida: la del agua, el conflicto y la vida.

Capítulo I

La cuestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Después de India, Colombia es el país en todo el mundo que registra mayor número de conflictos ambientales relacionados con diversos temas como extracción de minerales y materiales para construcción, disposición de desechos, turismo y recreación, agroindustria, gestión del agua, biodiversidad y conservación y explotación de combustibles fósiles. En total, se registran 122 conflictos, 41 más que Brasil, 44 más que Estados Unidos y 46 más que Perú (EJ Atlas, 2017).

¿Cómo puede un país, que tiene una extensión territorial de aproximadamente 1.140 millones de kilómetros cuadrados y menos de 50 millones de habitantes, tener muchos más conflictos que un país como Brasil, que se extiende por más de 8.500 millones de kilómetros cuadrados y es habitado por 200 millones de habitantes? La respuesta es ampliamente conocida pero poco dimensionada: es el segundo país más rico en biodiversidad del planeta (Mongabay, 2016).

Ostentar el segundo puesto en biodiversidad no significa únicamente que en Colombia habitan 56.343 especies biológicas, entre las que sobresalen, por ejemplo, sus 1.467 especies de orquídeas y 115 de reptiles, 47 de palmas y 34 mamíferos (SIB Colombia, 2017), sino que es un territorio privilegiado porque aquella biodiversidad “constituye el sostén de una gran variedad de servicios ambientales de los cuales han dependido las sociedades humanas” (Andrade, 2011, pág. 492).

Ese concepto de *servicio ambiental* ha evolucionado hacia el de *servicios ecosistémicos*, los cuales se refieren a los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas en el corto y largo plazo y que pueden ser de apoyo, como formación de suelos; aprovisionamiento, como alimento y agua; regulación, como regulación climática e hídrica; o culturales, como recreación (MEA, 2005, pág. 5). Por su parte, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) explica que: “Los servicios

ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad” (PNGIBSE, 2012, pág. 28) y que de ellos depende no solo el bienestar de cualquier sociedad, sino también el desarrollo de cualquier tipo de actividad humana de producción, extracción, asentamiento y consumo.

Infortunadamente, esos servicios al igual que la biodiversidad son objeto de disputa y en Colombia, es imposible desligarlos de los conflictos ambientales. Es decir, no es coincidencia que el segundo país más biodiverso del mundo sea también el segundo país con mayor número de conflictos ambientales.

¿Qué se considera un conflicto ambiental?

En Colombia, el concepto de conflicto ambiental empezó a abordarse en el año 2001, en el marco del *1er. Seminario de Identificación, manejo y resolución de conflictos ambientales*, un evento liderado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a profesionales del sector ambiental, especialmente a funcionarios del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Allí, se definió que “los conflictos ambientales tienen su origen en las relaciones de poder y en las prácticas productivas impuestas por el modelo de desarrollo vigente que se basa en la utilización inadecuada de los recursos naturales y el medio ambiente” (Minambiente, 2001, pág. 12).

El concepto anterior se ha mantenido con el paso de los años sin variaciones significativas. No obstante, los conflictos ambientales se han abordado también desde otras esferas. Por ejemplo, según explica Julio Carrizosa Umaña (2001) estos, aparte de tener una alta carga de aspiraciones éticas de los intervinientes son una construcción cuya base son las ciencias naturales y en la que intervienen la ética, la estética y la historia. Además, el autor indica que para ver un conflicto desde la perspectiva ambiental, es necesario salir del mundo profesional y dejar de ver a través de los “lentes disciplinarios”.

En esa línea, Gloria Rodríguez (2001) agrega que los conflictos socioambientales son una manera más de interacción entre dos o más individuos que se enfrentan por el acceso, uso y distribución de recursos naturales que son escasos y que están relacionados con la transformación de ecosistemas y la apropiación de los recursos por parte de un determinado grupo de individuos (pág. 77).

Según esta autora, los conflictos socioambientales se distinguen por tres cualidades específicas:

1. *Escasa comunicación entre las partes*: los actores del conflicto como autoridades, empresas y comunidades no se entienden ni comunican entre sí.
2. *Dificultades con la información*: la información se concibe como una “fuente de poder”. En un conflicto es necesario garantizar tanto el derecho a la información como a la participación, con el fin de facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, debe haber un manejo adecuado de la información pues esta –poca o mucha– puede en muchos casos prestarse para acrecentar o promover más conflictos ambientales.
3. *Poca comprensión del proceso*: al igual que otro tipo de conflictos, el socioambiental no puede evitarse, pero sí gestionarse. Cada conflicto tiene una dinámica propia y en la mayoría de casos, suele poner de manifiesto las deficiencias de gobernabilidad en los territorios. (Rodríguez, 2001, pág. 78-80).

Similar a la visión de Carrizosa, Eliana Spadoni (2012) sostiene que los conflictos ambientales son procesos de interacción entre diferentes actores que tienen intereses determinados sobre los recursos naturales y que “son construcciones sociales, creaciones culturales, que pueden modificarse según cómo se los aborde y se los conduzca, según cómo sean transformados y según como involucren las actitudes e intereses de las partes en disputa” (pág. 1).

De igual manera, basado en Fontaine (2003), Rodrigo Martínez Novo (2012) destaca que los conflictos ambientales no se pueden definir sin contemplar su dimensión social, por lo que

plantea que son socioambientales, pues no involucran únicamente a actores exógenos, sino a todos aquellos afectados por diferentes proyectos relacionados con los recursos naturales.

Lo anterior permite esbozar dos análisis vitales para este trabajo: el primero, que los conflictos socioambientales no están relacionados únicamente con el medio natural, sino más bien con las maneras de las que se valen hombres y mujeres para habitarlo y beneficiarse de él, es decir, de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos. El segundo, menos notorio pero más dicente, que las construcciones simbólicas de protección y cuidado que se crean en torno al territorio y los sistemas naturales hacen que los sujetos se vean constantemente en una dicotomía que, de por sí, implica un conflicto, en el más extremo de los casos relacionado con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en detrimento de su protección.

En 2012, la PNGIBSE diferenció los problemas ambientales de los conflictos socioambientales: mientras los primeros se remiten a afectaciones o riesgo de los recursos naturales, los segundos están relacionados con confrontaciones como consecuencia de una interacción social compleja, falta de diálogo y de participación comunitaria en la toma de decisiones, “en otras palabras, los conflictos son de orden más social y político, que exclusivamente técnico” (pág. 20).

De igual manera, esa política nacional –que sintetiza el concepto de conflictos socioambientales como “cualquier tensión, desacuerdo, confrontación y/o choque por oposición entre actores que persiguen objetivos diferentes, respecto a acceso, uso, manejo y protección de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” (pág. 74)– explica que ante la falta de articulación *en* y *entre* instituciones relacionadas con el sector ambiental es necesario diseñar estrategias encaminadas a la transformación de conflictos socioambientales “que permitan facilitar el desarrollo de los procesos que concluyan en una efectiva conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” (pág. 39).

En esa línea, en la que los conflictos socioambientales pueden verse como una oportunidad para concebir maneras alternativas de transformar las interacciones que derivan en conflicto y así garantizar la subsistencia de los recursos biológicos, sus servicios y, por ende, de la humanidad, Munévar y Valencia (2015) proponen que los conflictos socioambientales no son necesariamente

algo negativo, sino que dan paso a nuevas interacciones y movilizaciones humanas que permiten a las comunidades mejorar sus territorios y crear procesos de participación colectiva (pág. 55).

Dicha percepción permite concluir que por más matices que puedan presentar o más actores involucrados, los conflictos socioambientales tienen el potencial de consolidarse como motores de cambio para su adecuada gestión y transformación, para el desarrollo de políticas públicas como la PNGIBSE o, incluso, como un llamado de atención para superar brechas sociales en los territorios.

El Meta y sus conflictos socioambientales¹

De los cuatro departamentos colombianos que conforman la Orinoquia, el Meta es el que mayor número de conflictos socioambientales registra. Según se muestra en el Atlas de Justicia Ambiental (2017), mientras en el Meta hay seis conflictos ambientales, en Casanare hay dos, en Arauca hay uno y en Vichada aún no se registra ninguno.

Cuatro de los seis conflictos que reconoce el Atlas para el Meta están en la categoría de conflictos por *combustibles fósiles y justicia climática*, uno está relacionado con *conservación de la biodiversidad* y el otro con *biomasa y tierras*. Si bien este departamento, de 81.747 kilómetros cuadrados, no es el de mayor extensión de la Orinoquia colombiana (el primero es Vichada, que ocupa 100.242 kilómetros cuadrados), sí es el que más pobladores tiene, según cifras del DANE (2009) es habitado por 853.115 personas, superando por más de 500.000 habitantes a Casanare, segundo en el listado.

Si se mira en perspectiva, lo anterior quiere decir que los conflictos socioambientales que tienen lugar en el departamento del Meta afectan a un número considerable de habitantes de la Orinoquia colombiana, pues si en total esta región es habitada por 1'479.137 personas, y 853.115 están en el Meta, eso quiere decir que cerca del 57 % de los habitantes de esta región ocupan un departamento con conflictos socioambientales severos, un territorio que por efecto de las actividades económicas y el crecimiento poblacional se ha transformado a pasos agigantados

¹ Análisis de datos basado en los datos suministrados en el Atlas de Justicia Ambiental.

creando “riesgos ambientales que podrían comprometer, incluso, la calidad y magnitud del desarrollo económico”. Habitan una región que “aparece más como una frontera frágil que como un espacio de expansión económica sin limitaciones ambientales para los emprendimientos productivos (Rodríguez, et al., 2009, pág. 51-52).

Este es el departamento de Colombia que más concentra conflictos socioambientales relacionados con *combustibles fósiles y justicia climática* (en total, se reportan 19 de este tipo de conflictos en todo el territorio nacional). De manera específica, en el Meta se presentan conflictos por explotaciones petroleras en la región del alto Ariari, afectando a los municipios El Dorado, Granada, El Castillo y Cubarral; en la cuenca del río Humadea, afectando a los municipios de Castilla la Nueva, Cubarral, Guamal y San Martín; en la región de la Macarena y en el municipio de Acacías.

Junto con Cauca, el Meta es el único departamento en Colombia que enfrenta un conflicto sobre *conservación de la biodiversidad* –específicamente por el área de manejo especial de La Macarena– relacionado con el uso y acceso a la tierra por parte de pobladores y la designación de áreas protegidas por parte del Estado. Además, es el único departamento de la Orinoquia con un conflicto por *biomasa y tierras*, consecuencia directa del monocultivo de palma de aceite en el municipio de San Carlos de Guaroa, en donde se presentan conflictos por la adquisición de tierras, uso de agrotóxicos y acceso al agua, entre otros.

Como queda evidenciado, la mayoría de conflictos que se presentan en este territorio tienen que ver con una actividad productiva determinada, para este caso, la extracción petrolera y la agroindustria de palma de aceite. Estas actividades son la materialización de dos ‘locomotoras’ de desarrollo que se han impulsado en el país desde inicios del siglo XXI y con unos antecedentes destacables desde el siglo XIX, en las que el extractivismo y la reprimarización de la economía a partir de la explotación de los recursos naturales y materias primas para la exportación han sido una constante a pesar de poner en riesgo los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

El modelo primario exportador

El Atlas de Justicia Ambiental clasifica los conflictos ambientales en diez tipos: nucleares, extracción de minerales y materiales para construcción, gestión de residuos y desechos, biomasa y tierras, combustibles fósiles y justicia ambiental, gestión y gobernanza del agua, infraestructura y entorno construido, recreación y turismo, conservación de la biodiversidad, e industria y servicios públicos. A excepción de los nucleares, Colombia presenta los nueve tipos de conflictos relacionados y todos –aparte de los conflictos por conservación de la biodiversidad– están relacionados con actividades económicas.

Lo anterior no es fortuito. El hecho de que los conflictos socioambientales que más afectan al territorio sean los de extracción de minerales y materiales de construcción (49) y el de combustibles fósiles y justicia ambiental (19) responde en gran medida a un modelo de desarrollo basado en el extractivismo que viene implementándose en Colombia y en toda América Latina como resultado del avance de la política neoliberal.

En el marco de aquel sistema económico global neoliberal, los países desarrollados requieren una mayor cantidad de materias primas para mantener su crecimiento y países como Colombia se han dedicado a suplir dicha demanda de bienes primarios y recursos naturales mediante la producción y exportación de materias primas como el petróleo y minerales, cuyos precios son determinantes en cada eslabón de la cadena económica nacional:

El incremento sostenido de los precios de las materias primas es el motor de este proceso, el cual se refleja en la importancia sustantiva de las industrias extractivas en las exportaciones y en la disponibilidad de recursos fiscales. Esta realidad explica las políticas de promoción de estas inversiones, tanto públicas como de las grandes empresas vinculadas a la minería, el petróleo y las actividades extractivas en general. (Iturralde y Francke, 2013, pág. 7).

Según explican Iturralde y Francke (2013), este modelo está arraigado en la cultura económica de América Latina y –por más nivel de desarrollo que hayan alcanzado– no ha sido ajeno a

ninguno de sus países. Aparentemente, la fuerte “dependencia del mercado internacional y la debilidad para generar alternativas económicas que respondan al mercado interno” (pág. 9) han sido factores determinantes que le han impedido a las economías latinoamericanas apartarse del modelo primario exportador.

Las consecuencias e implicaciones de este modelo lo han hecho blanco de diferentes críticas. Una de ellas está relacionada con la alteración de los términos de intercambio en el largo plazo como resultado de una baja en los precios de las materias primas. Otra crítica indica que la implementación de este modelo hace a las economías más vulnerables, pues al depender de las exportaciones de minerales o hidrocarburos, un país puede sufrir efectos lesivos por una caída de precios o disminución de producción. Finalmente, se cuestiona que los sectores minero y de hidrocarburos no representen encadenamientos productivos significativos, puesto que no suelen incentivar la creación de nuevas empresas o industrias, no dinamizan otros sectores productivos y tampoco son una fuente de empleo destacable (Iturralde y Francke pág. 19-21).

Pero además de estas críticas fundamentales, hay una preocupación por los efectos que suelen presentarse en países en los que impera este modelo, efectos conocidos como la *enfermedad holandesa*, la cual consiste en:

- i) La caída del tipo de cambio real producida por la mayor afluencia de divisas producidas a un menor costo y, por otro lado, ii) el efecto negativo de esta caída sobre otras actividades económicas, el cual significa menores ingresos por las exportaciones, así como pérdida en el largo plazo de las mayores economías de escala e innovación tecnológica de estos sectores (Iturralde y Francke, 2013, pág. 19).

Al respecto, Rudas (2013) explica que “la dinámica del mercado de minerales e hidrocarburos genera expectativas de crecimiento acelerado de las exportaciones” y que, como consecuencia suele revaluarse el tipo de cambio, darse una pérdida de competitividad de las exportaciones y un aumento en el consumo de bienes importados, lo cual presiona alzas en la tasa de cambio real afectando otras exportaciones (pág. 78-79). Con esto, se hace evidente que el modelo primario exportador tiene todo el potencial de desincentivar la industria nacional, causando así desempleo y, de fomentar una dinámica económica desfavorable en la que disminuyen las exportaciones a la

par que aumentan las importaciones.

A esto se suma un aumento en la desigualdad, pues la riqueza natural al concentrarse geográficamente implica una centralización y concentración de la riqueza. Además, el modelo – al ser tan dependiente de recursos naturales– motiva fuertes resistencias debido a que:

Se promociona una forma de relación con la naturaleza que prioriza la obtención de renta (petrolera, minera, de la tierra, etc.) por encima de los riesgos para los hábitats que sostienen la diversidad biológica, la vida de comunidades humanas y las funciones ambientales de las que depende todo el planeta (Iturralde y Francke, 2013, pág. 22).

Impulso al modelo extractivista y agroindustrial en Colombia

A pesar de las críticas y cuestionamientos que ha recibido este modelo es evidente que durante los últimos cuatro periodos presidenciales en Colombia se ha impulsado con mayor fuerza un sistema económico que –bajo los preceptos del modelo primario exportador– impone las lógicas del extractivismo. Como se evidenciará a continuación, en el país se han enfocado todos los esfuerzos posibles para facilitar el camino al extractivismo de minerales e hidrocarburos y a la agroindustria, con base en una serie de argumentos que bien pueden resultar cuestionables.

El ascenso a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 significó un vuelco para la industria extractivista en Colombia. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 se da primacía al impulso del crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, haciendo énfasis en la protección de la infraestructura económica mediante el diseño de:

Un programa de seguridad con el fin de permitir el desarrollo de las actividades de las compañías especializadas en la exploración de hidrocarburos y [...] programas para prevenir y eliminar los ataques terroristas contra la infraestructura carbonífera, vial, eléctrica, de telecomunicaciones y petrolera (pág. 46).

No es secreto que una de las prioridades para Uribe Vélez durante su gobierno fue dar un impulso a la minería y la exploración y explotación de hidrocarburos, esto como respuesta a una

aparente ausencia de hallazgos petroleros por “la pérdida de competitividad del esquema contractual y fiscal imperante, los ataques permanentes a la infraestructura de transporte y a la actividad exploratoria misma, y la inestabilidad del marco legal” (pág. 110) y a que el sector minero había dejado de expandirse, no solo “como resultado del lento avance en el conocimiento del subsuelo y de la ineficiencia para tramitar y contratar nuevas concesiones”, sino también por el “bajo nivel de la atracción de inversión privada, debido principalmente a la ausencia de la autoridad minera en la mayoría de departamentos del país (pág. 112).

Para resolver lo anterior, las acciones gubernamentales durante aquel periodo en cuanto a hidrocarburos se enfocaron en desarrollar la exploración sísmica, la perforación de 150 pozos exploratorios y la suscripción, en promedio, de 20 contratos de asociación anuales. Además, se estipuló que se daría “mayor importancia y celeridad a los contratos de producción incremental” y que también se buscaría “la racionalización y agilización del proceso de licenciamiento ambiental para la actividad de exploración de hidrocarburos” (pág. 112), al igual que el fortalecimiento de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, el ajuste del marco normativo para el transporte, distribución y comercialización de derivados del petróleo, entre otros aspectos (pág. 114).

Para fomentar la minería, la apuesta fue contundente: poner en marcha un plan de exploración del subsuelo para alcanzar el cubrimiento de 120.000 kilómetros cuadrados, que permitiera la “promoción y entrega en concesión de nuevos prospectos” y un “crecimiento en los niveles de producción de minerales extraídos” (pág. 114). Además, el gobierno se propuso aumentar la “eficiencia de la autoridad minera mediante la reestructuración institucional, la descentralización, la agilización de los trámites para los inversionistas privados y la optimización de procedimientos” (pág. 115) y el aumento de la cobertura de la Autoridad Minera. Esta política marcaría el inicio de las polémicas licencias ambientales ‘expres’ de 90 días que se consolidarían en 2014 bajo el mandato de Juan Manuel Santos.

De igual manera, en su primer plan de desarrollo, Uribe proyectaba convertir a Colombia en un productor y exportador de productos agrícolas, por lo que propuso potenciar la explotación y promover las exportaciones de este sector, para lo cual estipuló modernizar la producción

nacional con el fin de hacer competitivos los productos agrícolas en los mercados interno y externo y así “lograr que la agricultura sea un factor de desarrollo” (pág. 149).

Si bien la política para el fomento agroindustrial podría considerarse tímida durante el primer mandato de Álvaro Uribe, con su reelección en el periodo 2006-2010 vendría la idea de consolidar el crecimiento del sector agropecuario, calificado como una fuente importante de empleo (19 % del empleo total) e ingresos (22 % de las exportaciones) en el país. Para esto se desarrolló el programa de subsidios Agro Ingreso Seguro, concebido para apoyar a pequeños y medianos productores con el fin de “promover la productividad y competitividad, y reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (PND, 2007, pág. 629).

Aun cuando dicha política resultó en uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años –pues no solo se hicieron contrataciones irregulares, sino que los subsidios fueron entregados a grandes terratenientes y en cantidades mayores a las estipuladas–, también formalizó el apoyo al Fondo de Fomento de la Palma de Aceite y estableció la cuota de fomento del 1,5 % para esta agroindustria (PND, 2007, pág. 659).

Para este periodo presidencial, el Meta –territorio al que se suscribe este proyecto de investigación– y en términos generales, la Orinoquia, fue clasificada dentro de la *fase de despegue*, en la que se consideró que sus departamentos sobresalían por el avanzado grado de expansión de su frontera agrícola, por sus dinámicas ganaderas y agroindustriales y por la mejora en el desarrollo urbano e industrial y en la vocación agropecuaria (PND, 2007, pág. 474).

No obstante, la apuesta agroindustrial y petrolera en el Meta también podía responder a otra razón, y es que “entre 2002 y 2006 esta fue la región más afectada por cultivos de coca” (UNODC, 2016, pág. 31). Tan solo en el año 2006, 11.063 hectáreas del territorio metense estaban sembradas con coca, lo cual representaba el 20 % de los cultivos ilícitos en todo el país (UNODC, 2013, pág. 11).

Lo anterior explicaría por qué sus municipios se clasificaron como “prioritarios” de intervención estatal, en los que urgía el diseño de esquemas alternativos de sustitución de cultivos ilícitos (PND, 2007, pág. 102). Para esto, la propuesta gubernamental fue aumentar la capacidad productiva mediante la promoción de proyectos agroindustriales y de producción de biocombustibles. El Fondo Capital de Riesgo, ente financiador, daría prelación a proyectos en territorios con altos índices de pobreza, pero también con altos índices de narcotráfico (PND, 2007, pág. 657), como el Meta.

Por otra parte, una vez fortalecido durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, el modelo extractivista se intensificó y en el PND de su segundo periodo (2007) se estipuló que se continuaría “promoviendo la exploración y explotación de hidrocarburos”, fomentando las inversiones del sector privado en la industria de hidrocarburos y que, mediante su capitalización, se fortalecería a Ecopetrol (pág. 625).

Continuidad, la política de Juan Manuel Santos

Con su llegada a la presidencia en el año 2010, Juan Manuel Santos contempló en su PND (2011) continuar la ruta trazada en el gobierno anterior: “Para que los avances en materia petrolera se consoliden, es preciso continuar fortaleciendo el esquema de incentivos a la inversión privada, mejorando y profundizando los desarrollos regulatorios” (pág. 278), reconociendo que la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el año 2003 permitió el crecimiento de este sector en el país y destacando que:

En el último cuatrienio se suscribieron 229 contratos de exploración y producción, y TEAS (contratos de asistencia técnica), la sísmica aumentó de 48.624 km² equivalentes entre 2002 y 2006 a 64.808 km² equivalentes entre 2006 y 2010, y se logró aumentar la producción de 529.000 BPD (barriles por día calendario) en 2006 a los 785.000 BPD promedio año en 2010 (PND, 2011, pág. 278).

Así, la política se concentró en cinco grandes objetivos: i). el fortalecimiento institucional, enfocado en el conocimiento del territorio y la regulación en la materia; ii). el aprovechamiento

de los recursos hidrocarburíferos, con el que se promovía la inversión extranjera y la adjudicación de bloques para exploración y producción; iii). garantizar la expansión y el acceso a la infraestructura, para facilitar el transporte y almacenamiento de hidrocarburos; iv). modernización de refinerías y fortalecimiento de la cadena logística, para garantizar la confiabilidad en el suministro de combustibles; y v). consolidar la relación entre el Gobierno y la industria y el desarrollo de servicios complementarios, con el fin de mejorar la competitividad del sector. (PND, 2011, pág. 288).

Para esto, en lo que podría considerarse uno de los apartes más controvertidos en los lineamientos estratégicos del primer PND de Santos, se resolvió que la fuerza pública con apoyo de los ministerios de Minas y Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deberían, entre otras labores, “garantizar la explotación, producción y transporte de hidrocarburos, y garantizar la ejecución de megaproyectos de infraestructura energética y proteger la biodiversidad y los recursos naturales” (pág. 504).

En el Plan Nacional de Desarrollo (2011) promulgado por el Gobierno de Santos se hace mención a cinco locomotoras del crecimiento y la generación de empleo para referirse a las actividades económicas de alto potencial que definirían el rumbo de la economía del país. Estas son: nuevos sectores basados en la innovación, agricultura y desarrollo rural, vivienda y ciudades amables, infraestructura de transporte y desarrollo minero y expansión energética (pág. 205). La quinta locomotora, esencial durante los últimos 15 años, ha sido considerada “uno de los ejes centrales de la economía colombiana” si se tiene en cuenta que tan solo en 2009 “la participación del sector minero-energético en la inversión extranjera directa total fue de casi 80%, y en las exportaciones totales supera el 50%” (pág. 208).

La consigna en este tema ha sido reiterada y para potenciar el sector minero-energético, el Gobierno actual considera tres premisas: i). la promoción de la inversión nacional y extranjera, ii). el desarrollo de clústeres de bienes y servicios para la industria y iii). el diseño de políticas para enfrentar el auge de los recursos naturales (PND, 2011, pág. 208). Evidentemente, la apuesta por este sector responde al hecho de que el 50 % de las exportaciones del país corresponden a petróleo y carbón. No en vano, la meta que se fijó el Gobierno Nacional para el

periodo 2010-2014 en este segmento estima que “las reservas de hidrocarburos aumenten en un 335 %, la producción de petróleo y gas en un 79 %, la construcción de poliductos y oleoductos en 78%, la producción de carbón en 70% y de oro en 51%” (PND, 2011, pág. 566).

Durante los dos periodos presidenciales de Santos la agroindustria también ha sido clave y reconocida como uno de los ejes económicos que crean condiciones para el desarrollo de las regiones y el aumento de la competitividad nacional.

De manera particular, la Orinoquia fue la región en la que se concentraron esfuerzos para el periodo 2010- 2014, en donde se propendió por dar un uso productivo a la tierra mediante el desarrollo de “mecanismos que faciliten la inversión privada en proyectos agroindustriales, complementados con esquemas de negocios inclusivos que incorporen las tierras y la mano de obra de los pequeños productores a proyectos sostenibles” (PND, 2011, pág. 240).

Esta misma zona se priorizó la creación de “cadenas regionales agroindustriales que identifiquen las necesidades en aspectos como investigación, asistencia técnica, infraestructura, y estatus sanitario”, con el argumento de que la región cuenta con un potencial agroindustrial destacable por su oferta hídrica y posibilidad de expansión de las áreas de manera sostenible (PND, 2011, pág. 245). Por lo mismo, dentro de la estrategia de promoción de la equidad en desarrollo rural regional, se estableció la necesidad de diseñar e implementar programas específicos para planificar la expansión agropecuaria, cuya meta principal fue el “aprovechamiento productivo, la integración y el desarrollo de la Orinoquia” (PND, 2011, pág. 248).

En consecuencia, la Orinoquia ha permanecido como una de las regiones que mayores oportunidades productivas representa para el desarrollo económico del país. Así se constata en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional (2015) correspondiente al periodo 2014-2018, en el que esta zona se presenta como el potencial de consolidarse como un “escenario de sostenibilidad entre el medio ambiente, la agroindustria y el sector minero energético” y sobre la que se destaca la variedad de sus paisajes, como el piedemonte, la llanura o sabana inundable, la altillanura productiva y de conservación y el área de la Macarena.

Esta región es clave para el crecimiento económico del país. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2014) en 2012 la Orinoquia aportó el 9 % del PIB nacional, dentro del cual el 63 % correspondió tan solo al departamento del Meta gracias a la solidez de la industria de hidrocarburos. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH, 2013), los Llanos Orientales aportaron el 71,1 % de la producción nacional de petróleo, del cual el 68 % fue entregado por el departamento del Meta. No obstante, concentrar la producción departamental en el petróleo ha causado conflictos sociales destacables, pues “en promedio, el 64 % de la economía de Meta, Casanare y Arauca depende del sector de hidrocarburos y la alta dependencia de este sector en la región podría desembocar en un riesgo de enfermedad holandesa” (PND, 2015, pág. 682).

A pesar del desplome internacional de precios del petróleo y materias primas, en el desarrollo de la locomotora minero-energética recae el crecimiento del PIB nacional “El subsector de hidrocarburos es el principal jalonador del PIB, con una participación del 52,3 % del total del aporte del sector en los años 2010-2013” (PND, 2015, pág. 135) y en este reposa la premisa de equidad regional que ha promulgado el Gobierno de Santos, para la que “consolidar al sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental” (PND, 2015, pág. 225) ha sido un objetivo primordial, pues los ingresos que genera son el sustento financiero de los programas sociales y de inversión en infraestructura más importantes del país.

Un modelo extractivista ‘conflictivo’

En Colombia es imposible desligar los conflictos socioambientales más conocidos de las actividades productivas de mayor incidencia, para ejemplificarlo están la desviación del arroyo Bruno por parte de la empresa El Cerrejón afectando el suministro de agua para la comunidad Wayuu, en La Guajira; o el emprendimiento aurífero de la multinacional AngloGold Ashanti en

la mina La Colosa, que pone en riesgo el agua y la producción de alimentos en el municipio de Cajamarca, en Tolima².

Esto demuestra que los conflictos que se presentan a lo largo del territorio son también el reflejo de un modelo extractivista que tiene conflictos implícitos y que, evidentemente, están poniendo en riesgo a la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y, por ende, el bienestar de las comunidades. Por ese motivo, tanto los impactos que dejan las actividades productivas a gran escala en el territorio nacional, al igual que las cargas de responsabilidad y las omisiones, deben estudiarse en detalle, máxime cuando lo que está en riesgo en los territorios es la subsistencia, es decir, la vida misma.

Rodríguez y García (2013) sostienen que la cualidad extractivista de las locomotoras de la prosperidad impulsadas por el presidente Santos se corresponde con un concepto de progreso propio del siglo XIX, el mismo que “ha conducido al deterioro ambiental continuo y ha favorecido la inequidad y la pobreza existentes en Colombia” y que “la concepción simplista de las locomotoras [...] está arraigada en una visión simplista de un territorio que es altamente complejo” (pág. 43).

Dicho modelo extractivista es objeto de intensos debates entre los que además de los conflictos socioambientales, sobresalen factores como, por ejemplo, la apertura de las fronteras para multinacionales inversionistas en el país y la carencia de políticas ambientales que, en lugar de facilitar únicamente la inversión, se concentren también en el control y fiscalización de las actividades productivas.

Al respecto, Carrizosa (2013) indica que:

“Desde hace más de treinta años las más grandes compañías internacionales mineras y petroleras han extraído enormes cantidades de níquel, carbón y petróleo en medio de la guerra, el narcotráfico y la corrupción sin que el empleo y las regalías producidas nos

² Vale destacar que en el municipio se realizó una consulta popular el pasado 26 de marzo de 2017, en la que 6.165 ciudadanos votaron NO a la minería contra 76 que votaron SÍ. Tras la decisión, la compañía anunció la suspensión de operaciones en el territorio.

hayan llevado a la prosperidad y a la paz [...] Es una falacia presentar a la minería como la solución que nunca se ha ensayado en Colombia (pág. 21)

Por su parte, Becerra (2007) indica:

El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 tuvo como principal falencia la misma que ha sido anotada para la “Visión 2019”. Su concepción del lugar que ocupa la dimensión ambiental en el desarrollo no es congruente con la incorporada en la Constitución Nacional y constituye un alejamiento de la visión que paulatinamente se venía construyendo desde la expedición de la Constitución de 1991 y de la aprobación de la Ley 99 de 1993, de creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (pág. 32).

El autor explica que aunque el Gobierno empezó a hacer uso de términos contemporáneos para referirse a la necesidad de proteger el medio ambiente en medio de la implementación de la política de desarrollo económico, “los significados que se les han atribuido se alejan de las definiciones y concepciones aportadas por la ciencia, nuestra propia legislación y los tratados internacionales ratificados por Colombia” y que dichos términos (como desarrollo sostenible, sostenibilidad ambiental y conservación, entre otros) “han acabado por ocultar ante la opinión pública los negativos cambios producidos en la política e institucionalidad ambiental del país” (Rodríguez, 2007, pág. 33).

Lo anterior es más preocupante aún si se tiene en cuenta que, precisamente, por esa incapacidad del Estado y su política ambiental, en Colombia suceden atropellos, muertes y otras tantas situaciones alarmantes como las que expone Vargas (citado en Rodríguez et. al, 2017):

El 80 % de las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios mineros-petroleros; el 87 % del desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero-energética; el 78 % de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes se cometen en áreas minero-energéticas (pág. 73).

Pero las violaciones no son únicamente contra los habitantes de aquellos territorios en disputa o con tensiones ambientales. Como es evidente, los sistemas naturales sufren a la par las consecuencias de ese modelo de desarrollo conflictivo. Al respecto, Bonilla (2015) asegura que en la búsqueda del crecimiento económico los últimos gobiernos colombianos han terminado por desconocer “los verdaderos impactos que las acciones de explotación generan en áreas de reservas ambientales, sin tomar en consideración los graves daños a los ecosistemas” (pág. 42). De hecho, en el reciente análisis del desempeño ambiental de Colombia realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (citada por Rodríguez et. al, 2017), la entidad destaca que “el tratamiento fiscal de los sectores petrolero y minero debería revisarse para determinar si sus externalidades ambientales se han tenido suficientemente en cuenta”.

Sobresalen también los fuertes impactos de la locomotora agropecuaria en la que se cuenta la actividad ganadera, sector que ocupa cerca de 40 millones de hectáreas en todo el territorio nacional y responsable del “mayor daño al patrimonio ecológico del país” (Rodríguez y García, 2013, pág. 48). Se estima que la expansión de la frontera ganadera o “potrerización” de Colombia y todos los fenómenos asociados ha resultado en la deforestación de más de cuatro millones y medio de hectáreas de bosque natural.

De manera particular, para el caso de la incursión industrial motivada por el Estado en la Orinoquia colombiana –región de interés para el presente estudio–, vale la pena mencionar que la llegada de grandes empresas con capitales destacables al territorio para participar y protagonizar el desarrollo agrícola ha causado “una profundización de las desigualdades en el acceso y tenencia a la tierra” en el marco de un modelo que “excluye a los productores locales (medianos y pequeños) y no toma en cuenta consecuencias como desplazamiento de los campesinos, profundización de la concentración de la tierra, la autosuficiencia alimentaria y, sumado a esto, la intensidad del conflicto armado en estos territorios” (Devia, 2015, pág. 88).

Al respecto, Rodríguez y García (2013) lamentan que en el marco de la transformación productiva de la Orinoquia no se reconozca la complejidad de sus ecosistemas y se promueva su ocupación con la industria de agrocombustibles con base en el supuesto de que esta región es un

“lienzo blanco, sin ninguna restricción”, lo cual podría causar “daños irreversibles en sus ecosistemas y detonar un declive de los servicios que estos prestan, como el agua, la diversidad de especies de flora y fauna, y el paisaje” (pág. 53).

También vale la pena destacar algunos de los aspectos contemplados al respecto por Rodríguez *et. al* en su publicación *La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo* (2017). Por ejemplo, los autores destacan que el crecimiento de la industria extractivista en Colombia no solo ha tenido altos costos económicos, sino también altos costos ambientales; que, contrario a lo que se tiende a asumir, “los beneficios económicos no han sido tan generosos como se esperaba” (pág. 68); y la alta dependencia del país de las actividades extractivas “es muy inestable para el desarrollo del país y puede poner en vilo los proyectos e inversiones requeridas para el posacuerdo” (pág. 69).

No obstante las explicaciones anteriores y aún de cara a la crisis de precios del petróleo y materias primas, el Gobierno Nacional ha insistido en su empresa valiéndose de argumentos cuestionables como el aparente dinamismo que imprime el extractivismo a la economía colombiana, la posibilidad de invertir regalías en proyectos de carácter social e infraestructura, y el impacto positivo de estas actividades en la generación de empleo.

Si bien dichos beneficios se presentan en justas proporciones, el último no es necesariamente fiel a la realidad. Por ejemplo, el mismo Gobierno reconoce que la industria petrolera no es una fuente de empleo directo significativa, pues según cifras del Ministerio de Minas “el sector aporta menos del 1% del empleo total” (UPME, 2015, pág. 10), al ser la única industria en la economía nacional que para su desarrollo requiere mayor mano de obra calificada que no calificada. De igual manera, según sostiene Diana Rodríguez³, investigadora de Dejusticia, las industrias minera y de hidrocarburos, al ser intensivas en capital y tener un alto nivel de capacitación, su nivel de contratación de mano de obra es muy bajo. Tan solo el rubro de *otros* – dentro del que se encuentra inserto la minería– aporta únicamente el 2,7 % del empleo total.

³ En medio de su intervención en el debate *¿Tiene sentido que se pueda prohibir la minería en cualquier lugar? Sí o No*, realizado en la Universidad Javeriana el 4 de abril de 2017.

Todo esto corrobora que aquel modelo de desarrollo extractivista que viene implantándose en Colombia hace algunas décadas y con mayor empeño desde el año 2002 –con la decisión gubernamental de potenciar la industria minero-energética y la agroindustria en el país– ha resultado conflictivo desde distintos puntos de vista, empezando porque la idea de desarrollo económico se oponga de manera radical a las percepciones de sostenibilidad y protección del ambiente natural de las comunidades que habitan los territorios en donde las apuestas por estos sistemas industriales han sido más notorias; y teniendo en cuenta que “la exploración, explotación y distribución de hidrocarburos es una de las actividades extractivas que mayor daño ambiental ha producido en la historia del país” (Rodríguez y García, 2013, pág. 55).

Los temas de sostenibilidad, cuidado y protección del medio ambiente y la biodiversidad se incorporaron por primera vez como elementos transversales –y no aislados– a la política de desarrollo económico de Colombia en el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2014-2018. No obstante, si se mira en retrospectiva, las tensiones sociales por temas relacionados con la agroindustria y la industria extractiva parecieran incrementarse en ese mismo periodo, lo cual resulta más preocupante si se suman los escenarios de conflicto y posacuerdo como variables determinantes en el modelo económico y de desarrollo que se insiste en potenciar en Colombia.

Con lo anterior, cabe la pregunta de si ¿el desarrollo económico basado en el extractivismo y la agroindustria es el mejor modelo para garantizar bienestar social, cultural y ambiental en Colombia? Esto, teniendo en cuenta las críticas basadas en la evidencia que giran en torno al mismo y los conflictos socioambientales que, en su mayoría, están directamente relacionados con actividades productivas que materializan este modelo, y la necesidad de incorporar en la práctica industrial nacional el concepto de desarrollo sostenible⁴.

Desarrollo sostenible, concepto en disputa

En la actualidad aún tiene validez aquel llamado de atención que hizo Rodríguez Becerra hace diez años: que el término sostenibilidad y todos sus derivados se han incorporado casi

⁴ Sintetizado en el Informe Brundtland (1987) de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, como aquel “que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

naturalmente al discurso gubernamental de desarrollo económico sin tener mayor eco. Eso no significa que el concepto en sí no esté lo suficientemente abordado ni desarrollado, sino que en la práctica económica y productiva colombiana, pareciera no haberse encontrado la manera correcta de incorporarlo.

Lo cierto es que la discusión sobre el concepto en este punto de la historia del país ha trascendido y se ha desplazado hacia otros escenarios que resultan urgentes, como bien pueden ser el desarrollo económico enmarcado en las lógicas del cambio climático o los mismos conflictos ambientales. No obstante, no se puede perder de vista el hecho de que la sostenibilidad hoy en día está presente en todo y en nada al mismo tiempo, y que es un término *comodín* que es fácilmente adaptable a diferentes contextos y con el que toda industria o proceso se quiere blindar bajo las lógicas de la responsabilidad social y ambiental.

Por esto, para efectos del presente trabajo no haría falta desarrollar un marco conceptual para intentar establecer definiciones de desarrollo sostenible que tengan relevancia en el contexto colombiano. Sin embargo, vale la pena ver en retrospectiva algunos de los aportes teóricos sobre el concepto con el fin de contar con elementos de juicio que permitan hacer un análisis posterior sobre la manera en que contrastan con el modelo de desarrollo económico que se impulsa en Colombia desde hace dos décadas.

Por ejemplo, González (1996) entendió que el ecosistema tiene un potencial productivo que puede aprovecharse y que los seres humanos pueden transformar los recursos que le ofrece el medio natural en beneficio propio. Aunque indica que el desarrollo sostenible “es una aspiración, una idea que solo se materializa en la práctica social concreta”, lo define como la satisfacción de las necesidades humanas a partir del encuentro entre objetivos de producción y conservación en un entorno en el que “se comprende la lógica de funcionamiento de la base ecosistémica” (pág. 72) estableciendo límites justos al ritmo de crecimiento y construyendo una estrategia de interacción autorregulada entre los sistemas natural y social.

Sin que aún la agroindustria y los monocultivos hubieran recibido un espaldarazo como el que tuvieron en 2006, hace dos décadas, Posada y Vargas (1997) planteaban que Colombia tendría

oportunidades de proyectar un desarrollo sostenible en la medida en que el Estado cumpliera con su obligación de “diseñar políticas que restrinjan los límites de la especialización, como una forma de evitar el efecto maligno del comercio sobre el medio ambiente y que preserven la riqueza biológica” (pág. 346), pues consideraron que la especialización tenía un efecto maligno sobre el medio ambiente.

En aquel momento, cuando el concepto de desarrollo sostenible no estaba del todo delimitado, los autores lograron definir unos principios elementales para su abordaje. Por ejemplo, que el planeta tierra era el epicentro de las actividades económicas, pero que sus recursos eran limitados; que el desarrollo económico debía estar en función de las necesidades y expectativas de generaciones presentes y futuras; que la preservación de los sistemas naturales, en su calidad de proveedores, debía ser una obligación; que las comunidades debían ser protagonistas del desarrollo económico sostenible; y que no debían omitirse los costos verdaderos del uso de recursos naturales, entre otros (Posada y Vargas, 1997, pág. 280).

Un par de años antes del inicio del nuevo siglo, Julio Carrizosa Umaña anticipaba que la sostenibilidad en Colombia se convertiría en un término de moda que se incorporaría al lenguaje gubernamental y a las políticas públicas, sin que se comprendiera que más que un concepto, la sostenibilidad era un proceso. Para Carrizosa (1998), el país saltó “por encima del desarrollo teórico del concepto a una posible aplicación del mismo a nivel de las políticas del estado” (pág. 29). No obstante, definió el término como “la propiedad inherente de un proceso que lo hace perpetuo en un sistema dado” y entendió al desarrollo sostenible como “aquel que asegura a perpetuidad la vida humana en el planeta” (pág. 29).

Por su parte, Pérez y Rojas (2010) establecieron que:

La planificación, gestión y ejecución de la política pública para el desarrollo sostenible en Colombia, debe basarse en un análisis ecosistémico desde el punto de vista de la *sostenibilidad fuerte* (en que el crecimiento económico debe ser compatible con la dinámica de crecimiento de los recursos naturales renovables y el desarrollo de recursos y fuentes energéticas alternativas que posibiliten la sostenibilidad de los recursos no

renovables. pág. 11) que permita entender tanto el papel de Colombia como país periférico en los arreglos políticos y económicos internacionales, como la presencia de ecoregiones donde existen problemas ambientales específicos que es importante resolver a través de la política pública” (pág. 14).

A simple vista –sin contar aún la percepción de algunas poblaciones que están inmersas en medio de proyectos de desarrollo económicos (que se presentará en capítulos posteriores de este trabajo)–, los conceptos teóricos dejan entrever que el modelo de desarrollo económico en Colombia –sintetizado en apartes anteriores– no responde de forma fiel a los preceptos teóricos que se esbozaron para el país.

Además, que el hecho de que Colombia se haya consagrado a la Declaración de Río de Janeiro en 1992 mediante la ley 99 de 1993 no significa necesariamente que haya logrado un enfoque de sostenibilidad sistémico e integral en la manera de proyectar el desarrollo económico. Conclusión que resume muy bien Gutiérrez Rey (2010) al establecer que “las circunstancias actuales de la planificación territorial en Colombia no generan ni permiten aún las condiciones adecuadas para que el desarrollo sostenible se establezca como el fin o la meta de la planificación, la ordenación y la gestión territorial” (pág. 252).

La coyuntura del cambio climático y la necesidad de adaptación a partir de la comunicación

Según indica la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático⁵ (2015) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, en el futuro Colombia se verá afectada por el cambio climático de diferentes maneras en cada una de sus regiones. Se calcula que para finales del siglo XXI la temperatura media anual aumente en 2,14°C como consecuencia del aumento de los niveles de emisiones globales de gases de efecto invernadero.

⁵ Considerada la principal fuente de información y conocimiento sobre los efectos del cambio climático en Colombia, para apoyar la toma de decisiones de sectores y regiones.

Cuando se habla de cambio climático hace falta entender que el aumento de temperatura por sí solo no es el fenómeno que debería preocupar, sino su capacidad de acrecentar otras problemáticas. Por ejemplo, ese aumento de temperatura sumado a otras variables como el cambio en el uso del suelo crea sinergias como “el incremento de los procesos de desertificación, disminución de la productividad de los suelos agrícolas y la pérdida de fuentes y cursos de agua” (IDEAM, 2015, pág. 14).

De igual manera, es necesario establecer que, en medio de la coyuntura y las múltiples alarmas por el cambio climático, en Colombia se tiende a desestimar que este es un motor directo que intensifica la transformación y pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y, como consecuencia, las entidades responsables no están diseñando planes que permitan gestionar los riesgos asociados a este fenómeno para disminuir la vulnerabilidad asociada al colapso de los ecosistemas en el país.

Al respecto, la PNGIBSE (2012) indica, no solo que la respuesta institucional a la pérdida de servicios ecosistémicos parece lenta, sino también que:

Los esfuerzos de los sectores públicos y privados por contemplar los riesgos asociados a sus actividades son todavía incipientes y los pocos esfuerzos existentes se centran solo en algunas temáticas como por ejemplo el cambio climático y la deforestación, dejando de lado los riesgos asociados al desabastecimiento de servicios ecosistémicos originados por otros motores de transformación y pérdida como la fragmentación y degradación de ecosistemas (especialmente aquellos no boscosos); las invasiones biológicas; la contaminación y la sobreexplotación. (pág. 58-59).

En la misma línea, Andrade (2013) reconoce que en Colombia hay un déficit de gestión ambiental territorial enfocada en los servicios ecosistémicos (pág. 154) y para el caso de la Orinoquia, explica que la política actual del país pareciera no reconocer que –aunque su transformación productiva tiene un potencial económico destacable– esta región está ante el riesgo inminente de sufrir un desbalance en sus servicios ecosistémicos (pág. 139).

Según el autor, ese “vacío de desarrollo en la región de las políticas de conservación de biodiversidad” implica retos importantes para la gestión de la biodiversidad en medio de los procesos de transformación de este vasto territorio⁶. Motivo por el que exhorta a dar una mirada directamente a las regiones, teniendo como base aspectos ambientales determinantes en el ordenamiento de los territorios desde las perspectivas de los servicios ecosistémicos y el cambio global ambiental (pág. 145).

Dichos planteamientos permiten esbozar que hace falta poner en contexto la coyuntura del cambio climático y que ante la inminente necesidad de mitigación y adaptación, la planificación del territorio es una estrategia vital que permite abordar el fenómeno desde distintos frentes. Pero dicha planificación para concebir regiones sostenibles y resilientes “no puede concretarse en ausencia de conocimiento” por lo que aumentar el conocimiento durante el proceso de transformación de un territorio deberá ser una constante (Andrade, 2013, pág. 139-140).

Aún así, el cambio climático es una realidad inminente que requiere acciones urgentes, más en un país de alta sensibilidad ante sus inevitables impactos como Colombia, considerado el segundo más vulnerable de Suramérica (Allison *et al.*, 2009); vulnerabilidad “acrecentada por la destrucción y el deterioro de los ecosistemas de bosques, páramos y humedales” (Rodríguez y García, 2013, pág. 40).

En este punto de no retorno, Richardson, Steffen y Liverman (2011) proponen que dichas acciones urgentes empiecen a abordarse desde la perspectiva de la adaptación, es decir, hacer ajustes en los sistemas ecológicos, sociales y económicos que impliquen cambios en aquellos procesos, prácticas y estructuras determinantes en la incidencia del fenómeno (pág. 388). Los autores –que distinguen seis tipos de adaptación: preventiva, autónoma, planificada, privada, pública y reactiva– sostienen que la probabilidad de éxito de las acciones de adaptación está supeditada de forma exclusiva al trabajo en equipo e interinstitucional con un enfoque en la escala local, por lo que aseguran que la comunicación para el conocimiento es un factor imprescindible que permite la mejor toma de decisiones respecto al bienestar social, ambiental y económico y, por ende, frente al cambio climático (pág. 404-406).

⁶ La Orinoquia colombiana ocupa el 30 % del territorio nacional.

Es por lo anterior que la comunicación, entendida como un proceso democratizador, es para este trabajo no solo un eje primordial sino también un fin. Es decir, a partir de la información recabada para el desarrollo de esta investigación se busca fomentar procesos comunicativos que sirvan como cimientos de sociedades más conocedoras de sus territorios, con una mayor conciencia ambiental y capaces de asumir nuevas actitudes políticas para la defensa de sus derechos y sus territorios.

La comunicación es también la herramienta que refuerza la necesidad de pensar en temas urgentes como: la importancia de la biodiversidad, el reconocimiento de los servicios ecosistémicos y el conocimiento de los impactos que causan las actividades extractivas en territorios frágiles y socialmente vulnerables. Al tiempo, esta permite socializar y dar a conocer diferentes iniciativas que surgen en determinados territorios para empezar a adaptarse al cambio global, lo cual debería fomentar en las comunidades una actitud crítica e innovadora al momento de tomar de decisiones sobre sus territorios y de concebir nuevas maneras de adaptación.

Vale aclarar, como lo indica Galindo (2014) que aunque el proceso comunicativo es el que todo lo dinamiza, la información es un insumo vital en dicho proceso, imprescindible para lograr acuerdos, negociar y conseguir las transformaciones y movimientos democráticos. Algo necesario para la planificación de un territorio y la adecuada gestión de los recursos naturales que, por ende, puede aumentar el poder de incidencia y de decisión respecto a proyectos productivos de gran envergadura y alto impacto socioambiental.

Este propósito se puede entender a partir de la idea de racionalidad comunicativa propuesta por Habermas (en Rad, P. R, 2000) en su teoría de la acción comunicativa. Es decir, procurando mantener aquel principio de alteridad donde hay igualdad de condiciones en el debate o la toma de decisiones, igualdad que se consigue gracias al uso de información. Así, la comunicación se convierte en una manera de dirimir conflictos a través de información para lograr interacción, participación y movilización social en torno a cuestiones relevantes que ponen en peligro el bienestar de un territorio y sus pobladores.

Capítulo II

Marco metodológico

El comunicador mediador y el Otro, protagonistas de la investigación

El diseño metodológico planteado para el presente trabajo de investigación atiende a la necesidad de consolidar un proceso comunicativo que no se ciña exclusivamente a recolectar y presentar la información recabada, sino que propicie en el lector una actitud reflexiva en torno a los conflictos socioambientales asociados a las actividades productivas que se presentan en el territorio, y que le permita ver dichos conflictos en perspectiva, bien sea escalándolos a nivel nacional o aterrizándolos en otro contexto local o regional que presente variables similares.

Para esto, la noción de *comunicador mediador* desarrollada por Jesús Martín-Barbero (2011) funcionó a manera de hoja de ruta para asumir la actitud de investigadora en el territorio y con las comunidades. Según el autor, el comunicador mediador es protagonista dentro del proceso investigativo y está en capacidad de integrar la información con la cultura de una manera responsable, incorporando la crítica y el análisis al campo de acción y procurando diseñar alternativas de construcción de democracia. Aquel ideal de comunicador es, para efectos de este trabajo, un ideal de investigador, pues está en capacidad de leer e interpretar con la mayor agudeza posible el contexto social al que se suscribe su proyecto de investigación.

En términos de Wolton (2009), el comunicador actúa bajo un principio inexorable de alteridad, buscando interactuar con el otro en condiciones de igualdad que permitan crear vínculos sociales fuertes, un proceso en el que la información es un medio –mas no un fin– imprescindible. Entender a la comunicación y la información como potenciales herramientas de democratización es vital para el abordaje metodológico de este trabajo, pues se comprende que pueden llegar incluso a tener una cualidad emancipadora en beneficio de las sociedades contemporáneas.

En esa línea, la relevancia del *Otro*, como el sustrato vital para la concepción y diseño del proyecto de investigación, es indiscutible. Esto, bajo la visión de Schutz (1999), quien defiende la teoría de que existen tantos universos como individuos y plantea que solo mediante la participación e interacción social es posible conocer una realidad social determinada y entender las motivaciones del *Otro*. También fue elemental para el desarrollo de este trabajo procurar constantemente un encuentro y una conversación con ese *Otro* entendiéndolo –como lo hizo el periodista Kapuściński (2007)– como un sujeto “de mundos diversos y contradictorios, un ser amalgamado, de formas y rasgos imprecisos, fluctuantes” (pág. 55).

El encuentro con aquellos *Otros* –aparentemente desconocidos y hostiles– no requirió únicamente de voluntad y esfuerzo, sino también de un intenso trabajo en el terreno que sirvió para aceptarlo en su calidad de diferente, reconociendo que “en esa diferencia, en esa alteridad, residen la riqueza, el valor y el bien” (Kapuściński, 2007, pág. 56).

Precisamente la interacción, el reconocimiento y dar a conocer a esos *otros* y sus concepciones frente al tema de investigación, fueron elementos vitales para el desarrollo del presente trabajo.

Pretextos sobre la unidad de análisis

Teniendo en cuenta que el objetivo que se persigue con esta investigación es presentar las causas, actores involucrados y manifestaciones de los conflictos socioambientales asociados a las actividades productivas que se presentan en la cuenca del río Orotoy, al igual que los impactos que estas tienen en los ecosistemas y recursos naturales, el enfoque metodológico del trabajo es cualitativo, en tanto permite describir y analizar un contexto estructural y situacional en torno a aquellos conflictos que se presentan en esta pequeña pero representativa porción de la Orinoquia colombiana.

Cabe resaltar que si bien la información presentada y los datos no son generalizables de manera exacta en los contextos regional y nacional, la selección de la cuenca del río Orotoy como unidad de análisis responde al hecho de que este territorio, compuesto por los municipios de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta, presenta signos

de transformación acelerada que inciden directamente en sus ecosistemas y lo hacen más vulnerable ante el cambio climático.

Entre dichos signos de afectación sobresalen la alta demanda del agua, un recurso cada vez más escaso; la fragilidad de los ecosistemas y, por ende, el riesgo de los servicios ecosistémicos que estos proporcionan; la poca capacidad de las comunidades para adaptarse ante los desafíos que supone el cambio climático y la debilidad en los procesos de gobernanza del agua. Esos factores y otros tantos que se verán reflejados más adelante son una pequeña muestra de la situación general del 30 % del territorio nacional. De ahí, la constante referencia no solo al departamento del Meta, sino de manera particular, a la región de la Orinoquia.

Esta justificación es la misma que en el año 2013 motivó al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt a desarrollar el proyecto *Fortalecimiento de las capacidades de adaptación social y ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Orotoy, Colombia* (Proyecto Orotoy). Iniciativa en la que trabajé como consultora de comunicaciones durante el año 2016 y que me permitió un acercamiento al territorio desde diferentes ópticas: la de la academia, la institucionalidad, los sectores productivos, la comunidad y, de manera especial, la de los niños de la cuenca.

Sin duda, hacer parte de dicho proyecto, aún cuando fuera en su etapa final, fue determinante para la selección no solo del tema de conflictos ambientales, sino para aterrizarlo igualmente en el territorio en cuestión. También para determinar el enfoque de presentación del trabajo, pues una vez dimensioné la importancia que reviste la socialización de resultados de un proyecto de tal magnitud como el que –con apoyo de otras instituciones– emprendió el Instituto Humboldt, fue claro que desde el campo de la comunicación los aportes podían tener la difusión y alcance que no siempre logran los informes científicos o técnicos de resultados de investigación.

En esa línea, las herramientas seleccionadas para la recolección y análisis de información y datos fueron la etnografía, las entrevistas en profundidad semi-estructuradas y la revisión bibliográfica de fuentes de información primarias.

Etnografía y la necesidad de construir relaciones de confianza

El conocimiento previo sobre las dinámicas sociales y productivas en el territorio, permitió identificar rápidamente la actitud de desconfianza de los pobladores frente a las instituciones y, en general, ante cualquier tipo de intervención de agentes externos en el territorio, pues la cuenca del río Orotoy, al tener una alta presencia de actividades industriales, se ha convertido en un territorio sobre-intervenido. Por ende, la tarea de construir confianza fue una de las prioridades en el marco del Proyecto Orotoy y, para efectos de este trabajo, mantener esa confianza también fue vital.

Se definió entonces que un abordaje etnográfico era preciso para facilitar el encuentro cara a cara con los pobladores con el fin de conocer sus historias y percepciones. Reivindicar la etnografía como una forma de conocimiento y no únicamente como un método o herramienta de investigación facilitó el acercamiento con la comunidad que habita la cuenca. Esta noción, desarrollada por Clifford Geertz (1992), permitió entender que la etnografía –más allá de representar el establecimiento de relaciones, seleccionar informantes, trazar mapas o llevar un diario– es un esfuerzo intelectual, una *descripción densa* en la que se organizan estructuras de significados y se resignifican interpretaciones entrelazadas.

Así, se procuró que la incursión al territorio se hiciera precisamente a través de las interpretaciones de sus pobladores con el fin de consolidar una radiografía general de la cuenca en función de la cotidianidad de las personas, su relación con cada ecosistema, la percepción que tienen sobre los cambios del lugar que habitan, las maneras que emplean para co-habitarlo con proyectos productivos y su actitud frente a los conflictos socioambientales. Esto, no solo bajo la premisa de observación-participación, sino, de manera particular, como lo proponen Hammersley y Atkinson (1994) manteniendo una actitud de igual con los *Otros* para conocer los modos rutinarios con los que dan sentido al mundo, lo cual se logró mediante acciones sencillas como compartir la mesa, disfrutar de un paseo al río o pasar la noche en sus humildes hogares.

Aunque el acercamiento al territorio lo había hecho en diferentes visitas como parte de mi trabajo en el Proyecto Orotoy –algo que permitió identificar lugares, actores y percepciones– el

trabajo de campo enfocado únicamente en el desarrollo de este trabajo se hizo durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 en tres visitas al lugar: dos de diez días de duración y una de siete, durante los días 18 a 27 de noviembre, 1 a 10 de diciembre y 12 a 18 de diciembre. Además, se hizo una visita adicional el 12, 13 y 14 de marzo de 2017 con el fin de obtener material fotográfico y de video adicional.

Los métodos complementarios

Respecto a la consulta de fuentes primarias es importante destacar el acceso a la información y documentos inéditos de síntesis de investigación resultado del Proyecto Orotoy. Se consultaron seis documentos enfocados en la cuenca del río Orotoy que abarcan los siguientes temas: historia ambiental, caracterización de los sistemas socioecológicos, análisis territorial, análisis sectorial y de política, sostenibilidad territorial y gobernanza. Además, otra de las fuentes de información primordiales fue el documento Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (VIBSE) Cuenca del río Orotoy – Meta, también inédito.

Esta información suministrada por el Instituto Humboldt –principal referente a nivel nacional en investigación sobre recursos biológicos– fue el eje primordial sobre el que giró la contextualización de los conflictos socioambientales y sus manifestaciones en la región. Además, el material científico sirvió como la herramienta primaria de referencia para explicar y contrastar las percepciones recogidas en el proceso de indagación con los diferentes actores.

Durante esa etapa inicial de revisión bibliográfica de fuentes de información primarias también se consultaron noticias, reportajes y artículos del año 2000 en adelante, relacionados con el territorio en cuestión y que aparecieran en los medios de comunicación impresos de mayor reconocimiento en el país, como son el diario El Tiempo, El Espectador, Portafolio y Dinero.

Los criterios tenidos en cuenta para registrar la información de dichas publicaciones fueron: que el contenido estuviera relacionado con actividades productivas en la región, especialmente la industria petrolera y palmera; que hicieran mención a conflictos ambientales o socioambientales en cualquiera de los municipios de la cuenca, el Meta o la Orinoquia colombiana; y que dieran

cuenta de disputas por el agua en el territorio. De manera especial se revisó el cubrimiento que dieron dichos medios al derrame de limpiador orgánico sobre el río Orotoy perpetrado por la empresa petrolera del Estado, Ecopetrol, en el año 2009.

Por su parte, como pieza fundamental del trabajo etnográfico se realizaron entrevistas en profundidad semi-estructuradas. Con los pobladores de la región, dichas entrevistas se realizaron de acuerdo con la perspectiva constructivista propuesta por Rosana Guber (2001), que las concibe como una relación social en la que se asume que la información suministrada por el entrevistado es la realidad que él mismo construye, un ejercicio en el que la norma más importante es la buena comunicación (pág. 77), pero que, para efectos del presente trabajo, era también darle especial cabida a los conocimientos locales y tradicionales de los habitantes de la cuenca.

En total, se hicieron entrevistas a 12 miembros de la comunidad seleccionados bajo criterios variados entre los que sobresalen: tener alguna posición de liderazgo en su comunidad inmediata, habitar en el territorio por un tiempo considerable y haber sido afectado o beneficiario de las actividades productivas que se realizan en la región.

Las preguntas que se hicieron estuvieron enfocadas en su percepción sobre el territorio, la relación que tienen con el entorno y los recursos naturales, la incidencia de actividades productivas en su bienestar, los conflictos ambientales que se presentan en la zona, las perspectivas futuras y sus conocimientos e iniciativas de adaptación respecto al cambio climático.

Contrario al caso de los miembros de la comunidad, las entrevistas hechas a representantes de sectores productivos se hicieron bajo el enfoque clásico conceptualizado por Guber (2011), en el que la información solo se considera válida en tanto pueda verificarse mediante chequeos o triangulaciones y las respuestas correspondan de manera fiel a la realidad (pág. 76).

Para este ejercicio se contemplaron las cuatro actividades económicas que priman en el territorio: explotación de hidrocarburos, industria de aceite de palma, ganadería y cultivo de arroz. En total,

se hicieron 8 entrevistas: a un representante de Ecopetrol, a un arrocero de la región, a un representante de la industria palmera y a cinco ganaderos.

Las preguntas hechas a estos actores estuvieron enfocadas en los impactos socioambientales que tienen sus actividades productivas en el territorio, la relación de conflicto que tienen con las comunidades, sus perspectivas futuras y las medidas para enfrentar los desafíos del cambio climático en pro del buen desempeño de sus actividades.

Con el interés de ampliar los conocimientos técnicos sobre la región, se realizaron también entrevistas a representantes de instituciones con alta incidencia en el territorio, como son la Universidad de los Llanos, el Instituto Humboldt y la Corporación Autónoma Regional – Cormacarena. Teniendo en cuenta los perfiles académicos de los entrevistados, se consideró que sus apreciaciones eran también en calidad de expertos. No obstante, esto podría percibirse como una limitación de la investigación, pues sus respuestas en todos los casos demostraron un inevitable sesgo institucional, sin que ello signifique que se viera comprometido su rigor científico. Además, para un total de cuatro entrevistas, en este grupo se contempló una adicional con una ONG. La seleccionada fue la organización ambientalista Censat Agua Viva, que por varios años ha acompañado un proceso de movilización social de oposición directa a la industria petrolera en la región.

Las preguntas para estas personas giraron en torno a su conocimiento sobre el territorio, las manifestaciones de los conflictos socioambientales, la afectación de recursos naturales y servicios ecosistémicos por las actividades productivas, la identificación de actores con incidencia en la región y sus responsabilidades, y los retos de escenarios inmediatos y futuros de cambio climático.

Una aproximación desde el periodismo ambiental

Retomando la reflexión alcanzada en apartados anteriores en torno al potencial de la comunicación para visibilizar resultados de investigación y ampliar su espectro de alcance,

resultó obligatorio establecer una manera idónea de presentar los resultados de esta investigación.

Además, vale la pena tener en cuenta la relevancia a nivel nacional del tema abordado, por lo que es vital producir conocimiento e información que permita a comunidades, líderes, entes y representantes tomadores de decisiones contar con elementos que les permitan definir rutas para gestionar sus territorios y conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, máxime, si se tiene en cuenta que “gran parte de la información y conocimiento generado se produce en un lenguaje, idioma y formato que parece satisfacer, casi exclusivamente, las necesidades de la comunidad científica” (PNGIBSE, 2014, pág. 48).

Ante tal reto, el periodismo aparece como una oportunidad de cumplir aquel propósito de informar –en profundidad y con un lenguaje general y entendible– a un público amplio y no especializado, temas que le pueden resultar cruciales como, en este caso, el bienestar comunitario, los impactos que causan las actividades productivas en un territorio, la conservación y protección de la biodiversidad, la incidencia del cambio climático en la acentuación de conflictos socioambientales y la importancia del desarrollo de iniciativas locales de adaptación a este fenómeno.

Lo anterior cobra aún más valor si se tienen en cuenta aspectos trascendentales como la coyuntura nacional de posacuerdo, la ola de consultas populares relacionadas con proyectos extractivos en diferentes rincones de Colombia, y el hecho de que los temas relacionados con el medio ambiente se han ubicado en una posición destacable en las agendas mediáticas nacionales e internacionales.

Por esto, el capítulo de resultados a continuación se presenta a manera de reportaje periodístico bajo la línea emergente en el país de periodismo ambiental, con el objetivo de dar a conocer a cualquier lector interesado información clave sobre conflictos socioambientales en la Orinoquia colombiana y los impactos de las actividades productivas que allí se llevan a cabo, lo cual le permitirá asumir una posición informada y crítica sobre el tema y, eventualmente, tomar decisiones para escenarios presentes y futuros.

La selección de este enfoque responde al ideal de periodismo ambiental consignado en la Guía Agenda Verde (Consejo de Redacción, 2015) como una herramienta de información que permite que una comunidad:

Conozca los riesgos que corre en los territorios donde habita, la prevención, el buen uso del agua, la importancia de ecosistemas como los páramos y los bosques, las implicaciones del mal manejo de basuras y de la Guía para el cubrimiento de sucesos ambientales de contaminación, las obligaciones que tienen los entes gubernamentales y de control de sus territorios, así como las empresas y la sociedad civil (Restrepo, 2015, pág. 19).

Además, porque en el siguiente reportaje también se presentan iniciativas de adaptación al cambio climático que sirven como ejemplo para otras comunidades que afrontan conflictos socioambientales similares a los que se presentan en la cuenca del río Orotoy y les dan ideas para diseñar sus propias alternativas adaptativas.

Este trabajo se presenta también en una plataforma interactiva alojada en Internet como un reportaje multimedia, género periodístico mediante el cual se adapta el reportaje a la red, valiéndose de sus cualidades comunicativas “en función de una intencionalidad determinada [...] La convivencia del texto escrito, los sonidos, las imágenes fijas y en movimiento en un mismo mensaje, apunta a elevar al máximo el alcance estructural del género” (Marrero, 2008).

Más allá de mi formación profesional como periodista, presentar los resultados de este trabajo a través de un reportaje multimedia en una plataforma de Internet responde a un profundo convencimiento de que la red es una herramienta que facilita la articulación, el aprendizaje y la visibilización de temas trascendentales, en esta oportunidad, con una visión descentralizada que se localiza en el ámbito regional colombiano.

Además, porque este tipo de herramientas brindan al usuario una libertad que cualquier otro medio no proporciona, como lo explica Obando (2016), aquel *Ecosistema tecnológico* que surge con Internet “transmite todo tipo de símbolos y mensajes sin un único centro de control, lo que

favorece una comunicación horizontal y globalizada que repercute en el papel cada vez más protagónico que empiezan a tener los usuarios” (pág. 66).

En consecuencia con lo anterior y, como lo proponen Savage y Vogel (2014), es muy probable que el multimedia moldee el mundo del futuro, por lo que desarrollar, integrar y presentar textos, animaciones, gráficos, sonidos o videos en cualquier combinación es sinónimo de dar una mirada hacia el futuro y concebir alternativas de tecnología digital enfocadas en una labor de tal trascendencia como es el periodismo.

En términos personales, asumir el reto de presentar los resultados de este trabajo a través de un reportaje multimedia es también asumir aquella *polivalencia del periodista* a la que se refiere Scolari (2008), mediante el diseño y desarrollo de contenidos informativos para nuevas plataformas. Es la decisión de adaptarme a un nuevo entorno, igual que aquellos pobladores de la cuenca del Orotoy que empiezan a adaptarse al cambio climático y a las condiciones de un territorio que se transforma.

Capítulo III

(Léalo en: www.historiasdelorotoy.com)

Historia de un ‘incidente’

En la tarde del 16 de abril de 2009 la historia y las aguas del río del río Orotoy cambiaron para siempre. Ecopetrol, que vertía el agua resultante del proceso de extracción de petróleo realizado en las estaciones aledañas al río, derramó por accidente limpiador orgánico sobre el afluente en el municipio Castilla la Nueva, en el departamento del Meta.

El descuido de la empresa, además de afectar 20 de los 54,5 kilómetros del río, y causar la mortandad de cientos de peces (se acopiaron 320 kg), mantuvo en alerta a los pobladores de la zona, especialmente de Barroblanco, Sabanas del Rosario y Caño Grande, quienes a pesar de la inmediata puesta en marcha de un plan de contingencia, no pudieron abastecerse del líquido – vital para consumo doméstico, ganadería y riego de cultivos– durante varias semanas posteriores al evento, viéndose obligados a hacer largas filas ante carrotanques dispuestos por Ecopetrol en los que se les suministraban limitadas cantidades de agua.

Mientras para los pobladores y productores de la zona, que se abastecían del agua del Orotoy, esta era posiblemente una de las peores tragedias de los últimos años; para Ecopetrol y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial lo acontecido fue tan solo un *incidente* –término que en la legislación laboral se refiere a un evento con potencial de haber sido un accidente en el que no hubo lugar a lesiones o daños, y para el que la Real Academia contempla tres definiciones⁷: “1. Adj. Que sobreviene en el curso de un negocio y tiene con este alguna relación; 2. Disputa, riña, pelea entre dos o más personas; 3. En un proceso, cuestión distinta de la principal, pero relacionada con esta, que se resuelve a través de un trámite especial”–.

⁷ Real Academia Española. Incidente. Diccionario de la lengua española. Recuperado de: <http://dle.rae.es/?id=LEEIBI5> el 20 de enero de 2017.

El error protocolario habría sucedido en medio de un proceso de mantenimiento realizado a la tubería de la estación Castilla II –según declaró en su momento el Superintendente de operaciones de Ecopetrol, Rafael Alfonso Castillo Arbeláez (El Tiempo, 2009)–.

En la resolución 0809 mediante la cual el ministerio, 19 días después notificó sobre el inicio de la investigación respecto al suceso, indica que Ecopetrol presentó el 17 de abril un “informe inicial del incidente ocurrido el día 16 de abril de 2009, en relación con el derrame de limpiador orgánico en el río” y que “teniendo en cuenta la gravedad del incidente” el Ministerio le solicitó telefónicamente a la empresa un informe sobre el plan de contingencia que estaba implementando, ante lo cual la empresa solo proporcionó datos preliminares sin especificar el origen del derrame, ni las características y cantidad de producto derramado.

No obstante, en el mismo documento se indica que Wilson Yovani de la Cruz, un ingeniero de la compañía, explicó mediante un correo electrónico que “se presentó un incidente de tipo ambiental debido a la afectación de las aguas asociadas a la producción en el sistema de vertimiento de la Estación Castilla por un limpiador de origen orgánico. Como consecuencia de esta situación se presentó una alteración sobre las condiciones naturales del cuerpo receptor (río Orotoy) del vertimiento de la Estación Castilla, ocasionando la muerte de peces aguas abajo del punto de vertimiento”.

De igual manera, en su informe, de la Cruz relató que la primera medida de contingencia fue instalar barreras de contención, aplicar líquido biodispersante en los 20 kilómetros del río afectados por el derrame, y recoger y almacenar los peces muertos que flotaban por las aguas del afluente. Además, el ingeniero explicó que se derramó una cantidad no superior a 46 barriles de SELECT®EC9010A, un producto de naturaleza orgánica que usualmente se emplea en campos petroleros para limpiar líneas de flujo y equipos impregnados con hidrocarburos.

Según notificó Minambiente, con este derrame, Ecopetrol incumplió cinco obligaciones del plan de manejo ambiental como: manejo indebido de residuos líquidos; protección de ecosistemas y recursos naturales; tomar medidas para evitar afectaciones de cuerpos de agua y recursos

hidrobiológicos en vertimientos; degradación de los recursos agua, flora, fauna y de los componentes sociales e inadecuado manejo ambiental durante las actividades de mantenimiento.

Finalmente, la cartera gubernamental dictaminó que iniciaría una investigación a la compañía y que designaría al grupo de Seguimiento de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales para que efectuara una visita de inspección a la zona.

Tres meses después del suceso, Ecopetrol –por iniciativa propia– detuvo los vertimientos en el Orotoy para concentrarlos únicamente en el río Guayuriba, sobre el cual ya se venían haciendo inversiones de desarrollo para vertimiento desde el año 2007. De acuerdo con Alexis Ricaurte Puentes⁸, profesional de Gestión Ambiental – GDT de Ecopetrol, la decisión fue “una coincidencia”.

“El incidente no fue un factor determinante para la decisión, pues se presentó cuando ya se estaba implementando el cambio al Guayuriba. Entendimos que el Orotoy tenía una dinámica físico-química especial y una capacidad de asimilación menor que le impedía recibir los volúmenes de agua que manejaba la estación Castilla. Además, a diferencia del Guayuriba, era muy importante a nivel hidrobiológico”, indicó Ricaurte Puentes, desconociendo que cualquier río –independientemente de su extensión, caudal o capacidad de asimilación– es importante para las diferentes especies que de él dependen.

Por fortuitos que resultaran, tanto el derrame como la retirada de Ecopetrol del Orotoy, fueron sucesos que marcaron la historia de la cuenca del río y encendieron las alarmas de diferentes instituciones y entidades que eventualmente pondrían sus ojos sobre la región.

Por ejemplo, la Contraloría General de la República se pronunció en septiembre del mismo año, cinco meses después del evento, en respuesta a una demanda interpuesta por Nelson Vivas, presidente de la Federación Cabildo Verde, quien acusaba a la firma estatal de contaminar los ríos del Meta. El organismo de control presentó un informe en el que reconocía que Ecopetrol había faltado a las normas ambientales referentes a vertimientos en el río Orotoy y que su

⁸ En entrevista con la autora el 29 de noviembre de 2016.

accionar en dicho afluente generaba una “disminución de oxígeno y de la diversidad de especies y cambios notables en la comunidad biológica” (El Tiempo, 2009).

Meses después, la petrolera estatal emprendió un plan de recuperación en el río que incluyó la reubicación de las más de 30 especies perdidas durante el accidente (nicuros, bagres, barbillas, bocones, mojarras, cuchas y rayas, entre otras). Esta iniciativa involucró a la Universidad de los Llanos y a la cooperativa de pescadores Coopesca, quienes cultivaron los peces proporcionados por la institución académica en jaulas con características especiales ubicadas en diferentes lugares del río, en donde algunas especies se reprodujeron y otras simplemente no lograron adaptarse.

La historia del accidente se cerró el 30 de noviembre de 2015, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a través de la resolución 1527, ratificó dos cargos hechos a Ecopetrol: el primero, haber incorporado sustancias no autorizadas al río Orotoy, afectando el recurso hídrico, generando mortandad de peces y limitando el uso por parte de la población ribereña; y el segundo, haber usado sustancias químicas sin tener en cuenta las medidas de control que se requieren cuando se presentan derrames o vertimiento en los cuerpos de agua. No obstante, en la misma resolución, la entidad declaró que no habría lugar para ninguna sanción a Ecopetrol, pues sus facultades para sancionar a la empresa habían caducado desde abril 16 de 2012, exactamente tres años después del suceso.

Como las aguas del río Orotoy que pronto se recuperaron, la gran estatal petrolera también corrió con buena suerte. Y, a pesar de sus errores sistemáticos y el inconformismo de muchas comunidades, Ecopetrol, aquella empresa de imagen intachable protegida por el Gobierno Nacional y los medios de comunicación, continúa promulgando su mensaje de prosperidad, bienestar, sostenibilidad y responsabilidad ambiental en todo el país. Aún así, el ‘incidente’ permanece como una cicatriz en la memoria de muchos pobladores de la región, prueba de ello es el testimonio de Alirio Virgüez⁹, un pescador que asegura: “Ese derrame no nos cambió solo el trabajo, sino también la vida”.

⁹ En entrevista con la autora el 27 de noviembre de 2016.

Orotoy: siete décadas de petróleo¹⁰

Ya les había cambiado antes la vida a los pobladores a principios del siglo XX, cuando por encargo del terrateniente llanero Sergio Convers Codazzi, la empresa Engineering & Exporting Company hizo los primeros hallazgos de petróleo en la que para ese momento sería la Intendencia del Meta. Treinta años después, en 1945, la multinacional anglo-holandesa Shell arribaría al caserío de Castilla la Nueva (cuando aún no era considerado un municipio) para, dos años después, empezar con la perforación del San Martín 1: su primer pozo petrolero. A la par, Chevron hacía lo propio en el pozo Castilla 1.

Desde ese preciso instante, la historia del Meta ha estado marcada por la industria petrolera. En su mejor momento, aquel departamento orinoquense bautizado como ‘La estrella petrolera de Colombia’ logró cifras récord de producción de hasta 850.000 barriles diarios, aportando más del 50 % de la producción total nacional.

De manera particular, los pobladores de la cuenca del río Orotoy –que se extiende por los municipios de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa, todos en el departamento del Meta– han conocido en su mayor esplendor el *boom* y el ocaso petrolero, han disfrutado de sus bondades, pero también sufrido sus consecuencias, especialmente en las zonas media y baja, en donde se establecieron los campos de producción más grandes del país: Castilla, Chichimene y Acacías.

A pesar de su pequeña extensión –tan solo 188 km²–, la cuenca del Orotoy ha resultado ser un ‘campo fértil’ para distintas actividades industriales y sus dinámicas productivas son muy variadas. Sin embargo, la extracción de hidrocarburos ha sido una actividad determinante en la economía de esta región durante los últimos 70 años.

La primera incursión de Ecopetrol en el departamento data de 1951, cuando la empresa estatal de petróleos colombiana inició estudios exploratorios en una vereda llamada Apiay, ubicada en

¹⁰ Fechas y contexto histórico basados en el trabajo de Céspedes, O. Y. (2015). El petróleo en el departamento del Meta 1859-2011. *Revista científica Guarracuco* 26(15), 9-33.

Villavicencio, la capital del Meta. Pero fue casi dos décadas después, en 1969, cuando la región de la cuenca del Orotoy empezaría a familiarizarse por completo con el petróleo. A la par que Shell empezaba a perforar el pozo Chichimene 1, en la vereda San Isidro de Chichimene del municipio de Acacías, Chevron lo hacía en el pozo Castilla 1, en Castilla la Nueva.

Posteriormente, en 1988, Ecopetrol, en su calidad de administrador de recursos hidrocarburíferos del país, se encargó de liderar las primeras perforaciones en el pozo Castilla Norte 1 junto a Chevron en el marco del Contrato de Asociación Chevron-Cubarral, acuerdo que se mantuvo hasta el año 2000, cuando el campo Castilla pasó a ser propiedad únicamente de Ecopetrol, es decir, del Estado colombiano.

Aunque durante estas dos últimas décadas de los años noventa el protagonismo en cuanto a producción se lo llevaron Apiay (también en Meta) y Caño Limón (Arauca), los municipios de la cuenca del Orotoy se mantuvieron en un constante crecimiento que a partir de 2010 empezaría a rendir unos frutos antes insospechados.

Vale destacar que la producción petrolera en el Meta tuvo un gran impulso gracias a la explotación en Campo Rubiales, en Puerto Gaitán, que en 2013 alcanzó un récord de producción de 212.115 barriles diarios (Vargas, 2016). Este sería el culmen de una ruta de ascenso que había iniciado en 2005, año en que varios de los contratos de explotación con compañías extranjeras ya habían finalizado y Ecopetrol era propietario del 90 % de los campos petroleros del Meta, es decir, de Apiay, Suria, Castilla, Chichimene, Reforma-Libertad y Valdivia-Almagro.

Lo cierto es que desde 2004, Ecopetrol ya empezaba a perfilar a Castilla como uno de sus campos principales. De hecho, había destinado recursos para la construcción de una planta de rebombeo en Casanare, desde donde empezó a transportar el petróleo proveniente de Castilla la Nueva (El Tiempo, 2004). Para 2006, en este campo se producían 60.000 barriles diarios y en Chichimene 5.500 (El Tiempo, 2006).

Tres años después la producción en estos dos campos aumentaría de forma considerable. En una apuesta contundente por los Campos Castilla y Chichimene, Ecopetrol incrementó su producción

en cerca de 90.000 barriles diarios en el primero y alrededor de 30.000 barriles en el segundo. La decisión –aún con el fin de la burbuja de los precios del petróleo que se mantuvo entre 2004 y 2008– demostraba que estos campos tenían un potencial significativo en los planes productivos del país. No en vano, para 2010, con las contribuciones de Castilla y Chichimene, el Meta se consolidó como el principal departamento productor de petróleo en Colombia, superando a Casanare y Arauca, que se habían destacado en décadas pasadas.

En total, en 2010, Castilla y Chichimene aportaron 120.000 barriles diarios a la producción nacional, posicionándose como los principales campos de producción de Ecopetrol en todo el país (Portafolio, 2010). Igualmente, el departamento recibió por primera vez más de un billón de pesos por concepto de regalías. La bonanza petrolera en la región tendría su pico a finales de ese mismo año con el descubrimiento del pozo Akacias 1 con un potencial de producción de aproximadamente 1.300 barriles diarios (El Espectador, 2010).

Para el tercer trimestre de 2012, estos dos campos ya producían 171.151 barriles diarios, de los cuales Castilla aportaba 120.591 y Chichimene 49.560. Esto representaba el 52,6 % de la producción total de Ecopetrol y un aumento del 700 % comparado con el volumen de producción registrado en 2000, cuando la compañía había adquirido el control total de las operaciones extractivas en la región. Al finalizar el año, Ecopetrol ya invertía US\$ 1.081 millones de dólares tan solo en infraestructura con el fin de completar seis estaciones de recolección, almacenamiento, tratamiento, bombeo y despacho en la región (Ecopetrol, 2012).

Pero pasados dos años, el panorama empezó a tornarse diferente. Si bien el país había alcanzado su meta de producción de 1 millón de barriles diarios, una nueva baja a nivel internacional en los precios del crudo amenazaba la estabilidad del sector. Esto, sumado a los ataques perpetrados por grupos armados al margen de la ley, principalmente voladuras de oleoductos, empezaba a preocupar al Gobierno Nacional y a alertar a las comunidades aledañas a cada uno de los campos petroleros.

Aún de cara a ese panorama, la producción –excesiva, si se tenía en cuenta la crisis global de baja demanda y precios, y sobreoferta– se mantenía. De hecho, el Campo Chichimene reportó la

generación de 86.389 barriles diarios durante la primera semana de enero de 2015, casi el doble de lo alcanzado el año anterior (Dinero, 2015). Esta cifra récord, sumada a la producción sostenida en Castilla, consolidó una vez más a la región como el complejo petrolero más importante del país.

Independientemente de los precios internacionales del barril, que rozaban los US \$ 50, incluso después de haber tenido un pico en 2008 que superó los US \$140, y otro en 2012 que alcanzó los US\$ 130, la producción petrolera seguía siendo una de las principales apuestas de la economía colombiana; y tan solo en enero se registró un máximo histórico de producción de 1.034.500 barriles diarios en todo el país (Dinero, 2015).

No obstante, esa misma sobreproducción obligó a la compañía a cambiar sus planes y pronósticos y a tomar nuevas decisiones, por ejemplo, reducir en un 17 % inicial la perforación de pozos y, en un caso eventual, cerrar algunos campos de bajas cifras de producción. Para mediados de 2015 la tendencia ya había disminuido y el país estaría produciendo una cifra cercana a los 980.000 barriles diarios de los cuales el 36 % –ya no un 50 %– fue aportado por los campos del Meta y Casanare (El Tiempo, 2015).

El panorama nacional se iba oscureciendo y las medidas se tornaban drásticas: se disminuyeron las inversiones en más del 50 % y 23 compañías proveedoras de servicios para la industria se declararon en insolvencia (Portafolio, 2015). A esto se sumó que Pacific, una de las empresas más grandes junto a Ecopetrol, encargada de operar en Campo Rubiales, ya contemplaba la idea de no renovar su contrato con la firma estatal.

Por otra parte –si bien la actividad petrolera no representa una fuente importante de empleo en Colombia, de hecho, aporta menos del 1% del empleo total nacional (Unidad de Planeación Minero Energética, 2015)– a lo anterior se sumaba la posibilidad de recortes de personal en un 20 %, lo cual afectaba a muchos habitantes de la cuenca del Orotoy que dependían por completo de los empleos directos e indirectos que representaba esta industria. Cabe resaltar que los empleados de la industria tenían salarios superiores al promedio nacional, por ejemplo, mientras

el salario mínimo legal vigente era de \$ 644.350 pesos, el salario más bajo en las petroleras oscilaba entre dos y dos millones y medio de pesos.

Así, 2015, otro de los años determinantes para la historia petrolera tanto del Meta, como específicamente de la zona de influencia del río Orottoy, cerró con bajas tasas de exploración que repercutieron en el nivel de las reservas de petróleo en el país, las cuales disminuyeron en un 11 % para estancarse en 1.849 millones de barriles (Ecopetrol, 2016). La meta de producción de un millón de barriles diarios establecida por la compañía estatal no se logró, los empleos se redujeron en un 50 %, el precio del barril se estancó en menos de US \$ 50 y los conflictos socioambientales empezaban a acentuarse.

Después de suspender la producción en el Campo Akacías, a pesar de la crisis de la industria desatada en 2015, Ecopetrol anunció que durante el segundo trimestre de 2016 retomaría la perforación en los campos de Castilla y Chichimene. Así, la firma reactivó cinco de los once taladros paralizados a principios del año empleando nueva tecnología de perforación (El Tiempo, 2016).

No obstante, tanto en Acacías como en Castilla la Nueva y Guamal, surgió un descontento generalizado ante la puesta en marcha de los cinco taladros, los cuales al tener una tecnología moderna requerían menos mano de obra y, por lo tanto, las contrataciones de personal en los dos municipios disminuyeron en un 50 %. Del 24 de mayo al 2 de junio, la región presenció una oleada de protestas y disturbios que resultaron en daños severos a la infraestructura de los pozos aledaños y decenas de personas heridas (Llano 7 días, 2016).

Pero la incorporación de nueva tecnología no surtió efecto en la producción, pues según reportó Ecopetrol en agosto de 2016, la cantidad de barriles diarios seguía disminuyendo y los 986.000 barriles que se produjeron en enero se habían convertido en 827.000 barriles en agosto, tendencia que se mantuvo hasta finales de ese año. (Portafolio, 2016).

La llama inagotable

Si bien las condiciones adversas del mercado externo y el desplome en los precios fueron determinantes para que el país experimentara esa baja en la industria de la que aún no logra recuperarse, lo cierto es que los esfuerzos por mantener viva la llama del petróleo se mantienen. Por ejemplo, en marzo de 2017 se hicieron dos grandes anuncios: el primero de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que puso en vigencia un nuevo reglamento para promoción y asignación de áreas que permitirá ofertar 20 nuevos bloques a las petroleras y duplicar la perforación a 50 pozos durante este año. Y el segundo, de Ecopetrol, que firmó un memorando de entendimiento con la petrolera mexicana Pemex para desarrollar proyectos conjuntos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

Con estos antecedentes, es fácil predecir que la historia de hidrocarburos en la cuenca del Orotóy no se quede únicamente en siete décadas sino que se extienda, seguramente, hasta que se agoten las últimas reservas de petróleo, es decir, en menos de cinco años, o hasta que el territorio y sus pobladores –que ya vivieron sus bondades– terminen de conocer las más crudas consecuencias de esta locomotora.

Al igual que el Gobierno, que toma toda clase de medidas para reactivar la industria, muchos pobladores de la región anhelan que vuelva una bonanza petrolera que les permita recuperar el trabajo que hace unos años perdieron. Así, el Meta recuperaría el brillo propio de la ‘Estrella petrolera de Colombia’, bastante opaco si se tiene en cuenta que las transformaciones que van de la mano de la industria de hidrocarburos son verdaderamente preocupantes y que los ‘problemas’ van más allá del precio de un barril.

Un motor de cambios llamado petróleo

Es evidente que en Colombia una de las principales apuestas económicas ha sido la consolidación de un modelo de desarrollo extractivista en el que se garantizan todas las condiciones para la extracción de materias primas (*commodities*).

La principal apuesta se hizo durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (entre 2002 y 2010), cuando se estableció que la política de Estado estaría basada en tres ejes de la visión de largo plazo: la seguridad democrática, la inversión y la política social. Estos ‘tres huevitos’, como el mismo mandatario les llamaría, evolucionaron durante el posterior y actual gobierno de Juan Manuel Santos para convertirse en las ‘cinco locomotoras del desarrollo’: infraestructura, innovación, minero-energética, agricultura y vivienda.

Aquella ‘locomotora’ minero-energética, dentro de la cual se cuenta la extracción de hidrocarburos, se ha convertido en el núcleo de la economía colombiana y como tal, es objeto de análisis y debates en torno a su desarrollo y pertinencia; un debate que no ha sido ajeno para las comunidades que, como las de la cuenca del Orotoy, conviven a diario con estas actividades económicas.

Según explica Ana Milena Ángel, consultora de sostenibilidad territorial para el proyecto Orotoy, una iniciativa del Instituto Humboldt encaminada al fortalecimiento de capacidades comunitarias de adaptación al cambio climático en la cuenca del río Orotoy, los sistemas productivos y extractivos presentes en la zona tienen efectos socioambientales que pueden “afectar la provisión de bienes y servicios ambientales necesarios para su óptimo desarrollo y para mantener el equilibrio ecológico” (Ángel, 2015). De manera particular, la investigadora refiere que esta cuenca será cada vez más vulnerable en escenarios de cambio climático si persisten contingencias en el sector de hidrocarburos que afecten los ecosistemas de la zona y generen conflictos entre la conservación y el desarrollo.

En efecto, para los pobladores de la zona, la contaminación y el detrimento de la vida natural son las principales consecuencias que deja la actividad petrolera. Por ejemplo, Mabel Rodríguez¹¹, habitante y lideresa de la vereda San Isidro de Chichimene, asegura que por causa de la llegada del petróleo, “el aire se ha contaminado y, a la madrugada, el olor a nafta que viene de la estación (ubicada a 2,5 kilómetros del centro poblado) es penetrante por todos lados”.

A lo anterior, agrega que los animales han sido también afectados, pues “ya no se ven garzas rojas ni blancas en los charcones y en las playas. Y en los pozos casi no hay peces, antes uno iba a ‘caretear’ y veía tembladores (rayas) inmensos, pero ya no. Además, nosotros mismos hemos tenido que ayudar a los monos y a los osos hormigueros y palmeros a cruzar las carreteras, ellos están buscando nuevos hábitats porque aquí ya no hay dónde vivir”.

En el documento síntesis de investigación titulado *Análisis de la sostenibilidad de los sistemas productivos de la cuenca hidrográfica del río Orotoy frente al cambio climático a escala local y regional*, la ecóloga Ana Milena Ángel explica los principales impactos de la industria de hidrocarburos en sus fases de exploración y explotación en la cuenca del Orotoy, para lo cual se basó en apreciaciones de la misma comunidad.

Ángel indica que en lo referente al entorno natural, la exploración (sísmica o por perforación) genera impactos negativos como erosión, fracturas, pérdida de la capa orgánica del suelo y su cambio de uso; alteraciones en las propiedades fisicoquímicas de aguas superficiales y subterráneas; contaminación auditiva e incremento en los niveles de material particulado en la atmósfera; remoción de coberturas vegetales naturales y desplazamiento temporal de la fauna, entre otros.

Con respecto al impacto social, económico y cultural, las variables identificadas por la investigadora tienen un comportamiento distinto, pues se hace evidente que la exploración causa al tiempo impactos negativos y positivos. Por ejemplo, la generación de empleo –considerada un impacto positivo– se contrapone a la creación de falsas expectativas laborales –un impacto negativo–.

¹¹ En entrevista con la autora el 24 de noviembre de 2016.

Entre otras, el informe detalla algunas de las consecuencias que perjudican a la población, como la alteración del bienestar comunitario, las migraciones masivas hacia el territorio, un mayor riesgo de accidentalidad y el deterioro de la malla vial. Mientras que en los aspectos que la favorecen –además de la generación de empleo– sobresalen la esperanza de tener mejores ingresos y el fortalecimiento comunitario, factores resultantes de actividades de capacitación que vienen de la mano de proyectos de responsabilidad social de la empresa petrolera.

Por su parte, la explotación, si bien genera efectos similares a los que se contemplaron en la exploración, estos suceden en diferentes proporciones. El mismo informe de investigación refiere que –para la población– los impactos negativos más relevantes están relacionados con la alteración de las formas originales de la tierra como consecuencia de las excavaciones; la modificación de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos como resultado de la disposición de aguas residuales tratadas; el cambio en el uso del suelo; las variaciones en la disponibilidad, calidad y propiedades fisicoquímicas del agua; la concentración de material particulado en la atmósfera; el exceso de ruido; los cambios en las coberturas vegetales; la modificación del hábitat de especies animales; las variaciones del paisaje; los cambios en la dinámica de la población por efecto de migraciones hacia el territorio y la alteración del perfil epidemiológico de los municipios, entre otros.

Aunque no es objetivo de la investigadora contrastar la cantidad de impactos positivos con la de negativos, es evidente que los primeros –aunque pocos– son muy significativos para los habitantes de la región, pues están relacionados directamente con la posibilidad de mejoramiento de su calidad de vida y, de manera particular, con el aumento de sus ingresos.

Por ejemplo, los habitantes consultados por Ángel aseguraron que el desarrollo de infraestructura vial –necesaria para la producción petrolera– les ha facilitado considerablemente la movilidad. Además, indicaron que la variación en el nivel de ingresos y el desarrollo de un potencial turístico en la región, eran también aspectos favorables como resultado de la actividad petrolera en su territorio.

Sin embargo, los pobladores de las partes media y baja de la cuenca (zonas en donde se desarrolla la explotación) también fueron contundentes respecto a las implicaciones negativas que tiene la actividad petrolera en términos de lo social, económico y cultural.

El aumento de los precios de alimentos, servicios y arriendos; los cambios en las actividades productivas tradicionales; la transformación de los referentes culturales y las costumbres; la complejidad de las relaciones entre comunidad, empresas e instituciones públicas y privadas; al igual que el estigma de ser una región petrolera fueron algunos de los aspectos nocivos que destacó la comunidad, según refiere el informe.

Todo lo anterior permite esbozar una conclusión importante que también se ve reflejada en los resultados generales de diagnóstico de la región realizado en el marco del proyecto Orotoy: que la actividad petrolera en la región ha motivado transformaciones sustanciales en el territorio y que tiene responsabilidad en “la disminución de servicios de regulación, provisión y culturales” (VIBSE, 2015).

Lógica de la probabilidad: la estrategia de Ecopetrol

Por más claras y justificadas que sean las quejas o preocupaciones de los pobladores en torno a los impactos que la actividad petrolera genera en su territorio, Ecopetrol se ha encargado de difundir argumentos que si bien no refutan la posición de las personas o, incluso, las estimaciones científicas, se prestan para una multiplicidad de interpretaciones y dificultan el debate, incluso técnico, para evaluar las implicaciones que tiene la actividad en la región.

Así lo deja entrever el informe de Ángel, quien consultó diferentes documentos de la petrolera estatal sobre manejo e impacto ambiental con el fin de demostrar la respuesta que tiene Ecopetrol para cada una de las percepciones de la población.

Por ejemplo, la compañía sostiene que ejecuta proyectos de revegetalización en las áreas inestables del territorio, que las aguas residuales del proceso productivo aportan materia orgánica a los suelos afectados, que la valorización de la tierra denota un progreso económico y que la

calidad del aire sí se ve afectada, pero solo mientras se están construyendo los pozos o las vías de acceso, mas no en el proceso productivo.

Además, indica que es normal que un proyecto petrolero genere grandes expectativas y motive migraciones, pero que la presencia de aquellos foráneos aumenta la demanda de productos y servicios, mejora la economía en la región, genera procesos de transculturización y reinterpretación de tradiciones, lo cual deriva en la consolidación de nuevas costumbres y valores.

La probabilidad es una constante en las razones de Ecopetrol y el término *puede* –presente en los argumentos más sensibles– es determinante. Por ejemplo, la compañía reconoce que *puede* haber afectaciones de aguas con sedimentos en las zonas más bajas del territorio y que si por accidente se vierten residuos líquidos, se producirían efectos severos sobre la calidad del agua superficial y subterránea.

También refiere que el ruido que hacen los equipos en funcionamiento durante la construcción y operación de pozos *puede* perturbar a la fauna diurna y nocturna; que el polvo que se levanta por efecto del transporte de materiales a través de vías no pavimentadas *puede* afectar el estado de salud de las personas e incomodarlas; que a pesar de ser tratadas, las aguas residuales *pueden* afectar las cualidades del suelo; que para iniciar obras de construcción se requiere del desmonte, descapote y limpieza de las áreas a intervenir, las cuales *pueden* estar localizadas sobre bosques densos, de galería o vegetación y, por lo tanto, se *puede* afectar la composición florística y las coberturas naturales del territorio; y que con la implantación de la infraestructura petrolera *puede* que se aceleren los cambios en la producción agropecuaria y se ponga en riesgo la seguridad alimentaria en la región.

No obstante, la compañía sí reconoce, por ejemplo, que los campesinos ven en el petróleo una mejor oportunidad laboral que la que les ofrece el campo, por lo que tienden a abandonarlo a pesar de sus consecuencias económicas; que la explotación obstruye las rutas naturales de movilización de reptiles y mamíferos, y la presencia humana en el territorio ahuyenta a la fauna;

y que la producción de petróleo es una actividad intrusiva que demanda el uso de recursos como el agua, los cuales deben ser gestionados de forma adecuada para evitar conflictos.

Las ‘gafas’ del petróleo

Para Mabel Rodríguez, que reside en Chichimene desde hace más de cuarenta años cuando llegó junto con su familia desplazada por la violencia en Otanche, Boyacá, el territorio que habita hoy es muy diferente al de hace unas décadas cuando no había petróleo ni extensos cultivos de palma: “No más hace un par de años todos estaban enceguecidos y solo veían a través de las gafas del petróleo. Los niños se criaban con la idea de que el petróleo era lo más importante y los jóvenes no tenían esperanzas de vida y solo querían trabajar en la petrolera. Pero eso es normal, porque petróleo es lo único que vemos a nuestro alrededor”.

Según narra esta madre soltera de seis hijos, el *boom* del petróleo hace algunos años marcó en la región un momento crucial que inicialmente se percibió como el inicio de su desarrollo, “muchos se beneficiaron porque construyeron sus casas y organizaron sus vidas en torno al petróleo, pero rápidamente empezaron los problemas entre la gente por el trabajo en la petrolera, incluso, aquí hubo un feminicidio relacionado con el hambre y la envidia del petróleo”. Se refiere al homicidio de Edith Santos en 2014, quien se desempeñó como presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de San Isidro de Chichimene y fue asesinada en su oficina por dos hombres motorizados sin aún establecerse los responsables en el caso.

Las relaciones sociales de colaboración y amistad entre vecinos se han debilitado por efecto de la distribución de los cargos en la industria, responsabilidad que Ecopetrol otorgó a las Juntas de Acción Comunal de cada vereda y que se ha prestado para corrupción, según explicó Rodríguez. Situación frente a la cual la petrolera responde que las Juntas, como única autoridad en estos centros poblados, deben ser las que den solución a los inconvenientes relacionados con los listados laborales, y ante lo que Edilson Acosta, presidente de la JAC de San Isidro de Chichimene, responde que el proceso se hace con la transparencia que amerita.

Al respecto, Tatiana Roa Avendaño¹², ingeniera de petróleos y coordinadora de la ONG ambientalista CENSAT, explica que en esas zonas petroleras, algunos pobladores desarrollan el imaginario de los “Beverly Ricos” e interiorizan la idea de que el petróleo les va a generar solo riqueza y bienestar. “Pero realmente esta actividad trae una serie de problemas y cambios culturales que inciden en la completa transformación del territorio. El incremento en los precios, la pérdida de la solidaridad, la destrucción del tejido social y la violencia, por ejemplo, son consecuencias inherentes a este tipo de procesos extractivos”.

Agua, petróleo y trabajo: vínculo inquebrantable

Para Luis Guillermo Castro¹³, investigador adjunto del Instituto Humboldt y coordinador del proyecto Orotoy, los conflictos socioambientales en la cuenca están en gran parte asociados al agua porque es escasa y tanto comunidades como sistemas productivos necesitan de ella. “En el marco del proyecto hemos trabajado más o menos con 250 personas de diferentes sectores y, sin duda, el conflicto más conocido y determinante es con el sector de hidrocarburos, porque es una industria extractiva que llega al territorio, se establece, saca el petróleo que tiene que sacar y se va. Evidentemente, se necesita agua para esta actividad y requieren hacer exploración y explotación, y según las comunidades locales esto va en detrimento de los acuíferos y del agua del río y de las zonas aledañas”.

Pero este conflicto no se remite únicamente al agua sino también –desde una perspectiva más compleja– al trabajo. Es decir, no se reduce al debilitamiento de las relaciones sociales e inconformismo por la aparente inequidad en distribución de los empleos, sino que también está relacionado con el bienestar que la industria petrolera representa para algunas comunidades y, por ende, la discordia entre los habitantes ‘propetróleo’ y ‘antipetróleo’; las relaciones que se han generado de dependencia-conflicto entre los pobladores y la industria; las consecuencias que deja el alza salarial y las migraciones masivas hacia el territorio.

¹² En entrevista con la autora el 2 de febrero de 2017.

¹³ En entrevista con la autora el 27 de enero de 2017.

Al respecto, Castro, ecólogo y magister en ecosistemas forestales, naturaleza y sociedad de la Universidad de Copenhague, indica que “hay una partición del capital social en la región, por ejemplo, supe que hace un tiempo en la parte alta de la cuenca aprobaron un proyecto de sismica y un grupo de personas llegó a lugar de exploración para impedir que se hiciera, pues de allá sale el agua para los acueductos veredales y ellos tienen derecho a cuidar su territorio y sus recursos. Pero después llegaron otras personas a oponérseles porque si no había exploración tampoco habría trabajo”.

De igual manera, el coordinador del proyecto relata que en sus encuentros con la comunidad es común el comentario de que la industria ha “malacostumbrado” a las comunidades locales por la inflación en los salarios. “La bonanza del petróleo en esta región fue muy grande y los trabajadores empezaron a recibir salarios altos, pero esa industria está en decadencia no solo por la caída global de los precios, sino porque los pozos no tienen una viabilidad superior a siete años. Entonces, si toda una población depende de esa industria, pero el petróleo se acaba, es evidente que van a quedar a la deriva y a la espera de que alguien más les pague lo que solían ganar, y eso es algo que no va a pasar”, afirma Castro.

Jairo Correal¹⁴, un habitante de la vereda San Juanito, en Acacias, quien se desempeñó durante ocho años como conductor de camionetas de empresas proveedoras de servicios para Ecopetrol, corrobora que los altos salarios causaron varios cambios en la actitud de los pobladores que trabajaban para la industria. “Uno veía a la gente comprando muchas cosas, se veía lujo y fiesta por todo lado. Pero al final de cuentas, los trabajadores se gastaron la plata en ‘traguito’ y nadie ahorró, todos pensaban que iban a tener el trabajo por siempre y ya va más de un año y nada [...] Dicen que en 2017 van a volver a abrir unos pozos y estamos esperando a que nos llamen para trabajar. Ojalá que ahora la gente sí guarde la plata y no se la gaste en lo que no debe”, indica Correal, quien completa cerca de diez meses desempleado como consecuencia de la crisis petrolera y explica que al igual que él, muchos conservan la esperanza de que los precios del mercado global suban para que la industria se reactive.

¹⁴ En entrevista con la autora el 13 de diciembre de 2016.

Migrantes y los conflictos entre iguales

Otro de los aspectos cruciales que inciden en los conflictos socioambientales relacionados con la actividad petrolera en la región es la migración. Si bien la llegada de foráneos a esta zona ha sido constante desde 1820 –cuando el Gobierno colombiano promovió la colonización del Llano al entregar amplias extensiones de tierra a militares y otras personas provenientes de distintos lugares del país– en la actualidad, algunos pobladores nativos han visto en los migrantes una amenaza para el territorio, bajo el argumento de que su desarraigo deriva en falta de cuidado y sentido de pertenencia, y que se quedan con el empleo que debería ser para los nativos.

Castro explica que al igual que en otras partes del país, la cuenca del Orotoy es un territorio al que han arribado muchos migrantes alentados no solo por el *boom* petrolero, sino por los cultivos de palma, para los cuales la mano de obra era más escasa, pues la mayoría de personas preferían trabajar para las empresas petroleras por sus incentivos salariales, los que hasta el momento ninguna otra industria ha logrado siquiera igualar.

“Muchas personas han llegado a esta zona a trabajar, por ejemplo, yo jamás hubiera imaginado encontrarme con comunidades afrocolombianas del Valle trabajando allá. Esta es una zona que se transforma muy rápido social y ecológicamente, por eso, parte de lo que hemos querido trabajar con el proyecto Orotoy es minimizar los conflictos ambientales en un contexto en el que todos puedan ser incluidos y no solo los nativos, pues allí siempre ha habido un movimiento migratorio constante”, concluye el investigador.

Tatiana Roa coincide con Castro en que la región, al igual que en todo el departamento del Meta y, en general, la Orinoquia colombiana se viene experimentando un proceso de transformación muy rápido. Según comenta la coordinadora de Censat, hace cinco años esta ONG llegó a la zona con la intención de crear lazos con las comunidades para hacer un acompañamiento en medio de ese proceso de cambio, en el que no solo se transforma el paisaje, sino los referentes culturales y los valores.

“Algo curioso en el desarrollo de los campos petroleros en este país es que se han dado en zonas muy ricas y fértiles, como los valles o el piedemonte, y hay proyectos agroindustriales como la palma de aceite que combinan muy bien con esos desarrollos petroleros. Y es inevitable que no haya transformaciones y, por ende, conflictos en un territorio tan pequeño en donde confluyen tantas personas y dos de las más grandes industrias del país”, indica.

Según la ambientalista, aunque uno de ellos es la migración de personas, el conflicto con el petróleo tiene varios matices: “Primero que todo, las personas no entienden cómo funcionan los ciclos económicos, pues viven el *boom* petrolero sin detenerse a pensar en el futuro. A esto se suma que en las comunidades empiezan a darse enfrentamientos entre quienes se oponen al petróleo y quienes lo apoyan. Y, como si no fuera suficiente, la crisis del petróleo se complejiza mucho más y se vuelve casi permanente. Con ese panorama, ¿cómo no va a haber conflictos?”.

Aún así, es probable que las migraciones se perciban de una manera errónea, pues si bien el aumento poblacional en un territorio puede dificultar el acceso a los recursos y al trabajo o motivar cambios y choques culturales, los migrantes podrían verse como una oportunidad de transformación positiva. Así lo indica Luis Castro, quien explica que su presencia debe verse como una posibilidad para motivar procesos de inclusión en los que las personas aprenden a convivir en paz dentro de un mismo territorio. Una percepción importante con cabida en la coyuntura nacional del proceso de paz, en el que el Meta alberga tres de las 19 zonas veredales transitorias para dejación de armas de la guerrilla de las FARC y donde, seguramente, miles de guerrilleros reintegrados a la vida civil establecerán sus hogares en el futuro.

Petróleo, ¿“caballito de batalla” de la comunidad?

Para Roa Avendaño, la mayor responsabilidad frente a los conflictos socioambientales que suceden en este territorio recae sobre la empresa petrolera, a la que califica de “deshonesta y cínica”, pues asegura que desde las mismas socializaciones de los proyectos petroleros ocultan información, minimizan los impactos y generan intencionalmente en la población falsas expectativas. “El extractivismo en Colombia funciona igual que la política, donde hay clientelismo, corrupción y se descalifican los argumentos contrarios permanentemente”.

Su última aseveración no dista de la realidad, para ejemplificarlo está el sonado caso de abril de 2016 cuando el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry –en medio del debate por la licencia de exploración de hidrocarburos otorgada en cercanías de Caño Cristales, en la Macarena, también en el Meta– descalificó al docente de la Universidad Industrial de Santander, Óscar Vanegas, después de que este manifestara en la Cámara de Representantes que en caso de una explotación en ese territorio, la reserva podría desaparecer.

Echeverry, después de asegurar que: “En google hay más secuestros de terrícolas por extraterrestres que acuíferos secos por la industria petrolera”, atacó al docente al manifestar¹⁵: “Cualquier persona cree que por tener un título universitario puede confundir a municipios enteros y tratar de frenar a un país en uno de los recursos más importantes que tiene para el desarrollo... Una persona con una tarjeta de profesor viene a decirnos que descubrió que el agua moja. Nos pongan a discutir en plan de igualdad con aseveraciones tan irresponsables como estas”.

Al igual que el principal representante de Ecopetrol, Alexis Ricaurte, profesional ambiental de la empresa en Castilla, sostiene que Vanegas se ha hecho muy popular con las comunidades de la zona con una teoría no comprobada de que la sísmica genera grandes impactos y que Ecopetrol está acabando o acabará con las aguas superficiales. Frente a lo que responde: “La sísmica se hace durante el proceso de exploración. Es como tomar una radiografía del subsuelo en la que se usa un explosivo llamado Sismigel, el cual, al ser detonado produce unas ondas que golpean y se reflejan en los diferentes materiales que hay en el subsuelo. Lo que se dice es que esas ondas generan pequeñas fisuras en la tierra que hacen que el agua se infiltre, pero eso no está respaldado por ninguna investigación consistente”.

Indumil, la empresa estatal colombiana dedicada a la fabricación de armas y explosivos para las Fuerzas Militares y la Policía, explica que el Sismigel es un “explosivo tipo hidrogel aluminizado, con penitrita y sustancias gelificantes que evitan la segregación de los ingredientes oxidantes y combustibles sensibilizados en la mezcla”. Según la entidad, este explosivo –que no

¹⁵ En debate presidente de Ecopetrol se burla de un profesor. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=F75U674OYiU>.

contiene nitroglicerina– tiene baja sensibilidad al roce y al impacto, lo cual lo hace muy seguro al ser manipulado y puede sumergirse y utilizarse en presencia de agua. De igual manera, sostiene que el explosivo está “diseñado para labores de prospección sísmica petrolera a diferentes profundidades” y que “tiene una alta velocidad de detonación, generando pulsación de una energía sísmica fuerte, aguda y de buena definición” (Indumil, 2017).

Lo cierto es que el hecho de que el Sismigel funcione bajo el agua o en presencia de ella no es sinónimo de que afecte el recurso, pero tampoco de que no lo haga. Y para algunos pobladores, no hay duda que la sísmica y la explotación reducen la cantidad y calidad del líquido.

Por ejemplo, el hermano de Mabel Rodríguez, Roberto, quien trabajó como operador de producción hasta mediados de noviembre de 2016 en el Campo Chichimene –cuando fue suspendido junto a tres operarios más luego de que uno de sus compañeros falleciera tras caer en un reservorio de aguas de producción que contenían crudo y condensados–, asegura que en más oportunidades de las registradas por los medios de comunicación, la comunidad ha impedido que Ecopetrol lleve a cabo labores de sísmica: “Nos ha tocado dejarlos sin trabajar porque nos estaban dejando secos los nacederos y esto por aquí antes estaba lleno de agua”.

Además, respecto al impacto de alteración del perfil epidemiológico en la región, Rodríguez asegura: “Hicimos tres paros para que Ecopetrol pavimentara las carreteras, pues teníamos adultos mayores –como mi mamá– con problemas en los pulmones por la polvareda que levantaban los camiones por el petróleo, los ‘viejitos’ salieron a las carreteras a protestar y por eso fue que pavimentaron”.

En cambio, la versión del ingeniero Ricaurte es que los problemas ambientales no son más que “un caballito de batalla de la comunidad” que, a su parecer, se niega a escuchar los argumentos de la empresa y se dedica a atacarla cuando para Ecopetrol la viabilidad de los entornos es vital. “Por ejemplo, las vías de esta región las construimos nosotros para transportarnos a los pozos pero verdaderamente son una oportunidad de negocio para que los agricultores puedan sacar al mercado sus productos y que facilitan el ecoturismo. La infraestructura del sector de

hidrocarburos la podemos aprovechar todos y ese es uno de nuestros principios de sostenibilidad compartida”, explica.

“Nosotros estamos alineados con la comunidad, pero ellos no lo saben. Nos dicen todo el tiempo que contaminamos, que nos llevamos toda el agua y que los tenemos ‘jodidos’. Pero lo cierto es que no tienen ningún sustento verdadero. A esas acusaciones siempre respondemos con la verdad: que solo vertimos en un punto y que podemos mostrar los análisis de calidad del agua al final de todo el proceso, pero aún así, las personas no creen”.

Por ejemplo, según relata Ricaurte, en una oportunidad la comunidad se alteró por unas muestras de agua contaminada “pero verdaderamente tenía sustancias asociadas al sector palmícola y no al de hidrocarburos. Eran herbicidas que generan unos niveles altísimos de toxicidad. Pero como hay un clúster cercano, las personas asocian directamente la contaminación con nuestra labor”.

La versión del ingeniero es sustentada por el coordinador del Instituto Humboldt para el proyecto Orotoy, quien asegura que la desinformación en la región es también una problemática grave: “Hay mucha gente mal informada y es muy difícil generar diálogo en ambientes de desinformación, las personas tienen una versión de las cosas y en muchas oportunidades se niegan a ver desde otra perspectiva aún cuando se comprueba, por ejemplo, que el agua no está contaminada por hidrocarburos. Por eso, uno de nuestros máximos esfuerzos en el proyecto ha sido conocer el territorio, para tener la mayor y mejor información, y compartirla para que todos los pobladores tengan la misma base de conocimientos”.

Aún así, Ricaurte lamenta que en el territorio no existan espacios en los que los sectores productivos puedan dialogar entre ellos y con las comunidades. “Nosotros no podemos decirle al palmero, por ejemplo “usted está utilizando químicos y nadie le dice nada” o que su actividad también tiene impactos y requiere agua y es necesario cambiar el proceso. Esto lo que demuestra es que mientras haya petróleo, va a haber sectores como el palmero y ganadero que pasan invisibles para la población”.

Mientras haya petróleo

Así como el ingeniero Alexis Ricaurte lamenta que mientras haya petróleo se va a agudizar la tendencia a responsabilizar a Ecopetrol por cualquier perjuicio ambiental en la región, tampoco se puede negar que “mientras haya petróleo” las comunidades –aun cuando reciban ‘altos’ salarios o regalías– estarán en una clara situación de desventaja cuando sientan que su territorio se ve afectado por la actividad.

Mientras haya petróleo será común que se reste credibilidad a los conocimientos tradicionales y a la palabra de los pobladores porque no cuentan con los conocimientos técnicos necesarios. Al igual que se ponen en tela de juicio las capacidades del nombrado profesor Vanegas por carecer de una cantidad específica de publicaciones en revistas científicas, mientras haya petróleo la sabiduría comunitaria estará condenada al desconocimiento por falta de rigor teórico y científico. Y, mientras haya petróleo, la exploración sísmica seguirá siendo un tema sensible frente al que pocos se atreverán a dar una respuesta concluyente.

Aún cuando muchas comunidades de la región aseguren que preferirían vivir en un territorio libre de hidrocarburos, la presencia de un emprendimiento petrolero de tal envergadura como el que hay en esta región hace casi imposible no ver a través de las ‘gafas del petróleo’ a las que se refiere Mabel Rodríguez. Tan solo el paisaje de Chichimene y Castilla está ‘engalanado’ por teas para control de gases cuyas intensas llamaradas evocan el más apocalíptico de los escenarios, cientos de tuberías de colores de hasta 30 pulgadas de diámetro a lo largo de las carreteras, locaciones o clústeres petroleros de cuatro y hasta 20 pozos, carro tanques, camionetas bancas y tractomulas, e ingenieros y operarios con uniformes azul y naranja.

No obstante, mientras haya petróleo, el especial arraigo por el territorio de algunos pobladores les ayudará a sobreponerse a los obstáculos. Por ejemplo, Jesús Orjuela¹⁶, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juanito, asegura: “Esta cordillera no la dejo dañar de ninguna empresa, porque es de donde salen las aguas y las tenemos que cuidar. Las petroleras

¹⁶ En entrevista con la autora el 1 de diciembre de 2016.

incluso me han ofrecido plata y trabajo para que no me les oponga, pero yo les he dicho que no. Porque mientras mi Dios me tenga vivo, para defender el agua y la vida, yo siempre voy a estar”.

Sucede igual con Mabel, quien a pesar de haber sido amenazada cuando empezó a posicionarse como líder de su vereda, sostiene que para ella, “poder hacer algo por mi territorio es maravilloso porque el agua es la fuente mas indispensable en el planeta y siempre voy a velar por la protección del río [...] Dos tipos en una moto golpearon en mi casa y me dijeron que cuál era mi problema con el río Orotoy, que si acaso era mío, que dejara trabajar a la gente y me quedara callada. Pero eso fue lo que me motivó a involucrar a la comunidad en esta lucha que no es más que proteger al agua, los árboles y la vida”.

Aunque la actividad petrolera es a simple vista el principal referente industrial en esta región, lo cierto es que allí también se concentran otras actividades productivas, unas en menor proporción que las otras y otras con una trascendencia histórica mayor. En términos generales, puede decirse que esta zona es un foco industrial significativo para el país, pues allí no solo hay petróleo, sino también extensos cultivos de palma, fincas ganaderas y sembrados de arroz. Cada actividad tiene su historia propia en el territorio, sus dinámicas y, por supuesto, sus impactos.

Cultivos de palma, como el agua y el aceite

Entre bosques abiertos, densos y bosques de galería¹⁷, y pastos limpios, enmalezados y arbolados, la palma de aceite se erige como una más de las coberturas vegetales de la cuenca del río Orotoy. Sus cultivos se extienden por diferentes veredas en las partes media y baja de la cuenca en los municipios de Acacías y San Carlos de Guaroa, y han experimentado un crecimiento vertiginoso durante los últimos 30 años, en los que pasó de ocupar 27 hectáreas en 1986 a más de 4.440 en 2012 (Proyecto Orotoy, 2015).

La acelerada expansión de la palma africana en esta región está relacionada con los incentivos del Gobierno Nacional que, en vista de las perspectivas positivas de la industria de biodiesel, ha consolidado una política de subsidios para la producción de aceite de palma con el fin de lograr una posición destacada en el mercado global. No en vano, según datos consignados en la publicación *La mejor Orinoquia que podemos construir* –cuyo autor principal es Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Medio Ambiente en Colombia durante 1993 y 1996, y presidente del Foro Nacional Ambiental– para el año 2009, la palma de aceite no era solo “el cultivo de mayor crecimiento en Colombia”, sino que el país se había convertido en el “primer productor de América y el quinto en el mundo”.

A pesar de las fluctuaciones del mercado que se acrecentaron por la recesión en China y la caída de los precios del petróleo, la tendencia se mantiene, pues de acuerdo con datos actuales de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), suministrados en su informe de gestión del año 2015, la producción nacional de aceite de palma crudo aumentó en un 15 % (pasó de 1'109.600 en 2014 a 1'272.500 toneladas en 2015) y las exportaciones hicieron lo propio en un porcentaje récord del 54 % (de 272.500 a 419.800 toneladas). Cifras entre las que cabe destacar que la región oriental aportó el 41,2 % de toda la producción nacional.

Los incentivos gubernamentales para impulsar esta industria no fueron los únicos que incidieron en la expansión de este cultivo en la zona, pues según se detalla en la Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos de la cuenca del río Orotoy, con el hallazgo de

¹⁷ Vegetación propia de la ribera de un río.

yacimientos de petróleo y las políticas de adquisición de predios de Ecopetrol para llevar a cabo la explotación, “los habitantes que podían y empresarios externos a la cuenca comenzaron a sembrar palma para encarecer los terrenos y verse beneficiados de las compensaciones de Ecopetrol [...] Ecopetrol pagaba entre 4-5 millones de pesos por palma para compensar las producciones perdidas. Así, se incrementaba el precio de los predios y a la vez se aumentaba la siembra de palma de aceite” (VIBSE, 2015).

En efecto, para los habitantes, esta tendencia fue crucial no solo por los beneficios económicos que les representó, sino que también influyó sustancialmente en la modificación del paisaje (en tres décadas pasó de ocupar el 1 % del territorio al 23 %).

Al respecto, Mabel Rodríguez narra: “Cuando yo era pequeña esta región era arrocerera y ganadera y se vivía un ambiente muy diferente porque no existía el petróleo ni los cultivos tan extensos de palma. Pero ahora lo que más se ve es palma, porque si una línea de petróleo iba a pasar por una siembra se podían vender más caros los terrenos y Ecopetrol pagaba a los finqueros dependiendo del tamaño de la palma: si medía dos metros pagaban en promedio cinco millones por cada una y si medían más, pagaban hasta diez o doce millones. Por eso, todo el mundo se dedicó a sembrar palma”.

Pero más allá de dichas compensaciones, la palma se ha consolidado en la región como una fuente de seguridad económica y trabajo, pues aquellos que no trabajan en petroleras, han sabido encontrar su lugar en compañías palmeras y en las diez plantas de beneficio de palma de aceite, entre las que se destacan El Palmar del Llano S.A., Inversiones La Mejorana Ltda., Oleaginosas Santana S.A.S. y Palmeras la Margarita Díaz Martínez & Cía. Ltda., Alianza Oriental S.A., Aceites Manuelita S.A., Aceites Morichal S.A.S., Baquero Ramírez Víctor Ramón, Extractora La Paz S.A. y Oleaginosas San Marcos Ltda. En 2015, este sector generó 58.273 empleos directos y 87.409 empleos indirectos y tan solo en esta región, Manuelita, por ejemplo, crea cerca de 6.000 empleos directos (Fedepalma, 2015).

La rentabilidad económica de la palma es indiscutible, pues aunque tarda algo más de dos años para empezar a dar frutos, el ciclo vegetativo de este cultivo es superior a un año, lo cual permite

varias cosechas sin necesidad de sembrar nuevamente. No obstante, su amplia acogida en la zona ha desencadenado una serie de conflictos socioambientales que van desde la deforestación de los bosques y la contaminación de las fuentes hídricas, hasta discordias entre pobladores por las migraciones masivas a la región.

Alirio Virgüez, fundador de Coopesca, una cooperativa de pescadores artesanales de peces ornamentales de Acacías, narra que desde que apareció la palma no solo ha cambiado el territorio, sino también el trabajo y las dinámicas de reproducción de los peces. Según este pescador de 48 años, los residuos de las empresas extractoras de aceite de palma van a parar en diferentes ríos y caños del territorio causando problemas en diferentes niveles. “Normalmente había especies que desovaban entre los meses de mayo y junio, pero ahora, desovan hasta dos veces en un mismo año y eso no se veía antes de la palma. Yo estoy convencido de que las bajas de agua y la contaminación han cambiado la metodología de reproducción de los peces”.

Virgüez, quien es pescador desde que tenía siete años, asegura que los peces no hallan dónde desovar, pues muchas fincas siembran palma en los bordes del río Orotoy sin respetar la ronda hídrica, la cual, según el tercer artículo del decreto 1449 de 1977 del Ministerio de Agricultura, se debe: “mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras”, que para este caso es “una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua”.

De acuerdo con el vocero de Coopesca, no hay un control ambiental en la región que “ponga en cintura a las palmeras”, a las cuales responsabiliza de cambios en los cauces de los ríos de la región y el secamiento de lagunas. “La palma seca el agua y si no la seca, al menos la contamina, porque todos los residuos de las extractoras caen a los ríos las 24 horas del día. Yo tengo evidencias de eso, pero cuando uno trata de denunciar, solo llega hasta Cormacarena, no hasta la Contraloría o la Fiscalía, y esa gente se deja comprar muy fácil. Aquí no hay quien controle. En Cormacarena nos dicen que no tienen inspectores y cuando finalmente mandan a alguien a revisar, esa persona se deja comprar del que tiene plata”.

Por su parte, Mabel Rodríguez asegura: “Yo he escuchado que a la palma africana se le dice ‘el desierto verde’ porque consume mucha agua, produce calor y atrae insectos. Se supone que es una buena opción porque le ofrece trabajo a la gente, pero ¿a costa de qué? Por culpa de las palmeras es que nos quedamos sin agua en los veranos, porque allá le hacen canales a los ríos para riego. El río Orottoy es el primero que se seca cuando llega el verano, pero nadie controla a los palmeros”.

La respuesta de Cormacarena ante el inconformismo de las comunidades por su gestión es contundente: “La situación no es que la corporación no esté presente en los procesos, sino que la comunidad entienda los roles que tiene cada institución y que salga de ese conflicto de que todo lo malo que sucede está relacionado con las actividades productivas que se realizan en el territorio”, indica Diana Carolina Torres¹⁸, coordinadora de Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional, Cormacarena.

Torres, quien también apoya los procesos de planificación con la dirección general de la corporación, asegura que “es necesario que la comunidad dé una mirada más abierta e integral al territorio y que entienda que no todas las variables las puede resolver Cormacarena”, y asegura que aunque “muchas veces nos hemos sentado a hablar con las comunidades, no ha sido un ejercicio fácil”.

En efecto, los pobladores ven con desconfianza a esta institución, responsable de promover la conservación de los recursos naturales de la región y su aprovechamiento sostenible, y de manera particular, a su directora general, Beltsy Giovanna Barrera— a quien la Fiscalía le abrió una investigación en abril de 2016 por presunto enriquecimiento ilícito—. Por el contrario, para el coordinador del proyecto Orottoy, Luis Castro, Cormacarena ha sido un apoyo indispensable en medio del proceso llevado a cabo por parte del Instituto Humboldt en la región.

Según comenta Castro, el hecho de que los habitantes de la región no se sientan escuchados por parte de la autoridad ambiental es un problema generalizado con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que se agudiza particularmente en la Orinoquia. “Al igual que muchas CAR,

¹⁸ En entrevista con la autora el 14 de febrero de 2017.

esta tiene recursos, buena disposición para trabajar en temas de fortalecimiento de comunidades locales, pero funcionarios limitados, lo que dificulta hacer comando y control –y más en la Orinoquia– que es el 30 % del país”. Por eso, para él, la solución es integrar a las comunidades en prácticas amigables en torno al medio ambiente, para que sean ellas quienes cuiden el territorio sin que esto le reste responsabilidad a la autoridad ambiental.

Pero la posición de las personas frente a los problemas de control no se negocia. Por ejemplo, a pesar de habitar en la parte alta de la cuenca –en donde no hay cultivos de palma ni extracción de petróleo–, Jesús Orjuela narra que ha recorrido las partes bajas de la cuenca y él mismo se ha presentado con fotografías ante la alcaldía de Acacías y a Cormacarena para denunciar fincas que han sembrado palma en las orillas de ríos y caños, y que no ha recibido atención. Una versión que corrobora Alirio Virgüez, quien sostiene que a mediados de 2016 denunció a una empresa palmera que había sembrado en las rondas del río Acacías y que hasta el momento Cormacarena no había enviado a ningún inspector. “Como si fuera poco, desde ese día me han estado amenazado por teléfono y cuando fui a la Policía a notificar, nadie me creyó. Aquí no hay ninguna autoridad”.

Ante dichas aseveraciones, la vocera de Cormacarena, bióloga y magister en gestión ambiental sostenible de la Universidad de los Llanos, responde que “en muchas ocasiones los procesos son lentos y la complejidad del territorio no permite que exista un flujo de comunicación directa con los actores. Entonces, pasa que cuando la comunidad cree que algo es una afectación al ambiente corresponde realmente a permisos otorgados en el marco de la ley, como suele suceder con las concesiones de agua”.

Además, Torres, quien actualmente cursa estudios de doctorado en Desarrollo sostenible en la Universidad de Manizales, responde que se han atendido las denuncias respecto a palma y “como en todo proceso, hemos encontrado empresas legalmente constituidas que respetan las reglamentaciones ambientales, pero también hay infractores y personas que están ejerciendo la actividad de forma ilegal. En estos casos hemos asumido el régimen del proceso sancionatorio para poder resarcir el daño que se haya reportado”.

Para Adisedit Camacho Rojas, consultora del proyecto Orotoy sobre política sectorial, es importante que se enfilen esfuerzos en Colombia para la regulación estatal de esta industria, pues hasta el momento, el Gobierno se ha encargado de impulsarla mediante incentivos para la siembra y el mantenimiento de la palma y no por establecer lineamientos de sostenibilidad claros que rijan su desarrollo. En su informe de investigación, Camacho explica que: “Dado que no es una actividad regulada en términos ambientales, no se cuenta con un ordenamiento productivo que permita excluir de las áreas de siembra ecosistemas estratégicos o áreas prioritarias como recarga de acuíferos” (Camacho, 2015).

De igual manera, Camacho explica que la palma de aceite tiende a equipararse con cualquier otro cultivo agropecuario, por lo que suele ser percibida como una fuente de empleo rural que aporta a la economía local y es amigable con el medio ambiente. Esto, a su parecer, deriva en el hecho de que este tipo de agroindustria no sea objeto de intervención estatal a través de licencias ambientales o programas de control de expansión de áreas.

Las versiones encontradas frente a la gestión de la autoridad ambiental respecto a aparentes prácticas indebidas en el cultivo de palma denunciadas por pobladores evidencian un problema de fondo en la comunidad que aún no termina de ser resuelto: el desconocimiento de las responsabilidades de las distintas autoridades en el territorio y de los mecanismos de control ciudadano.

Es cierto que las personas tienden a pensar que Cormacarena es la única entidad a la que deben recurrir cuando haya cualquier problema relacionado con los recursos naturales, pues en efecto, como explica Diana Torres, “la corporación está encargada de hacer seguimiento a cualquier queja por afectación ambiental en el territorio”, pero también es cierto que ni la CAR ni las autoridades locales se han preocupado por trabajar junto a las comunidades para educarlas en legislación ambiental ni informarles sobre las cargas y responsabilidades de las instituciones respecto a problemáticas ambientales.

Tan solo hasta 2016 durante el *Diplomado Bienestar, Territorio y Cambio Global*, orientado por la Universidad de los Llanos en el marco del proyecto Orotoy, los habitantes de la cuenca

tuvieron un acercamiento básico a la normatividad ambiental nacional y las herramientas jurídicas para la protección de sus derechos y del medio ambiente. Ante esto, es fácil concluir que durante muchos años las autoridades locales parecieran haber optado por mantener en la penumbra legislativa a comunidades rurales cuyo nivel de escolaridad en varios casos no supera la primaria; comunidades que antes de dicho diplomado no sabían siquiera qué era un derecho de petición, una acción de tutela o una consulta popular.

Conflictos ambientales asociados con la palma

El Atlas de Justicia Ambiental, una herramienta *online* que describe todos los conflictos ambientales que se presentan en el planeta, demuestra que el departamento del Meta es uno de los principales productores de aceite de palma de Colombia y que allí se presentan conflictos de primer y segundo nivel, relacionados de forma específica con adquisiciones de predios, agrotóxicos y acceso al agua.

Entre los tantos impactos que destaca el Atlas con respecto al monocultivo de palma de aceite en este departamento, sobresalen la desertificación, erosión de los suelos, deforestación y pérdida de coberturas vegetales, contaminación de las aguas superficiales, disminución de la calidad del agua y alteración de los sistemas hídricos.

Dichos factores también fueron referidos por la comunidad durante diferentes talleres en el marco del proyecto Orotoy, en los que los habitantes resaltaron que esta actividad afectaba las rondas de los ríos y que en temporadas secas, desviaban el curso del agua, lo cual perjudicaba a los ecosistemas y causaba desaprovisionamiento para otros productores, especialmente, en las partes media y baja de la cuenca del Orotoy.

De igual manera, los hallazgos del proyecto Orotoy indican que “la industria palmera ha generado un aumento de la densidad demográfica creando mayor presión sobre la biodiversidad”, y adecuaciones como las obras de drenaje “han tumbado morichales y secado humedales”. Además, el mismo informe sostiene que los cultivos de palma han sido el principal motor de deforestación de bosques de galería en la zona (VIBSE, 2015).

Si bien no están relacionadas únicamente con la palma, sino también con el petróleo –como se mencionó antes– las cifras de migración hacia los municipios que baña el río Orotoy son significativas, máxime si se tiene en cuenta que los pobladores consideran que los mayores impulsores de cambio en los ecosistemas locales son el aumento poblacional, la expansión de cultivos de palma y la industrialización. Al respecto, el estudio del Instituto Humboldt sostiene que en los últimos 15 años, la población creció un 15 % en Guamal, 35 % en Acacias y 50 % en Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa.

Sin duda, el acceso y uso del agua es también uno de los impactos cruciales que implica la actividad palmera en esta región. Por ejemplo, en su informe de investigación –basado también en talleres exploratorios y conversaciones con miembros de la comunidad– el ecólogo Isaí Victorino indica que “los pobladores consideran que el problema de la disminución del recurso hídrico en toda la región tiene cuatro causas principales” entre las que destaca la deforestación de bosques, aumento excesivo de las explotaciones petroleras, minería y “la expansión de cultivos de palma, los cuales han aumentado las concesiones de agua que otorga la corporación regional” (Victorino, 2016).

Al respecto, quizá uno de los hallazgos más relevantes del proyecto llevado a cabo por el Instituto Humboldt en esta parte de la Orinoquia, está relacionado con el cálculo de consumo de agua de la industria palmera en la región. Johana Ariza Marín, consultora del proyecto para la valoración económica de los servicios ecosistémicos de esta cuenca, explica en su informe de investigación que de los 125.967.546 millones de metros cúbicos de agua del río Orotoy que se emplean para la producción de palma de aceite, arroz y cítricos, el 81,35 % corresponde a la palma de aceite, mientras el 18,51 % y el 0,14 % corresponden a arroz y cítricos, respectivamente.

Según los cálculos de esta economista y magister en gestión ambiental sostenible de la Universidad de los Llanos “si se cobrara cada metro cúbico de agua utilizado en la producción de palma, habría que adicionar a la estructura de costos un monto de \$2.001.864 por tonelada” lo que convertiría al cultivo y extracción de aceite de palma en una actividad inviable en la región (Ariza, 2015).

Los palmeros tienen claro que el uso de agua no les será cobrado como lo explica la investigadora, es más, saben que en tanto la industria siga dando frutos –como lo ha hecho hasta el momento– en la economía colombiana, la única preocupación del Gobierno Nacional será mantener los incentivos a la palma.

Al respecto, Andrés Boada Escobar¹⁹, coordinador ambiental de la empresa Palmeras del Llano S.A., con cultivos en la vereda Dinamarca, del municipio de Acacías, explica que los planes futuros de la compañía se están proyectando a cinco años, en los que si bien no se harán nuevas siembras, se renovarán cultivos y la empresa buscará sumarse a la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) con el fin de acceder a los beneficios económicos que otorga el Gobierno por contar con la certificación de sostenibilidad y, de paso, para tener la certeza de que se produce un aceite de palma de manera responsable con el medio natural.

El vocero de esta empresa, con más de medio siglo de presencia en el territorio, asevera que su apuesta al igual que la de otras compañías del sector será integrarse por completo al modelo RSPO, pues “quienes no se vinculen, tarde o temprano terminarán saliendo del mercado”. Además, reconoce que la prioridad para alcanzar la certificación es el cumplimiento legal: “Tenemos que adecuar todos nuestros procesos, empezar a utilizar productos autorizados en los cultivos que no sean tan nocivos para el medio natural y globalizar los permisos y licencias ambientales para captación, vertimiento de agua y emisiones atmosféricas”.

De igual manera, Boada explica que la compañía está intentando excluir de sus procesos los productos químicos que afectan la salud de los trabajadores, aunque “desafortunadamente los productos más beneficiosos son los más costosos y por eso se nos dificulta su utilización”. Esta iniciativa seguramente tendría acogida no solo entre los empleados de la industria, sino entre los pobladores de las inmediaciones de las plantas extractoras, quienes aseguran que el aire está contaminado como consecuencia de la emisión de material particulado a la atmósfera en medio del procesamiento del fruto de la palma africana para la obtención de aceites. Así mismo, lo recibirán con beneplácito los pescadores, quienes, según relató Alirio, vocero de Coopesca,

¹⁹ En entrevista con Sandra Pinzón, consultora del Proyecto Orotoy, el 9 de noviembre de 2016.

padecen enfermedades gástricas por causa de los residuos de las plantas extractoras en el agua de los ríos de la región.

“Es normal que uno de pescador sufra mucho de la columna, las piernas y las coyunturas por la manera en que pescamos, pues lo hacemos agachados dentro del río, contra corriente y ‘careteado’. Además, porque guardamos los pescaditos en bolsas que nos colgamos de la cintura a cada lado. Pero ahora súmele que tenemos que purgarnos cada seis meses porque en nuestro trabajo tomamos agua del río y con todos esos desechos contaminantes de la palma nos la pasamos enfermos”, menciona Virgüez.

Por todas sus razones expuestas, este pescador confiesa: “Dicen que la palma trajo muchos inmigrantes, pero nadie reconoce que los pescadores somos los campesinos desplazados por la palma”.

Del hato ganadero al pozo petrolero

Cuando se habla de los Llanos Orientales es imposible no remitirse a los rasgos identitarios y culturales de esta región. Los jinetes en sus caballos, el joropo y los cánticos, las aves coloridas, las grandes extensiones de tierra, los morichales y, por supuesto, el hato ganadero son los referentes propios de aquella extensa llanura colombiana bañada por el río Orinoco.

Sin embargo, esta imagen se ha distorsionado un poco con el paso de los años. El Meta, un departamento reconocido por su riqueza en biodiversidad y por la figura de la hacienda como epicentro del modelo económico tradicional, es desde inicios del siglo XXI un referente nacional de desarrollo petrolero. Como quedó evidenciado anteriormente, la cuenca del río Orotoy no ha sido ajena a la transformación del territorio y de las actividades económicas tradicionales, pues se ha convertido en un foco donde convergen dos proyectos productivos determinantes para la economía nacional y que inciden considerablemente en la alteración del territorio y de todas sus dinámicas, como son la extracción de hidrocarburos y de aceite de palma.

Como una de las tantas consecuencias del arribo y consolidación de estas actividades productivas a la región –pero también de la variabilidad climática, la pérdida de fertilidad de los suelos y las condiciones ambientales adversas–, la ganadería ha venido experimentando un periodo de recesión en la región, el cual, para los terratenientes, no es más que el resultado directo del impulso al petróleo y la palma por parte del Gobierno Nacional, en detrimento de la actividad ganadera.

Es bien sabido que la alta demanda de agua por parte de las industrias de hidrocarburos y palmera, han incidido no solo en la disminución de la cantidad y calidad del recurso para el riego de cultivos, sino también para la ganadería, motivo por el que los ganaderos se han visto en la necesidad de diversificar sus proyectos productivos, de invertir en tecnificación de la actividad y adoptar nuevos métodos para proveer alimento a sus animales.

No obstante, por más desalentador que parezca el panorama para la actividad ganadera, según el informe VIBSE de la cuenca del Orotoy, no se sabe con certeza cuál es la dinámica actual del

sector en términos de terrenos para ganadería y producción. El documento explica que aunque existen datos nacionales y regionales referentes al desarrollo de la actividad, no se ajustan al contexto de esta región específica y que los datos existentes relacionados con sus coberturas vegetales no son indicadores sólidos que den cuenta del desempeño de la actividad ganadera.

Lo único cierto es que tanto ganaderos como pobladores de la región tienen claro que la actividad no es tan intensiva como solía ser hace algunas décadas y que sus beneficios, como la seguridad alimentaria y económica se han visto perjudicados.

Bajón en la ganadería, ¿alivio para el territorio?

A diferencia de otras agroindustrias, los impactos negativos que tiene la actividad ganadera sobre los territorios son ampliamente conocidos tanto por pobladores como por los mismos ganaderos.

Es probable que las consecuencias que se identifican en la cuenca del Orotoy sean las mismas que relatarían cualquier campesino en diferentes rincones del país, por ejemplo, la deforestación, degradación y baja fertilidad del suelo, y el reemplazo de vegetación natural por pastos introducidos. No obstante, las comunidades también aseveran que la actividad ganadera en su región tuvo gran responsabilidad en la pérdida de biodiversidad y desaparición de especies animales que antes eran comunes en el territorio y típicas de la llanura colombiana, como nutrias, garzas, corocoras, tortugas y cachirres.

Además, algunos pobladores refieren que como consecuencia de la ganadería, el paisaje natural de la región se transformó sustancialmente por efecto de los cambios de coberturas vegetales y la deforestación.

Germán Castelblanco²⁰, propietario de la finca La Bramadora, ubicada en la zona media de la cuenca, se refiere a los impactos negativos de la actividad en términos más amplios. Por ejemplo, indica que la ganadería es uno de los principales responsables de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que contribuye significativamente al calentamiento global.

²⁰ En entrevista con la autora el 15 de diciembre de 2016.

Respecto al territorio propiamente, Castelblanco sostiene que una actividad ganadera que no cumpla con los estándares de gestión de residuos adecuada tiene culpa en la contaminación de afluentes, como ha sucedido en el río Orotoy y sus tributarios. “Por ejemplo, muchas veces no se hace el manejo debido de excretas sino que se dejan en el agua y la contaminan, al igual que plásticos y otros materiales que se utilizan para alimentar el ganado”, enfatiza. Sin embargo, declara que aunque muchos critican la actividad y la culpan de transformaciones negativas en los territorios, “cuando necesitan la carne o el trabajo, no dicen nada”.

Es importante destacar que la tradición de la cuenca del Orotoy, al igual que la del departamento del Meta, está marcada por la actividad ganadera cuya historia en el territorio empezó en el año 1620, cuando diferentes misiones religiosas como la de los dominicos y los jesuitas establecieron el modelo de la hacienda como un epicentro económico de la región. Desde la época colonial hasta la década del sesenta –fecha en que iniciaron las exploraciones petroleras en la región–, la ganadería desempeñó un papel protagónico (VIBSE, 2015).

La carrera de ascenso de este sector tuvo sus picos a mediados del siglo XIX, cuando se consolidó la ganadería extensiva y a principios del siglo XX, cuando se tecnificó y se enfilaron esfuerzos del Gobierno Nacional para facilitar la comercialización de los animales. No obstante, dicho auge vino con afectaciones severas para el medio natural local, pues los diferentes ecosistemas presentes en la cuenca (como humedales, ríos, bosques y pastizales) empezaron a ser modificados en función de la actividad ganadera.

Sin duda, la ganadería tuvo un papel importante en la deforestación del piedemonte y se estima que entre 1921 y 1925, se redujeron más de 3.000 hectáreas de bosques para destinarlas a cultivos de arroz y maíz que, posteriormente, se volvieron pastizales para ceba de ganado (VIBSE, 2015).

De igual manera, información detallada del documento VIBSE permite calcular que en el periodo comprendido entre 1986 y 2000, aumentaron considerablemente las coberturas de pastos empleados para ganadería extensiva como enmalezados y limpios, los cuales crecieron en 1.215

y 2.374 hectáreas, respectivamente. Caso contrario de los bosques densos, de galería y abiertos, que disminuyeron en 534, 526 y 420 hectáreas, respectivamente.

Sin importar el historial de beneficios que recibió la ganadería durante sus épocas doradas, cuando no regían lógicas de retribución ambiental y este sector era el ‘consentido’ del Gobierno Nacional, en la actualidad, los ganaderos se consideran víctimas de ese mismo padre protector al que acusan de solo tener ‘atenciones’ con los sectores petrolero y palmero.

“Con cualquier pedazo de tierra, algún problema viene y ya no todo es felicidad. Por ejemplo, el gobierno nos tiene ‘jodidos’ con el cobro de impuesto de renta. Lo que trabajamos se nos va en esos pagos y la plata no nos alcanza”, asegura Ancízar Acosta²¹, gerente de CODEGAN, la cooperativa de ganaderos de la región. Versión a la que se suma Carlos Castelblanco²², hermano de Germán y propietario de la finca Las Canarias, ubicada en la parte baja de la cuenca del Orotoy. “El Estado no colabora, no ejerce poder y no está pendiente de quiénes son los que deforestan las rondas de los ríos. No se hace ningún tipo control ambiental, pero en cambio, la política predial si la ejerce con todo el detalle”, manifiesta.

En efecto, las obligaciones tributarias vienen convirtiéndose en un dolor de cabeza para los ganaderos, no solo de aquella región, sino de todo el país. De hecho, diferentes empresarios han denunciado públicamente aumentos de más del 50 % en sus impuestos prediales, sin que ninguna autoridad con injerencia en los diseños de Planes de Ordenamiento Territorial se haya pronunciado oficialmente al respecto.

“La carga impositiva para el sector ganadero es exagerada. Así es muy difícil que nosotros podamos seguir contribuyendo a mejorar la economía del país” declaró Mauricio Ortiz²³, propietario de la finca Villa María, ubicada en la parte media de la cuenca. Según Ortiz, la falta de nuevos incentivos a la actividad impulsa a los ganaderos a diversificar sus fuentes de productividad e ingresos.

²¹ En entrevista con la autora el 16 de diciembre de 2016.

²² En entrevista con la autora el 15 de diciembre de 2016.

²³ En entrevista con la autora el 17 de diciembre de 2016.

Por lo anterior, es común ver que en grandes extensiones de tierra que usualmente se utilizaban para ganadería, se vean ahora cultivos de cítricos o palma africana, como en la finca El Triunfo, en donde Giselle Huérfano²⁴, su propietaria, asegura que se vio obligada a sembrar palma para poder cumplir con el pago de impuestos.

Germán Castelblanco, quien ha optado por la diversificación de cultivos, se muestra optimista frente a la situación: “Los costos de cualquier actividad hoy en día son muy altos, pero aún así, pienso que en donde se puedan hacer inversiones se deben hacer. Entonces a los ganaderos nos toca comenzar a cosechar otros productos, hacer pocetas para almacenar el agua y poder reutilizarla y tener otros cultivos de corto plazo como maracuyá o piña que nos ayuden en las épocas difíciles”.

Tanto los hermanos Castelblanco, como Huérfano y el gerente de CODEGAN coinciden en que el problema más grave para la actividad ganadera es el desabastecimiento de agua, especialmente en la época de verano, cuando se ven forzados no solo a disminuir la carga de ganado, sino también a hacer sus sistemas de ensilado y a invertir dinero en reforestación de sus propias fincas. Al respecto, la propietaria de la finca El Triunfo asegura que se imagina un escenario futuro crítico, “ya no tenemos los afluentes de hace cuarenta años, en los que si uno quería podía inclusive nadar. Tristemente el agua brilla por su ausencia y hay que pensar en varias alternativas para tener el suministro, como hacer pozos profundos o tener tanques de agua para el ganado en época seca”.

No cabe duda de que las actividades ganaderas han sido desplazadas por una variedad de factores y por lo tanto, los empresarios de esta industria ven amenazados sus ingresos y su permanencia en el territorio. Y aunque cuentan con conocimientos y recursos para diseñar estrategias de adaptación a este nuevo entorno, la tarea no es fácil, pues las últimas tres décadas de cambios radicales en esta zona dejan entrever que –al igual que las comunidades que la habitan– ellos también son vulnerables al cambio global.

²⁴ En entrevista con la autora el 1 de diciembre de 2016.

La transformación no ha sido solo económica, sino cultural. El paso del hato ganadero al pozo petrolero ha sido significativo en la región y ha incidido en sus dinámicas sociales. Sin embargo, la disminución de la actividad ganadera se puede ver también desde una perspectiva positiva, en la que se disminuye un impulsor de cambios en la región que, tradicionalmente, había causado tan negativos impactos en el territorio y su biodiversidad.

Las comunidades, que han manifestado su interés de retornar a aquellas raíces llaneras, son conscientes de que su región ha sufrido unas transformaciones trascendentales que impiden concebir nuevamente la cultura llanera tradicional, pero aún así, aseguran querer volver a erigir las bases de un nuevo referente cultural. De lograrlo, lo más probable es que ese referente incluya teas de petróleo y extensos sembrados de palma, pero prescinda de las grandes haciendas llaneras y sus miles de cabezas de ganado.

Arroz en bajo

Junto a sembrados de maíz, plátano, cacao y yuca, el arroz ha sido uno de los pocos sobrevivientes del petróleo y la palma, como una de las actividades económicas tradicionales en la cuenca del río Orotoy. No obstante, la cuenca de hoy en día es muy distinta a la de hace treinta años, cuando los cultivos de arroz eran la principal fuente de trabajo en la región y, junto a la ganadería, uno de los sectores más productivos de la región. En la actualidad, los sembrados de este grano se extienden tan solo en una tercera parte del área que solían ocupar hace tres décadas.

En el periodo comprendido entre 1986 y 2014, los cultivos de arroz experimentaron una caída acelerada y pasaron de ocupar 3.683 a tan solo 1.023 hectáreas. Si bien esta pérdida de territorio se podría ver como una desventaja para la que sería una de las actividades agrícolas más importantes de la región y el país en algún momento, lo cierto es que durante su mejor época, esta industria fue causante de una de las mayores talas de bosques en la región.

De acuerdo con información suministrada por el proyecto Orotoy del Instituto Humboldt, con el arroz vinieron talas de vegetación en rondas de los ríos y caños de la región, quema de suelos y pérdida de morichales. Sin duda, la actividad arrocera, a pesar de ser una fuente de seguridad alimentaria y económica para los pobladores, ha tenido una gran responsabilidad en la pérdida y transformación de los ecosistemas de la región (VIBSE, 2015).

Particularmente, el desvío del cauce del río para establecer canales de riego, es una de las consecuencias ambientales de la actividad arrocera que más menciona la comunidad de la cuenca del Orotoy.

A lo anterior, se suma la alteración de las propiedades físico químicas del suelo por la utilización de agroquímicos en las plantaciones de arroz para optimizar su desempeño y, por ende, aumentar la producción. Además, según comentan pobladores de la región, la industria aún realiza vertimientos de aguas de producción sobre el río sin tener control o supervisión alguna, lo cual contamina y genera mortandad de peces.

La historia del arroz en este territorio, al igual que en todo el Meta, había sido hasta hace algunos años una de las más exitosas en el devenir de la región. Su auge inició en la primera mitad del siglo XX, cuando más del 50 % de la población del departamento dependía de aquella producción arrocería que superaba con creces a la ganadera. Su rentabilidad, las facilidades para su comercialización y los incentivos que ofrecía el Gobierno Nacional para su cultivo y cosecha, hacían de esta la actividad predilecta por pobladores y grandes hacendados del territorio, que en menos de 50 años llevaron a la producción manual, conocida como majadeo, por un camino de avance tecnológico para convertirlo en un proceso integral tecnificado que dejaría atrás el historial de carga de 600 toneladas para consolidarse en más de 12.000 toneladas en la década del ochenta.

Lo cierto es que el ascenso del arroz no dejó únicamente ingresos económicos, daños en el entorno natural o historias de éxito y fracaso. Gracias a su popularidad en todo el territorio y a las oportunidades de empleo que ofreció en su mejor momento, cientos de personas arribaron allí en búsqueda de un nuevo futuro. Con la presencia de estos migrantes y un paisaje dominado por los cultivos de arroz, se fundaron los caseríos de los hoy municipios que baña el río Orotoy: Acacias, fundado en 1920, San Carlos de Guaroa en 1954, Guamal en 1957 y Castilla la Nueva en 1961.

Pero si de algo no le cabe duda a las comunidades y a los mismos productores es que los días de gloria del arroz en la región llegaron a su fin. No únicamente por efecto de la consolidación de los hidrocarburos y el aceite de palma, sino por efectos de la apertura de mercados que, con los bajos costos de producción, posicionó al continente asiático como el productor por excelencia de arroz en todo el mundo. Los cambios no se hicieron esperar y entre 1990 y 1997, es decir, tan solo en siete años, la producción en el Meta pasó de 543.342 a 379.113 toneladas y el área cultivada, de 108.175 a 75.909 hectáreas.

Basado en el más reciente censo arrocería en la región, el estudio del Instituto Humboldt indica que la producción de arroz es completamente dependiente de los patrones de lluvia, los cuales inciden en la salida de la cosecha, la comercialización y los precios. De acuerdo con el informe de investigación: “El negocio para el agricultor es altamente variable y a la vez riesgoso pues

debe arrendar y sembrar con seis meses de anticipación de la temporada de lluvias, sin conocer el rendimiento de la parcela y el volumen de arroz producido por sus contrapartes que en últimas definirán los precios” (VIBSE, 2015).

Además, el mismo documento explica que la actividad para los arroceros es cada vez más compleja y poco rentable, pues anualmente deben asumir el aumento de costos de producción determinados por los fertilizantes y el arriendo de tierras para el cultivo, a lo que se suma la variabilidad de los precios internacionales del arroz.

Álvaro Amador²⁵, propietario de la finca Guacamayas, ubicada en la vereda Barroblanco del municipio de Castilla, en la parte baja de la cuenca, quien se abastece de agua del río Orotoy para el riego de sus cultivos de arroz, sostiene que la producción arrocera tiene amenazas muy significativas. “Yo empecé a cultivar arroz desde 1995 y he venido sintiendo la falta de incentivos del Gobierno para la agricultura, especialmente para el arroz, porque ahora todo se lo dedica al sector palmero”.

Según relata Amador, desde mediados de la primera década del siglo, los arroceros han tenido pérdidas en su producción por efecto de la crisis de precios y por los daños causados aparentemente por una bacteria que afectó los cultivos, no solo del Meta, sino también en Arauca, Casanare y Tolima. “Por ese problema sanitario, perdimos muchas cosechas y nos tocó vender todo lo que teníamos para pagar las deudas con los bancos, proveedores y molineros. Definitivamente, el cultivo de arroz no ha sido nada fácil. Yo sigo haciéndolo porque aún tengo algo de maquinaria y he visto que el precio se está estableciendo en 124.000 pesos la carga, lo cual es bueno”, sostiene el arrocero.

Finalmente, Amador, quien se desempeñó como concejal de Castilla la Nueva durante tres periodos consecutivos, sostiene que aunque buscará mantenerse en el arroz, durante este año iniciará un proyecto de cultivo de palma de aceite en su finca. La aspiración de quien sería uno de los últimos grandes arroceros presentes en la cuenca del Orotoy, concuerda con las imágenes

²⁵ En entrevista con la autora el 12 de diciembre de 2016.

satelitales del territorio que demuestran que las coberturas de arroz se convirtieron, en su mayoría, en palma de aceite.

Un territorio pionero en iniciativas de adaptación

Volviendo al comienzo de este reportaje, por insignificante que pareciera para algunos, el ‘incidente’ del derrame de limpiador orgánico sobre las aguas del río Orotoy dejó a su paso varias lecciones para diferentes actores con incidencia en la región. Por ejemplo, para los pobladores el aprendizaje estuvo relacionado con la importancia que reviste el cuidado de un recurso como el agua, que es escasa, el conocimiento del territorio que habitan y el reconocimiento de los servicios que prestan los sistemas naturales que los rodean.

La lección para las empresas y representantes de los distintos sistemas productivos que se abastecen de las aguas del Orotoy, fue precisamente entender que este río al igual que los demás afluentes de la región son vitales para un buen desempeño de su actividad y que el precio que asumen por acceder a recursos como la tierra y el agua es muy bajo si tienen en cuenta los múltiples beneficios que reciben de dichos recursos.

En el caso de instituciones como Gobernación, alcaldías, centros educativos, corporaciones y federaciones, entre otras, el mensaje no es nada diferente a entender la imperiosa necesidad de empezar a invertir recursos y esfuerzos en la planificación y el diseño de programas orientados al fortalecimiento de las comunidades que habitan aquel territorio que se transforma a un ritmo acelerado. Además, de enfocar sus decisiones hacia las prioridades de los pobladores de la región.

Estas lecciones, aún cuando no terminan de ser interiorizadas, derivan de un proceso que lleva cerca de ocho años en la cuenca, en el que se han visto involucrados diferentes actores y que inició como parte de una iniciativa de compensación al territorio liderada por Ecopetrol. Así, lo que empezó como un proyecto de conocimiento del lugar hoy se manifiesta como un proceso de adaptación al cambio donde los habitantes de la cuenca son los protagonistas.

Compensación, la estrategia inmediata de Ecopetrol

En diciembre de 2009, siete meses después del derrame, Ecopetrol firmó con la Universidad de los Llanos un convenio de cooperación para el diseño y ejecución del proyecto *Determinación y formulación de las medidas de manejo socioambientales asociadas a la recuperación del río Orotoy, en el área de influencia de la Superintendencia de Operaciones Central Ecopetrol, municipios de Acacías y Castilla la Nueva*.

Clara Inés Caro²⁶, miembro del grupo de investigación en Gestión ambiental sostenible de la Universidad de los Llanos y coordinadora académica del convenio, relata: “Desde ese momento, la experiencia del proceso en el Orotoy ha sido muy enriquecedora. Llegamos allí para descubrir que era un territorio con una gran diversidad de pensamientos, pero sobre todo con una esencia femenina muy especial, por lo que enfocamos gran parte del trabajo en visibilizar a las mujeres y su papel protagónico en este territorio”.

Por lo anterior, el proyecto, que había sido concebido como una herramienta para identificar la diversidad e importancia de los peces y para caracterizar los ambientes acuáticos del río Orotoy, pronto alteró su vocación para concentrarse en el fortalecimiento de las mujeres como eje articulador para la mejora de la calidad de vida en la zona.

“Ese ejercicio nos permitió identificar actores importantes, pero también visibilizar los recursos naturales de la región, al igual que las cualidades de la cultura campesina y llanera propia del territorio, asociada a la ganadería y a la producción de arroz”, sostiene la profesora Caro.

Para el desarrollo del proyecto, la Universidad de los Llanos organizó talleres, encuentros comunitarios y un diplomado, actividades que contaron con la participación de más de 200 adultos y cerca de 25 niños habitantes de la cuenca.

Este trabajo, pionero en caracterización de la región, contempló un diagnóstico social de la cuenca desde la perspectiva de género, el cual se consolidó a partir de talleres de capacitación

²⁶ En entrevista con la autora el 6 de marzo de 2017.

para mujeres de la cuenca en los que se abordaron temas relevantes para ellas como: seguridad alimentaria, emprendimientos, estilos de vida saludable, importancia de los recursos naturales, gestión del agua y fortalecimiento de la sabiduría tradicional.

A pesar de las carencias sustanciales en el conocimiento de los derechos de la mujer y la equidad de género, que aún hoy permanecen, una de las principales conclusiones del proyecto fue que, por su naturaleza, las mujeres de la región debían liderar la defensa del medio ambiente y ser incluidas en la toma de decisiones relacionadas con el territorio.

Conclusión que corrobora Giselle Huérfano, líder ganadera de la región, quien asegura que las mujeres llaneras son quienes están en capacidad de ver por el territorio: “Para cualquier tema ambiental siempre voy a tener las puertas abiertas. Con mis colegas hemos sembrado cercas vivas porque nos preocupamos por mejorar el aire de la zona y la calidad de los alimentos”.

Respecto al proyecto de identificación de peces, los hallazgos también resultaron de gran importancia. Por ejemplo, se logró el registro de 113 especies en la cuenca, de las cuales 53 tienen importancia comercial. Además, los investigadores junto a pescadores de la región encontraron una nueva especie en el afluente que no había sido antes reportada en Colombia pero sí en el río Orinoco, la *Phenacorhamdia provenzanoi*.

No obstante, el vocero de Coopesca, cooperativa de pescadores que apoyó este proyecto, lamenta que a pesar del trabajo realizado, las condiciones laborales para los pescadores en la región al igual que la relación con Ecopetrol hayan empeorado. Según Alirio Virgüez, la empresa les impide pescar en determinados puntos de ríos ubicados en campos petroleros argumentando que el territorio es privado. “¿Si las aguas son del Estado y el Estado somos nosotros mismos, por qué no podemos entrar a pescar?”, se pregunta Virgüez.

Además, el pescador critica el hecho de que Ecopetrol no hubiera recibido ninguna sanción por el derrame en el río Orotoy, pero “en cambio le dieron un premio por esa nueva especie que encontraron en el río”, indica.

En cuanto a la investigación sobre ambientes acuáticos, los hallazgos fueron aún más reveladores, pues los investigadores –que estudiaron el río durante un ciclo hidrológico entre los años 2010 y 2011– encontraron que los niveles de contaminación del afluente habían aumentado como consecuencia de las actividades productivas llevada a cabo en la zona, el turismo y la falta de tratamiento de aguas residuales de uso doméstico y que el 94 % de el bosque ribereño había sido alterado o destruido.

“Esos ejercicios de levantamiento de información son hoy en día imprescindibles en cualquier estudio sobre la cuenca. Después de ese proyecto vinieron trabajos de tesis de pregrado y posgrado que llevaron los resultados directamente a la zona y otras investigaciones y procesos posteriores como el del Instituto Humboldt”, explica Clara Caro.

Para esta investigadora de la Universidad de los Llanos, “Gracias al apoyo de Ecopetrol logramos demostrar que no se requerían grandes inversiones de dinero, sino participación de las personas de las veredas [...] Y en ese ejercicio que hicimos por cerca de dos años con las comunidades generamos confianza, empoderamiento a nivel familiar, comunicación y visibilización de los diversos ecosistemas, las especies animales y la multiplicidad de manifestaciones de vida en la cuenca”.

La apuesta del Instituto Humboldt por el fortalecimiento comunitario

Dos años después de finalizado el proyecto de recuperación del río Orotoy, liderado por Ecopetrol y la Universidad de los Llanos, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con apoyo del Centro Internacional canadiense de Investigación para el Desarrollo (IDRC, por su sigla en inglés), arribó a este territorio con el fin de iniciar un proceso de fortalecimiento comunitario que permitiera mitigar los conflictos ambientales y construir acuerdos sociales de cara al cambio climático.

El proyecto, denominado *Fortalecimiento de las capacidades de adaptación social y ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Orotoy, Colombia*, se valió de información

científica para mejorar los mecanismos de participación en la región e incidir en procesos de gobernanza del agua.

Al respecto, Luis Guillermo Castro, coordinador del proyecto, explica: “Con este proyecto buscamos un proceso de fortalecimiento comunitario e innovar en temas de aprendizaje social. Valiéndonos de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, hemos tratado de indagar cómo mitigar conflictos ambientales en una zona pequeña pero problemática y cómo generar acuerdos sociales entre diferentes actores para poder tener un mejor futuro ante el cambio climático”.

El trabajo se organizó en tres fases, una primera de diagnóstico en la que se realizó una caracterización del territorio bajo la metodología de Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (VIBSE), un modelo operativo pionero en Colombia que integra diversas variables relacionadas con el territorio, mediante el cual se establece el valor de los servicios que prestan los ecosistemas y la biodiversidad, y que sirve como una herramienta para la toma de decisiones (Rincón et al., 2014, p. 14).

En la segunda fase se socializaron los hallazgos de la etapa de diagnóstico y se firmaron compromisos con diferentes actores identificados en la región como presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de la gobernación y las alcaldías de los municipios que cubría el proyecto, la Universidad de los Llanos, federaciones y cooperativas de ganaderos, palmeros, pescadores y arroceros, concejos de cuencas, bomberos, ONG y acueductos, entre otros.

La tercera fase, denominada Gestión integral del conocimiento y educación, incluyó talleres de sensibilización, información y priorización de necesidades y el diplomado gratuito *Bienestar, Territorio y Cambio Global: construyendo territorios más fuertes*, un espacio académico organizado por la Universidad de los Llanos que contó con la participación de habitantes de la cuenca de diferentes edades (de 14 a 66 años) y donde el enfoque fue la participación activa y el fortalecimiento de las capacidades de adaptación.

Para Castro, la importancia de este diplomado es que permitió a los participantes (habitantes de la cuenca, mujeres, jóvenes, representantes institucionales y funcionarios) mantener un diálogo “constante, pacífico, constructivo e incluyente”.

En el diplomado, llevado a cabo desde el 1 de octubre hasta el 3 de diciembre de 2016 en la ciudad de Acacías, los estudiantes aprendieron sobre temas importantes para la gestión de su territorio, como biodiversidad y servicios ecosistémicos, asociatividad comunitaria, gobernanza ambiental, cambio climático y legislación ambiental; y sobre temas específicos priorizados por ellos mismos durante talleres previos, como compensación y pago por servicios ambientales, agricultura familiar, ecoturismo y emprendimientos productivos, entre otros.

De acuerdo con Álvaro Torres²⁷, coordinador del diplomado por parte de Unillanos, el logro más importante fue formar nuevos gestores: “Vimos un proceso inigualable en el que los estudiantes fortalecieron sus capacidades personales y mostraron disposición para gestionar un nuevo territorio en el que todos son iguales y tienen las mismas responsabilidades”.

Con una intensidad horaria de 120 horas, este diplomado tuvo diez sesiones orientadas por expertos en las diferentes materias del Instituto Humboldt y docentes de larga trayectoria de la Universidad de los Llanos como Clara Inés Caro, quien destacó la constancia de los participantes y su interés por todas las actividades enmarcadas en el proyecto.

Según Caro, bióloga, ecóloga y candidata del doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de los Llanos, otro de los logros del diplomado fue la apropiación del concepto de territorio por parte de sus pobladores. “A pesar de sus diferencias, los habitantes de la cuenca se reconocen todos como parte del mismo territorio y sin temor a soñar y a proponer, tienen claro que deben adaptarse a un futuro distinto en el que no dependen del petróleo y la palma. Esta es una ganancia fabulosa”, aseveró.

²⁷ En entrevista con la autora el 3 de diciembre de 2016.

Por su parte, Diana Lara²⁸, investigadora del Instituto Humboldt encargada de orientar la sesión final del diplomado –un taller de visión del territorio en el que los estudiantes describieron los escenarios actuales y futuros de la cuenca– aseguró que este ejercicio permitió evidenciar que: “La comunidad tiene muchos proyectos a futuro, por ejemplo, quieren incentivar el ecoturismo, volver a las huertas comunitarias, acceder a educación en temas de salud y generar un ciclo de oportunidades para todos. Pero para esto se requiere generar espacios de diálogo cuyas conclusiones se puedan comunicar a alcaldías y gobernación para así obtener el apoyo que necesitan. Por sí sola, la comunidad no puede surtir efectos sobre los proyectos ideales, pero si se unen más –como lo están haciendo ahora– podrían lograrlo a otras escalas”.

El coordinador del proyecto Orotoy, quien también orientó clases del diplomado, aseguró que el reto más difícil que se enfrentó durante el proceso fue generar confianza en las comunidades frente a las entidades y a sus mismos vecinos, para lo cual el trabajo cara a cara y la convocatoria personalizada fueron herramientas indispensables en la meta de alcanzar el cupo de 100 estudiantes en el diplomado. Sin embargo, en total se pre-inscribieron más de 180 personas y se graduaron 104, con un índice de asistencia del 90 %.

“El diplomado es el mayor éxito de este proceso. Queríamos un espacio educativo incluyente y qué mejor que la academia, en donde todos daban sus opiniones personales para aprender y construir con los demás. Allí, las personas se conocieron, se hicieron amigos y generamos un trabajo en equipo muy destacable”, asegura Castro.

Para la comunidad, este diplomado fue una de las mejores herramientas con las que han contado en mucho tiempo para conocer el territorio que habitan, las maneras de protegerlo y las alternativas productivas y de vida que allí pueden desarrollar. Por ejemplo, Roque Alvarado Jiménez²⁹, habitante de Guamal y pensionado de la Policía, indicó que este espacio le permitió conocer a otras personas que –al igual que él– están interesadas en iniciativas de agricultura

²⁸ En entrevista con la autora el 3 de diciembre de 2017.

²⁹ En entrevista con la autora el 23 de noviembre de 2016.

sostenible en su municipio. De igual manera, su esposa, Rosalba Ayala³⁰, indicó que gracias al diplomado logró tener conocimientos más claros para hacer su propia huerta casera y compost.

Liliana Rueda Rivera, reintegrada de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y actual operaria del sector palmícola en la vereda de San Lorenzo, declaró durante el cierre del diplomado que gracias a este espacio había aprendido a trabajar en equipo. “Eso no lo habían logrado ni mis papás ni mis profesores cuando estudié en la escuela. Siempre me aislaba y trabajaba sola, pero me voy con un aprendizaje muy grande de este diplomado y felicito a los profesores por esto que cambiaron en mí”, sostuvo.

Hader Sneider Fuentes, un líder comunitario de 20 años de la zona baja de la cuenca, intervino igualmente agradeciendo a las instituciones y a los participantes. “Lo que adquirimos en este diplomado es muy importante y gracias a ese impulso ya tengo un proyecto: replicar este proceso en mi localidad y ¿por qué no? extenderlo a nivel departamental. Fue muy grato que nos hubieran incluido a los jóvenes en este proceso tan enriquecedor” concluye.

Guardianes del Orotoy, los superhéroes de la cuenca

La corporación Ecochichimenitos, liderada por las hermanas Marcela³¹ y Mónica Rodríguez, es otra de las iniciativas de adaptación que se han gestado en este territorio y, probablemente, uno de los principales enlaces de instituciones foráneas con el territorio y su población infantil.

La historia de esta corporación empezó en 2014, cuando Marcela –fotógrafa y comercializadora de arte de artistas emergentes colombianos–, después de una temporada de vacaciones junto a su familia en San Isidro de Chichimene decidió no regresar a su vida habitual en Bogotá, sino quedarse en este territorio junto a sus dos hijos de 12 y 5 años y su madre.

Además de motivos personales como la separación de su esposo, quien tuvo que abandonar el país por un problema de seguridad, una fuerte crisis económica y la muerte de un familiar,

³⁰ En entrevista con la autora el 23 de noviembre de 2016.

³¹ En entrevista con la autora el 26 de noviembre de 2016.

Marcela se vio motivada a permanecer en San Isidro de Chichimene al ver las transformaciones de esa pequeña vereda que la había visto crecer. “Cada año que venía podía ver cómo todo iba cambiando por el petróleo y que las expectativas del futuro eran cada vez más borrosas en los jóvenes. Para ellos era fácil acceder al dinero, todos tenían motos, consumían drogas y alcohol [...] Como tienen la opción de trabajar a los 18 años y ganar sueldos muy altos, los jóvenes de aquí no se preparan, no estudian, no se proyectan y son padres a muy corta edad”.

Después de dos meses de descanso, estabilización en su nuevo hogar y tardes enteras sumergida en las aguas del río Orotoy, Marcela se reunió con sus tres hermanos para idear un proyecto conjunto que beneficiara a su región. “Junto con mi hermana y mis dos hermanos llevábamos un proceso espiritual muy fuerte desde la muerte de mi papá. De hecho, mi hermano mayor es instructor holístico de las leyes del tiempo, estudió el calendario maya y nos llevó a todos por una ruta de reconocimiento y agradecimiento a la madre tierra, al sol y a la luna. Todos sabíamos que en un momento debíamos servir a Dios a través de una causa común y cuando llegó el momento nació Ecochichimenitos”, dice.

Según relata Marcela, Ecochichimenitos nació en el río Orotoy, al cual considera un lugar sagrado y ancestral que ha dado vida y agua muchas generaciones pero que, infortunadamente, está siendo maltratado. “Una de esas tardes en que iba a bañarme al río me dediqué a recoger toda la basura que había en el río, era tanta que llegué a mi casa llorando y llamé a mis hermanos a contarles que nuestro río estaba contaminado. Además, los niños eran quienes botaban basura, eran groseros y peleaban entre ellos. Entre todos y, particularmente mi hermana Mónica, que es ingeniera industrial, empezamos a hacer avisos en material reciclado para generar conciencia ambiental y así empezó la aventura por el río”.

Cuando se reunían los cuatro hermanos a trabajar, los niños curiosos llegaban a la casa interesados en aportar al proceso y jugar. “Vimos que el trabajo con los niños era muy fácil, porque ellos siempre dan y quieren más”, sostiene Marcela, explicando que en tan poco tiempo, el cambio en los niños ha sido enorme, pues ahora se declaran ambientalistas, defensores del río y practicantes de valores. “Descubrimos que les gusta el arte, entonces hacemos piezas con

residuos, máscaras alusivas a los animales de la cuenca y reforestaciones en la zona con granadas de semillas”, agrega.

Desde mediados de 2016, Ecochichimenitos se vinculó al proyecto de fortalecimiento de capacidades en la región liderado por el Instituto Humboldt y Unillanos, para llevar un proceso paralelo al que las dos instituciones hacían con jóvenes y adultos, pero enfocado en los niños de la región. Así, durante los talleres –a los que algunas madres en diversas ocasiones no podían ir por no tener con quién dejar a sus hijos– Marcela y su hermana Mónica ofrecían una alternativa para que toda la familia asistiera, pues realizaban actividades de educación ambiental y reconocimiento del territorio únicamente con los niños.

“Gracias a la labor que hicimos y al apoyo del Instituto Humboldt y Unillanos, pudimos empezar el proceso de los Guardianes del río Orotoy, que son todos los ecochichimenitos dispuestos a aprender de temas ambientales para cuidar al río Orotoy”. En total, esta corporación trabaja con 130 niños habitantes de San Isidro de Chichimente, 40 de la parte alta, específicamente de la vereda San Juanito, y 70 más que habitan la parte baja de la cuenca, en veredas como Dinamarca y San Lorenzo.

“Lo que Ecochichimenitos nos ha enseñado es que debemos cuidar el medio ambiente y no botar basura al río porque somos los guardianes del río Orotoy y debemos protegerlo y limpiarlo. Con las botellas y desechos que recogemos allá hemos hecho trajes, letreros y otras cosas”, declara Sofía, una de la niñas que hace parte de la corporación.

Por su parte, Santiago destaca: “Aprendimos a hacer máscaras, hacemos fogatas, tenemos una huerta y compost. Ahora en mi casa estoy haciendo una huerta y sembramos aromáticas, tabaco, auyama, papaya, ají, maíz, lulo y tomate. Con Ecochichimenitos también hacemos cenas por la noche con los ingredientes de la huerta que hicimos entre todos”.

Por su parte, Rocío Rojas Silva, profesora de la escuela San Juanito, ubicada en la vereda que lleva el mismo nombre, explica que Ecochichimenitos ha representado una posibilidad para que los niños se atrevan a soñar y vivan otras experiencias.

“Como la vereda está tan alejada y hay tantos adultos, que los niños puedan participar en otros proyectos los integra con otros compañeritos de sus edades y en una causa muy bonita, como es la ambiental. Ser Ecochichimenitos es como una actividad extracurricular que complementa su formación, además porque en nuestra comunidad la gente todavía no tiene una conciencia ambiental muy desarrollada y no se transmiten esas enseñanzas a los niños”, explica la docente.

Así, Ecochichimenitos se ha convertido en una de las iniciativas de educación ambiental infantil y fortalecimiento de capacidades más efectivas en esta cuenca. Además, la corporación ha venido trabajando en la estructuración de proyectos comunitarios de reciclaje y cuidado del afluente. Según relata Marcela: “Para cada actividad que hacemos, nos ‘montamos’ en la Nave de los Sueños, un concepto que se inventaron los niños. Allí, cada uno activa el superhéroe que lleva adentro y los adultos despiertan a su niño interno, aquel que cree que con amor, todo es posible”.

Conclusiones

Orotoy, una ventana hacia la Orinoquia

Al surcar las aguas del río Orotoy y bañarse en ellas, es fácil notar cómo este cuerpo de agua no es necesariamente el espejo que refleja, sino más bien la ventana que se abre y permite ver hacia otros territorios. Desde aquella ventana se puede dar una mirada en dirección de la Orinoquia colombiana, una región con diversas problemáticas socioambientales, todas relacionadas con su aparentemente alto potencial productivo y con las actividades económicas que allí se realizan.

La Orinoquia ocupa gran parte del territorio nacional (30 %) y es epicentro de un sinfín de apuestas que el Gobierno Nacional ha hecho con grandes esperanzas de desarrollo económico. Pero dichas expectativas pareciesen haberse creado en torno a una percepción desde todo punto de vista errónea, como si las cualidades paisajísticas y los recursos naturales de la Orinoquia hicieran de ella una región ideal y exclusiva para el desarrollo de actividades productivas a gran escala (como la extracción de hidrocarburos y de aceite de palma, y ganadería). Algo preocupante si se tienen en cuenta los conflictos ambientales, sociales, económicos y culturales que suceden en tan solo una pequeña porción del territorio como es la cuenca del río Orotoy que, aunque pasan desapercibidos para el resto del país, no son menores.

Contaminación de fuentes hídricas, deforestación, pérdida de biodiversidad, alteración y pérdida de fertilidad de los suelos, aumento de material particulado en la atmósfera y disminución de los servicios que prestan los ecosistemas de la zona, son tan solo algunos de los principales impactos que las industrias petrolera, palmera, ganadera y arroceras han dejado a su paso por este territorio. Eso sin contar los conflictos que han causado, como disputas por el acceso al trabajo, resquebrajamiento del tejido social, transformación de referentes culturales e identitarios y enfrentamientos por el acceso a recursos naturales cada vez más escasos, entre otros.

Pero a pesar de aquellas historias de impactos y conflictos, y del testimonio de un territorio que habla por sí solo, la apuesta por la expansión económica en la cuenca del Orotoy y en general, en la Orinoquia, se mantiene latente. ‘Huevitos’ o ‘locomotoras’, el modelo primario exportador en Colombia persiste con la tozudez propia de sus recientes mandatarios, quienes junto a sus gabinetes han enfilado toda clase de esfuerzos para impulsar una economía basada en el extractivismo sin importar lo avasallador y conflictivo que este modelo pueda ser.

En ese sentido, es curioso que un territorio con conflictos tan alarmantes haga parte de la región que el Gobierno ha proyectado como el escenario de sostenibilidad por excelencia del país, en el que confluyen con armonía el medio ambiente, la agroindustria y el sector minero. ¿Cómo integrar esos elementos que a simple vista parecen contradictorios cuando –en una fracción del territorio– los hechos y las percepciones demuestran que éste dista de ser un escenario sostenible? Si algo evidencia esta cuenca es ser foco de un deterioro ambiental sin precedentes y de una transformación acelerada ligada directamente con las actividades productivas que allí se han impulsado con tanto empeño.

Pero bajo las lógicas del modelo primario exportador y el extractivismo, los impactos y conflictos parecieran no existir y perderse bajo las corrientes de un río, demostrando que cuando de desarrollo económico se trata no hay ‘obstáculo’ que valga: ni la malsana dependencia de los mercados internacionales que hacen vulnerable a la economía colombiana, ni la baja representatividad de industrias como la petrolera en la generación de empleo, ni la falta de encadenamientos productivos, ni la pobreza de comunidades que dependían por completo de campos petroleros hoy inactivos, ni los ecosistemas sobre-explotados.

En la cuenca del Orotoy, así como en la Orinoquia y en gran parte del territorio nacional pareciera que nada tenga la capacidad real de frenar, o al menos de redireccionar, a las locomotoras, aquellos proyectos arrasadores que amenazan nuestra amplia biodiversidad (segunda en el mundo) y, por ende, el bienestar de las comunidades. Las historias narradas y las percepciones retratadas en las páginas anteriores demuestran que es necesario dar una mirada hacia los beneficios que traen para los territorios y las economías locales esos proyectos productivos de gran magnitud que se están impulsando en Colombia, pues no es fortuito que los

122 registros que hacen de Colombia el país con más conflictos socioambientales en América Latina estén relacionados con estas grandes apuestas industriales.

Conocimiento a escala local, aprendizajes desde lo metodológico

Sin duda, para el desarrollo de este trabajo, mirar el contexto local fue una manera de ver en perspectiva lo regional y lo nacional. Mi prioridad como comunicadora-investigadora fue siempre entender el territorio en función de las actividades productivas que han marcado su devenir, de ahí se desprenden los impactos ambientales y sociales que cada actividad representa, al igual que los conflictos que se desencadenan y las iniciativas de adaptación.

Para esto, uno de los ejes básicos sobre los que giró mi ejercicio fue una contextualización que dejara entrever –aunque fuese en términos muy básicos– cómo y en qué direcciones han evolucionado las actividades productivas en la región y de qué manera el territorio se ha transformado por efecto de ellas. Un ejercicio que no solo me facilitó comprender integralmente del territorio, sino también establecer lo necesario que resulta empezar a abordar la realidad nacional desde las historias locales y regionales teniendo en cuenta el uso que se le ha dado a sus recursos naturales y la incidencia de las actividades productivas como motores de transformación de los ecosistemas.

En esa medida, queda claro que aunque el pretexto que motivó a muchos a mirar al Orottoy fue un hecho noticioso (el derrame perpetrado por Ecopetrol en el río en 2009), este trabajo no responde a una noticia, sino a un proceso con antecedentes destacables que se forjó después del acontecimiento. Tal vez sea esa la dirección en que los medios o periodistas que quieren centrar sus investigaciones en temas ambientales deberían mirar, pues la primicia obnubila e impide ver con claridad todas las variables que inciden en un hecho noticioso. Peor aún, la falta de seguimiento a este tipo de primicias suele terminar en la negación de otras problemáticas e iniciativas como las que desencadenó aquel *incidente*, pero que hoy nos permiten ver a esta región desde la perspectiva de los conflictos socioambientales y también desde la de la adaptación.

Pero no solo es útil la práctica de ver a través de los *procesos*. También es vital ver desde las perspectiva de los *proyectos* como un paso esencial a la hora de comunicar la ciencia, pues a través de las distintas iniciativas de investigación o intervención locales y regionales es posible conocer más en profundidad una región y posiblemente, proyectar con mayor facilidad las observaciones o los resultados obtenidos a una escala nacional.

Además de insistir en la importancia que reviste para el periodismo y para la investigación en Colombia el trabajo en las regiones como una manera de construir relatos menos centralistas pero –de alguna manera– más cercanos a la realidad nacional, vale también la pena destacar el papel que cumplen las universidades regionales como centralizadoras y generadoras de conocimientos específicos sobre los territorios, además de su papel vital como mediadoras y estrategias para la generación de confianza con las comunidades.

En cada paso de este proceso investigativo –en el que las voces de las comunidades fueron el insumo básico– cobró relevancia la importancia de generar conocimiento a través de lo local, pero también la necesidad de presentarlo a manera de información útil para la toma de decisiones en un territorio. Es claro que no solo el abordaje, sino también la transformación de los conflictos dependen de fomentar la comunicación, de superar las brechas de información y de facilitar la comprensión de procesos de diversa índole que se dan en medio de los conflictos.

Por lo anterior, cualquier medida en pro de consolidar una mejor información y ampliar su espectro de difusión será positiva para mediar en cualquier escenario de conflicto, especialmente si se tiene en cuenta estos pueden tener una transformación positiva y se pueden percibir como una oportunidad para desarrollar procesos de gestión de recursos más incluyentes, de toma de decisiones más fortalecidos o para el diseño de políticas públicas. Sin duda, más que válido, es necesario considerar al periodismo como un agente capaz de contribuir en la transformación de conflictos y de desarrollar capacidades de resiliencia en las comunidades.

Pero dicha actitud no solo será imprescindible en escenarios de conflicto, sino también en escenarios de posconflicto. Sin duda, la coyuntura nacional demanda que los medios de comunicación asuman la tarea de motivar en los colombianos actitudes de adaptación y

resiliencia que les permitan transformar los conflictos que enfrentan y diseñar escenarios de convivencia, perdón y reconciliación.

Cuando el río suena...

A pesar del revés político mundial con el que han venido nuevas maneras de percibir el cambio climático, me resulta importante aclarar que este para este trabajo siempre consideré que ese fenómeno es una realidad a la que debe prestarse urgente atención. No obstante, las miradas que me permitió hacer esa ventana que es la cuenca del río Orottoy trascienden o aterrizan (aún no logro descifrar cuál de las dos) la problemática.

Mi reflexión –construida gracias a muchas de las conversaciones que sostuve para el desarrollo de este trabajo– es que tal vez nos hace falta ver al cambio climático como una variable que acrecienta otras problemáticas en lugar de concentrarnos en los incrementos de temperatura. No se puede perder de vista, por ejemplo, que el cambio climático incide drásticamente en la pérdida de biodiversidad y por ende en la prestación de servicios ecosistémicos indispensables para garantizar el bienestar humano.

Hacer frente al cambio climático es una acción que se debe incentivar desde el ámbito local con el liderazgo de autoridades e instituciones que trabajen conjuntamente con las comunidades. Por eso, es necesario entender que pensar en cambio climático no es únicamente idear estrategias para la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también planificar responsable y participativamente los territorios, garantizar condiciones de bienestar para las comunidades y gestionar de manera adecuada los recursos naturales sin perder que las actividades productivas a gran escala y poco sostenibles inciden considerablemente en el deterioro ambiental.

En esa línea, en un esfuerzo interinstitucional, tanto los medios de comunicación, como las autoridades municipales, regionales y ambientales, junto con las diferentes carteras ministeriales y demás entidades con incidencia territorial están en la responsabilidad de idear iniciativas de adaptación al cambio climático dando prioridad a los procesos de toma de decisiones conjuntos,

a la transformación de los conflictos socioambientales, al fortalecimiento de los procesos de comunicación, a la educación ambiental, pero sobretodo, a la sabiduría ancestral, pues dar valor y trascendencia al conocimiento de las comunidades sobre sus territorios es una deuda pendiente de saldar.

Los *Otros* y Yo

Como lo anuncié en el planteamiento metodológico, uno de los propósitos que perseguí con este trabajo fue asumir la actitud de *comunicadora mediadora* para poder reconocer y –en la medida de lo posible– retratar las percepciones de los *Otros* (todas aquellas personas que habitaban la región o que, de una u otra manera, estaban relacionadas con la misma). Ese encuentro con *otros* fue un encuentro *conmigo* que, más allá de esa posición de investigadora, me permitió encontrarme como *otra*: diferente, contradictoria e imprecisa si se quiere. Como lo plantearía Kapuściński (2007), “El otro soy yo” y, en efecto, desarrollar este trabajo fue una manera de verme a través de esos otros y conocerme en un contexto que me había sido ajeno.

Una lección importante de este proceso está relacionada con el acceso a la información. Evidentemente, ser foránea en este territorio despertó inquietud en algunos de sus habitantes que vieron con desconfianza el hecho de que una periodista/investigadora proveniente de la capital estuviera indagando por la industria petrolera y palmera, el bienestar de las comunidades o por los migrantes. No obstante, superadas las inquietudes –y gracias al respaldo institucional con el que conté durante mi estadía en el territorio– fue relativamente sencillo el diálogo tanto con los pobladores como con funcionarios y con representantes de las actividades productivas.

Sería insensato desconocer que acceder al encuentro y las voces fue fácil en tanto ya contaba con gran parte del camino labrado, pues una de las prioridades para lograr los objetivos del Proyecto Orotoy fue precisamente generar confianza, tarea que se logró a cabalidad gracias al compromiso del equipo de la Universidad de los Llanos. Sin embargo, me sorprendió la disposición de las personas y su interés por dialogar, por narrar sus historias y ,a pesar de los estigmas y estereotipos que rodean a la cultura llanera, la actitud de todos fue amable, respetuosa y servicial.

La impresión general que me dejó este proceso de diálogo y encuentro con los pobladores de la cuenca del río Orotoy es que hay historias relevantes esperando a ser contadas y personas dispuestas a narrarlas, frente a las que el periodismo tiene una responsabilidad inmensa. Tal vez si los periodistas fuéramos más conscientes de que *la fuente* en las regiones es más accesible de lo que se piensa, realizaríamos nuestra labor inmersos en aquellos territorios desde donde se forja el verdadero país que habitamos e intentamos narrar.

Con algunas excepciones, acceder a la información o establecer contacto con determinadas personas o instituciones no fue tan complejo como se pensaría. No obstante, el verdadero reto estuvo en organizar y presentar la información a pesar de que las versiones recabadas fueran en muchos casos totalmente opuestas y evidenciaran con fuerza que este es un escenario de conflictos.

Para resumir lo anterior –y aún cuando sé que puede parecer erróneo–, vale la pena generalizar al máximo dichas versiones:

- Los pobladores de la región, en efecto, tienden a responsabilizar a la industria petrolera por cualquier problema ambiental, político o económico que se presente en el territorio.
- Los voceros de Ecopetrol y las empresas palmeras desconocen los reclamos de los pobladores por afectaciones en sus territorios y promulgan que el fin último de estas industrias no es más que procurar un bienestar económico de la región y el país.
- Los ganaderos y arroceros critican a los pobladores porque solo quieren trabajar en las empresas petroleras y palmeras, y cuestionan con severidad que el Gobierno se dedique únicamente a potenciar las actividades extractivas.
- Los expertos, quienes tienden a la autocensura para no comprometer a las instituciones que representan, no consiguen el éxito esperado al mediar entre los actores involucrados en los conflictos.
- Las autoridades locales y nacionales brindan respuestas ambiguas y se desentienden de las denuncias ciudadanas.

Lo anterior demuestra lo complejo que puede ser trabajar en un escenario de conflicto en el que la única tendencia en común es identificar responsables. Una actitud desacertada en un contexto donde se debería promover el diálogo para la construcción conjunta de estrategias o alternativas que permitan dirimir esos conflictos cada día más latentes, sin desconocer las percepciones e intereses de cada grupo de actores.

Entender esa limitante y aún así trabajar con ella fue un reto que solo los lectores de este trabajo podrán decidir si se resolvió o no. No obstante, es claro que se cumplió el objetivo principal de mostrar a los actores involucrados en los conflictos socioambientales de la región, al igual que caracterizarlos y presentar los impactos que tienen las actividades productivas en los ecosistemas naturales.

A lo anterior se suma como valor agregado la puesta en contexto general. Este trabajo es al tiempo un recorrido histórico que en todos los casos sirve para ubicar al lector y dotarlo con elementos puntuales que le permitan desarrollar una actitud crítica, la cual –espero– sea un primer paso para ver en perspectiva los conflictos, para idear acciones encaminadas al cuidado de los recursos naturales, para liderar procesos de movilización de defensa de los territorios, para entender la importancia que tiene planificarlos y para concebir estrategias de adaptación al cambio global.

Sin duda, este trabajo no es más que una muy pequeña pieza de un engranaje que ya debería estar en movimiento, pues los conflictos socioambientales en una región como la Orinoquia, tan amplia, tan desconocida, tan proyectada y tan explotada, tienen varias aristas desde las que vale la pena abordarlos. Así, se deberían llevar a cabo nuevas investigaciones que contemplen la perspectiva económica, que analicen las relaciones costo-beneficio en torno al desarrollo de actividades productivas en detrimento del cuidado de los recursos naturales y dejando conflictos por doquier. En esa misma línea, valdría la pena revisar todo lo concerniente a regalías y su distribución, al igual que los casos de corrupción en el Meta relacionados.

La fuerte crisis laboral que dejó a su paso la industria petrolera en esta región, las cuestionables condiciones laborales que ofrecen las empresas palmeras a sus trabajadores y la falta de

oportunidades de empleo y emprendimiento en esta región, son otros de los enfoques de investigación que se abren con este trabajo.

Pero lo más urgente, sin duda, es desarrollar proyectos de investigación que propongan nuevas estrategias para dar a conocer información científica y técnica respecto a los conflictos socioambientales en diferentes territorios y su incidencia en el bienestar comunitario. Es decir, idear nuevas maneras de insertarse y abordar la coyuntura ambiental mundial desde la comunicación y el periodismo.

Esta tarea, más allá de alarmar debe centrarse en brindar elementos e información útil para fomentar una conciencia ambiental, motivar a la acción y presentar alternativas viables para transformar los conflictos en aquellos territorios como la cuenca del Orotoy y, en general, la Orinoquia que, además de tener un alto potencial productivo, son ricos en biodiversidad y recursos naturales. La única premisa obligatoria para esos nuevos abordajes es que nunca es tarde para emprender el camino de la adaptación.

Entrevistas

Comunidad

Rosalba Ayala

Habitante de Guamal

Noviembre 23 de 2016

Roque Alvarado

Pensionado de la Policía y habitante de Guamal

Noviembre 23 de 2016

Mabel Rodríguez

Lideresa de San Isidro de Chichimene

Noviembre 24 de 2016

Roberto Rodríguez

Operario de Ecopetrol en el campo Chichimene

Noviembre 24 de 2016

Mauricio Merchán

Comerciante de San Isidro de Chichimene

Noviembre 25 de 2016

Marcela Rodríguez

Fundadora de la Corporación Ecochichimenitos

Noviembre 26 de 2016

Alirio Virgüez

Pescador, fundador de cooperativa de pescadores de peces ornamentales Coopesca

Noviembre 27 de 2016

Jesús Orjuela

Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juanito

Diciembre 1 de 2016

Liliana Rueda Rivera

Reintegrada de la guerrilla de las FARC, operaria del sector palmícola en la vereda de San Lorenzo

Diciembre 3 de 2016

Hader Sneider Fuentes

Líder comunitario vereda El Toro

Diciembre 3 de 2016

Rocío Rojas Silva

Profesora de la escuela San Juanito

Diciembre 5 de 2016

Jairo Correal

Conductor de camionetas de empresas proveedoras de servicios para Ecopetrol

Diciembre 13 de 2016

Representantes de sectores productivos

Alexis Ricaurte Puentes

Profesional de Gestión Ambiental – GDT de Ecopetrol.

Noviembre 29 de 2016

Andrés Boada Escobar

Coordinador ambiental de la empresa Palmeras del Llano S.A.

Noviembre 9 de 2016 (Entrevista con Sandra Pinzón, consultora del Proyecto Orotoy).

Álvaro Amador

Arrocero y exconcejal de Castilla la Nueva. Propietario de la finca Guacamayas

Diciembre 12 de 2016

Giselle Huérfano

Ganadera. Propietaria de la finca El Triunfo

Diciembre 13 de 2016

Germán Castelblanco

Ganadero. Propietario de la finca La Bramadora

Diciembre 15 de 2016

Carlos Castelblanco

Ganadero. Propietario de la finca Las Canarias

Diciembre 15 de 2016

Ancízar Acosta

Ganadero. Gerente de la cooperativa de ganaderos de la región, CODEGAN

Diciembre 16 de 2016

Mauricio Ortiz

Ganadero. Propietario de la finca Villa María

Diciembre 17 de 2016

Expertos y representantes institucionales

Luis Guillermo Castro

Investigador adjunto del Instituto Humboldt y coordinador del Proyecto Orotoy

Enero 27 de 2017

Tatiana Roa Avendaño

Ingeniera de petróleos y coordinadora de la ONG ambientalista CENSAT Agua Viva

Febrero 2 de 2017

Diana Carolina Torres

Coordinadora de Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional, Cormacarena.

Febrero 14 de 2017

Clara Inés Caro Caro

Docente y miembro del grupo de investigación en Gestión ambiental sostenible de la Universidad de los Llanos

Marzo 6 de 2017

Referencias bibliográficas

ACKnowl-EJ y EJOLT. (2017). *Environmental Justice Atlas*. Barcelona, España. Recuperado de <https://ejatlas.org/country/colombia>

Andrade-C., M. G. (2011). Estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la interacción ambiente-política. *Rev. Acad. Colomb. Cienc.* 35(137), 491-507.

Ángel, A. (2015). Análisis de sostenibilidad de los sistemas productivos de la cuenca hidrográfica del río Orotoy frente al cambio climático a escala local y regional. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).

Ariza, J. (2016). Valoración económica de los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Orotoy. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).

Butler, R. (2017). *The top 10 most biodiverse countries*. San Francisco, Estados Unidos: Mongabay. Recuperado de <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/?n3wsletter>

Camacho, A. (2015). Análisis de política del Proyecto de adaptación social y ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Orotoy, Colombia. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).

Campos de Ecopetrol en el Meta alcanzaron cifra récord de producción de 171.151 barriles/día (30 de octubre de 2012). Ecopetrol. Recuperado de http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es!/ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfljy pNzrfIzU6xSDA0t0pITLXSTLI1NdE1SU5J0Ey2SLXWTEIOMEk3TzIxTjMz0C7IdFQFYsPJG/

Cárdenas, M. y Rodríguez-Becerra, M. (2013). *Desarrollo económico y adaptación al cambio climático*. Bogotá, Colombia. Fescol y Foro Nacional Ambiental.

Caro-Caro, C.I., Torres-Mora, M. A., & Ramírez-Gil, H. (2011). *Determinación y formulación de las medidas socio-ambientales asociadas a la recuperación del río Orottoy, en el área de influencia de la Superintendencia de Operaciones Central Ecopetrol, municipios de Acacias y Castilla la Nueva*. Villavicencio, Colombia: Universidad de los Llanos.

Carrizosa, J. (1998). Sostenibilidad seminario permanente. Misión Rural. Transición, convivencia y sostenibilidad. Bogotá, Colombia.

Céspedes, O. Y. (2015). El petróleo en el departamento del Meta 1859-2011. *Revista científica Guarracuco* 26(15), 9-33.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2009) *Censo ampliado en sistema de consulta Redatam del censo Nacional de 2005*. Recuperado de <http://www.dane.gov.co/censo/>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2014). *Cuentas Departamentales, valor agregado, por ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamiento año 2012*. Recuperado de <http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2003). *Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 Hacia un Estado Comunitario*. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/pnd.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2007). *Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 Estado Comunitario: desarrollo para todos*. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/pnd_tomo_2.pdf

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2011). *Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad* (Tomo I).

Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2011). *Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad* (Tomo II).

Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-2014%20Tomo%20II%20CD.pdf>

Devia, C. (2015). Orinoquia colombiana, la influencia del agronegocio y la actividad petrolera: Territorialidades en disputa. *Revista Nera* 18(28).

EJAtlas. (2017) *Conflictos ambientales en Colombia. Monocultivo de palma de aceite, en Meta, Colombia*. Recuperado de <https://ejatlas.org/conflict/monocultivo-de-palma-de-aceite-en-meta-colombia>

En debate presidente de Ecopetrol se burla de un profesor. (17 de abril de 2016). *Noticias Uno Colombia*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=F75U674OYiU>.

Galindo, J. (2004). Sistémica y comunicología. Explorando la complejidad del mundo social contemporáneo. *Razón y Palabra* 40. Recuperado de: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n40/jgalindo.html>

Geertz, C. (1992). *La interpretación de las culturas*. Barcelona, España: Editorial Gedisa.

Guber, R. (2001). *La etnografía, método, campo y reflexividad*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.

- Gutiérrez, F. (2010). Organización territorial, desarrollo sostenible y nuevas visiones sobre el territorio en Colombia (1991-2010). *Perspectiva Geográfica* 15, 239.260.
- Hammersley, M. y Atkinson, P. (1994). *Etnografía, métodos de investigación*. Barcelona, España: Ediciones Paidós.
- IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCELLEERÍA (2015). Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011- 2100 Herramientas Científicas para la Toma de Decisiones – Enfoque Nacional – Departamental: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
- Industria Militar de Colombia (Indumil). (2017). Características generales de Sismigel plus explosivo tipo sísmico. Recuperado de <https://www.indumil.gov.co/product/sismigel-plus-explosivo-tipo-sismico>
- Iturralde, P. y Francke, P. (2013). Modelo primario-exportador en América Latina: balances, retos y alternativas desde la economía. Red latinoamericana sobre las industrias extractivas. *Cuadernos de Debate* 3.
- Kapuściński, R. (2007). *Encuentro con el otro*. Cracovia, Polonia: Editorial Anagrama.
- Marrero, L. (2008). El reportaje multimedia como género del periodismo digital actual. Acercamiento a sus rasgos formales y de contenido. *Revista Latina de Comunicación Social* 63. Recuperado de http://www.revistalatinacs.org/08/29_40_Cuba/Liliam_Marrero.html
- Martín-Barbero (2011). Los oficios del Comunicador. *Signo y Pensamiento* 31(59), 18-40.
- Martínez, R. (2012). Un modelo de análisis del conflicto socio-ambiental para aprender-investigar. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social* 3(2), 35-47.

- Millenium Ecosystem Assessment (MEA). (2005). *Ecosystems and HumanWell-being*. 4 volumes. Island Press, EE.UU.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). *Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos* (PNGIBSE).
- Ministerio de Medio Ambiente (2001). *Una aproximación teórica y práctica a la identificación, manejo y resolución de conflictos ambientales*. Bogotá, Colombia.
- Munévar, C. y Valencia, J. (2015) Origen y transformación del conflicto ambiental: análisis de los procesos de participación y educación en dos estudios de caso. *Civilizar* 15(28), 47-60.
- Obando, C. (2017). *Perversiones digitales Ciberactivismo, producción transmedia y cultura hacker*. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2013). *Censo de cultivos de coca 2012*. Bogotá, Colombia.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2016). *Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015*. Bogotá, Colombia.
- Pérez, M. y Rojas, J. (2010). *Desarrollo sostenible. Principios, aplicaciones y lineamientos de política para Colombia*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.
- Posada, L. y Vargas, E. (1997). *Desarrollo Económico sostenible, relaciones internacionales y recursos minero energéticos*. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Proyecto Orotoy (2013 - 2017). *Fortalecimiento de las capacidades de adaptación social y ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Orotoy, Colombia*. Recuperado de <http://adaptacion-orotoy.org/>

- Rad, P. R. (1998). La teoría del actuar comunicativo de Jürgen Habermas: un marco para el análisis de las condiciones socializadoras en las sociedades modernas. *Papers* 56. Recuperado de http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/habermas02.pdf
- Real Academia Española (2016). Incidente. *Diccionario de la lengua española*. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=LEEIb15> el 20 de enero de 2017.
- Redacción (1 de diciembre de 2010). Ecopetrol anunció descubrimiento de petróleo en pozo Akacías en el Meta. *El Espectador*. Recuperado de <http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-anuncio-descubrimiento-de-petroleo-pozo-akaci-articulo-238001>
- Redacción (11 de febrero de 2015). De nuevo por encima del millón. *Dinero*. Recuperado de <http://www.dinero.com/economia/articulo/produccion-barriles-petroleo-colombia/205714>
- Redacción (11 de septiembre de 2009). Superintendencia de Operaciones Central de Ecopetrol viola normas ambientales: Contraloría general. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6078387>
- Redacción (13 de septiembre de 2016). En agosto se produjeron 827.000 barriles. *Portafolio*. Recuperado de <http://www.portafolio.co/economia/produccion-de-petroleo-en-agosto-2016-500308>
- Redacción (15 de junio de 2010). Producción petrolera de Campo Castilla, en el Meta, alcanzó récord de 100.000 barriles por día. *Portafolio*. Recuperado de <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/produccion-petrolera-campo-castilla-meta-alcanzo-record-100-000-barriles-dia-359278>
- Redacción (16 de abril de 2015). 23 empresas del sector petrolero en peligro de insolvencia. *Portafolio*. Recuperado de <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/23-empresas-sector-petrolero-peligro-insolvencia-30640>

Redacción (20 de abril de 2009). Continua alerta por químico que cayó en el río Orotoy de Castilla La Nueva (Meta). *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5025168>.

Redacción (21 de abril de 2016). Ecopetrol reactivará cinco taladros en Acacias y Castilla La Nueva. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/ecopetrol-reactivara-cinco-taladros-en-acacias-y-castilla-la-nueva/16569980>

Redacción (24 de noviembre de 2004). Ecopetrol perforará 12 pozos en el campo de castilla la nueva, en el Meta. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1519991>

Redacción (29 de mayo de 2016). Violentos disturbios en zona petrolera de Castilla La Nueva y Acacias. *Llano 7 días*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/disturbios-en-zona-petrolera-de-castilla-la-nueva-y-acacias/16606566>

Redacción (30 de octubre de 2006). Meta se vuelve la nueva estrella petrolera. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2254325>

Redacción (6 de enero de 2015). Producción de campo Chichimene de Ecopetrol logra récord. *Dinero*. Recuperado de <http://www.dinero.com/empresas/articulo/produccion-campo-chichimene-ecopetrol-enero-2015/204573>

Redacción (9 de diciembre de 2015). Producción petrolera colombiana bajó 1,9 por ciento en noviembre. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/produccion-de-petroleo-en-colombia/16452698>

Reservas Probadas registran 1.849 millones de barriles de petróleo equivalentes al cierre de 2015 (29 de febrero de 2016). *Ecopetrol*. Recuperado de

<http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines/Boletines/balance-reservas-probadas-2015>

- Richardson, K., Steffen, W. y Liverman, D. (2011). *Climate Change. Global risks, challenges and decisions*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University.
- Rincón-Ruíz, A., Echeverry-Duque, M., Piñeros, A. M., Tapia, C. H., David, A., Arias-Arévalo, P. y Zuluaga, P. A. (2014). *Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos- VIBSE: Aspectos conceptuales y metodológicos*. Bogotá, Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH).
- Rincón, A., Lara, D., Zambrano, D. y Rojas, C. (2015). *Fases de preparación y caracterización: Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos – VIBSE. Cuenca del río Orotoy-Meta*. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).
- Rodríguez-Becerra, M. (2007). La política ambiental en el proyecto del “Plan Nacional de Desarrollo: 2006-2010”. *Boletín Ecofondo*: Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://www.manuelrodriguezbecerra.org/politicaambiental.htm>
- Rodríguez-Becerra, M., Andrade, G., Castro, L., Durán, A., Rudas, G., Uribe, E. y Wills, E. (2009). *La mejor Orinoquia que podemos construir*. Bogotá, Colombia.
- Rodríguez, C., Rodríguez, D. y Durán, H., (2017). *La paz ambiental Retos y propuestas para el posacuerdo*. Bogotá, Colombia. Ediciones Antropos Ltda.
- Savage, T. y Vogel, K. (2014). *An introduction to digital multimedia*. Burlington, Estados Unidos: Jones & Bartlett Learning.
- Schutz, A. (1999). *Estudios sobre teoría social*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu editores.

Scolari, C., Micó, J., Navarro, H. y Pardo, H. (2008). El periodista polivalente. Transformaciones en el perfil del periodista a partir de la digitalización de los medios audiovisuales catalanes. *Zer* 13(25), 37-60.

Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (2016). *Biodiversidad en Cifras*. Bogotá, Colombia: SIB Colombia. Recuperado de:
<http://www.sibcolombia.net/biodiversidad-en-cifras/>

Spadoni, E. (2012). *Los conflictos socioambientales en el contexto Latinoamericano*. Quito, Ecuador: Fundación Cambio Democrático.

Tobasura Acuña, I. (2005). Reflexiones acerca de la relación entre los conceptos: ecosistema, cultura y desarrollo. *Revista Luna Azul* 20. Recuperado de
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321727222008>

Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio de Minas y Energía (2015). *Evaluación de la contribución económica del sector de hidrocarburos colombiano frente a diversos escenarios de producción*. Recuperado de:
http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/news/3828/files/resumen_fedesarrollo_mme_final.pdf

Valencia, M. (2015). *Guía periodística agenda verde: una mirada a la problemática del medio ambiente y el cambio climático en las regiones de Colombia*. Bogotá, Colombia: Opciones Gráficas Editores.

Vargas, P. (9 de mayo de 2016). Castilla, el único gran campo donde la producción de crudo ha mejorado. *Portafolio*. Recuperado de <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/unico-campo-colombia-produccion-crudo-mejorado-495497>

Victorino, I. (2015). Análisis de gobernanza y gestión del agua y ecosistemas asociados en la cuenca del río Orotoy, departamento del Meta, Colombia. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).

Wolton, D. (2009). *Introducción – Una teoría de la comunicación. Informar no es comunicar - Contra la ideología tecnológica*. Barcelona, España: Gedisa.

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Comunicación y Lenguaje
Maestría en Comunicación

Anteproyecto de investigación

Nombres y apellidos: Silvia Estefanía Gamba Sánchez

Tema: Actores, causas y manifestaciones de los conflictos socioambientales en la cuenca del río Orotoy, Meta, Colombia.

Línea de investigación: Medios, opinión pública y políticas de comunicación

Teléfono: 3192656627

Email: silviagamba@javeriana.edu.co

I. INFORMACIÓN BÁSICA

A. PROBLEMA

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse?

Si bien con el nuevo siglo, el cambio climático se ha convertido en una preocupación constante en el todo el planeta, aún no logra ser un tema del todo priorizado en las agendas de los medios. De manera particular, en Colombia es evidente que en la cúspide de las pirámides informativas priman temas políticos, judiciales e incluso, deportivos, antes que los ambientales; lo cual es más que preocupante si se tiene en cuenta que en 2014 Colombia fue catalogado como el país latinoamericano que registra el mayor número de conflictos ambientales (96), según el proyecto interinstitucional mundial Atlas de Justicia Ambiental; y que la pérdida de biodiversidad es una amenaza latente en el territorio nacional.

Al ser el cubrimiento periodístico en profundidad frente a temas ambientales necesario pero aún muy incipiente en el país, resulta importante dar una mirada profunda a problemas ambientales que nacen en las regiones de Colombia, un ejercicio que no sirva únicamente para visibilizar conflictos determinados o sus protagonistas, sino también para fortalecer el emergente género periodístico ambiental en el país mediante un trabajo de reportería integral que comprenda no solo los testimonios o la observación, sino también información técnica y científica; sintetizado en un producto público, claro y contundente, que esté dirigido a un público general. Una herramienta que más allá de informar, contextualice y sensibilice.

El problema que da paso a este trabajo de investigación son los conflictos socioambientales que se presentan en una pequeña porción de la Orinoquia colombiana: la cuenca del río Orotoy, en el Meta. Este territorio demuestra signos tempranos de las consecuencias del cambio climático que se ven evidenciados en los conflictos relacionados con el uso y acceso a unos recursos naturales cada vez más escasos. Lo anterior sucede porque esta cuenca es escenario de grandes actividades productivas como la explotación petrolera y de aceite de palma. No obstante, a pesar de réditos que dejan estas actividades para la economía colombiana, las condiciones de bienestar de sus pobladores son muy cuestionables y las consecuencias medioambientales son verdaderamente preocupantes.

Vale también la pena destacar que esta región tiene un historial de explotación productiva significativa relacionada con las actividades propias del Llano colombiano, como el cultivo de arroz y la ganadería, las cuales –junto con la explotación petrolera y de aceite de palma– han venido dejando a su paso una huella casi imborrable en la biodiversidad y los sistemas naturales del territorio, huellas que son precisamente las que hacen a la del Orotoy una cuenca vulnerable ante los efectos del cambio climático.

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?

Porque al igual que la cuenca del Orotoy, existen territorios a lo largo del país que no solo se han transformado de manera acelerada como resultado de un aparente desarrollo industrial, sino que también presentan conflictos socioambientales preocupantes. Dichos conflictos están usualmente

asociados con la escasez de recursos y las disputas por acceder a ellos, su uso por parte de grandes industrias y el deterioro de los ecosistemas naturales.

En ese sentido, es importante aportar trabajos investigativos como este, en los que se haga una radiografía descentralizada de un territorio y se refleje una realidad ambiental de cara a la coyuntura mundial de cambio climático. Pero aquella realidad no está únicamente relacionada con los impactos que tienen las actividades humanas en los ecosistemas naturales, sino también con el modelo extractivo de desarrollo económico impulsado desde inicios del siglo XXI en Colombia, el cual acentúa los conflictos socioambientales en este, el país con mayor número de conflictos en América Latina.

3. ¿Qué se va investigar específicamente?

Para este ejercicio investigativo, se tomará como unidad de observación la cuenca hidrográfica del río Orotoy, en el departamento del Meta. Esto, teniendo en cuenta que este territorio presenta un alto grado de vulnerabilidad al cambio ambiental y consecuencias tempranas del cambio climático. Además, porque sus conflictos socioambientales y cualidades paisajísticas, lo hacen un territorio que muestra en una pequeña porción la realidad que se vive en la Orinoquia colombiana, una vasta región rica en biodiversidad, con un potencial productivo altísimo y con presencia de grandes emprendimientos productivos extractivos.

B. OBJETIVOS

1. Objetivo General

Presentar –mediante un ejercicio de periodismo ambiental– las causas, actores involucrados y manifestaciones de los conflictos socioambientales asociados a las actividades productivas en la cuenca del río Orotoy, al igual que los impactos que estas tienen en los ecosistemas y recursos naturales.

2. Objetivos Específicos:

1. Describir los conflictos socioambientales más significativos que tienen lugar la cuenca del río Orotoy, los actores involucrados y sus manifestaciones cotidianas.
2. Contextualizar históricamente las principales actividades productivas que se llevan a cabo en la cuenca del río Orotoy, así como las transformaciones que han sufrido el territorio y sus sistemas naturales como consecuencia de las mismas.
3. Reunir los testimonios de pobladores de la cuenca del Orotoy, representantes de sectores productivos presentes en la región, expertos y académicos para esbozar un panorama general de la cuenca y complementarlos con estudios técnicos y científicos relacionados con la misma.
4. Presentar las iniciativas de adaptación al cambio climático que se llevan a cabo con pobladores de la cuenca del río Orotoy.
5. Diseñar un producto multimedia que contenga el trabajo periodístico realizado.

II. FUNDAMENTACION Y METODOLOGIA

A. FUNDAMENTACION TEORICA

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema?

Este tema ha sido cubierto en dos trabajos investigativos periodísticos que tienen como eje la cuenca del río Orotoy, nuestra zona de interés. El primero es el trabajo de grado de Erika Yesenia Chávez Vallejo (2014), titulado Impactos socio-ambientales generados por la explotación de hidrocarburos por parte de la empresa Ecopetrol S.A. en las comunidades que habitan las veredas de San Isidro de Chichimene y La Esmeralda (Meta). El segundo es la serie de reportajes para el diario El Espectador –realizada en agosto, septiembre y noviembre de 2013

por la periodista Natalia Herrera Durán– sobre los impactos ambientales y sociales que deja la explotación petrolera en las cuencas de los ríos Acacias y Orotoy.

Más allá de considerar los vacíos que podrían tener los trabajos periodísticos, éstos evidencian la hipótesis de que este tipo de investigaciones se concentran en las repercusiones de la explotación petrolera y obvian las consecuencias que tienen otras actividades productivas como el cultivo de la palma de aceite, por ejemplo.

Además, gracias a estas investigaciones se puede dar una perspectiva periodística a las problemáticas socioambientales que suceden en la región, partiendo de las consecuencias negativas que genera la explotación petrolera en la dinámica local de la cuenca del río Orotoy.

Dado que estos trabajos se hicieron en los años 2013 y 2014, vale la pena contextualizar nuevamente los conflictos socioambientales que suceden en la cuenca. Además, es necesario complementarlos con datos actuales.

Para esto serán vitales los resultados preliminares del proyecto de *Fortalecimiento de las capacidades de adaptación social y ecológica al cambio climático en la cuenca del río Orotoy, Colombia*, ejecutado por el Instituto Humboldt, el cual contempla a los diversos ‘actores’ que tienen responsabilidad en la gestión de los recursos naturales en la cuenca y sus servicios ecosistémicos.

Este estudio comprende la manera en que se gestionan los recursos en la cuenca como resultado de una serie de transformaciones en el territorio que han redundado en las dinámicas de vida de sus habitantes y han sido acarreadas por las actividades productivas que allí se ejecutan.

Además, propone que para lograr una gobernanza integral de los recursos naturales, especialmente del agua, es necesario generar procesos de empoderamiento dentro de la comunidad para que comprenda la vitalidad de sus recursos y les de un uso más consciente.

Con lo anterior, lo que se puede decir es que, aunque no sea necesariamente periodístico, este estudio –a diferencia de los otros tenidos en cuenta para esta investigación– evidencia que la responsabilidad en cuanto a los conflictos socioambientales que se presentan en la cuenca no recae únicamente en los sectores productivos, sino también en la comunidad y que más allá de la comunidad, la ‘víctima’ es el territorio, sus recursos naturales y su capacidad de ofrecer servicios ecosistémicos.

Tanto el trabajo Impactos socio-ambientales generados por la explotación de hidrocarburos por parte de la empresa Ecopetrol S.A. en las comunidades que habitan las veredas de San Isidro de Chichimene y La Esmeralda (Meta), realizado por Erika Chávez, como la serie de reportajes para El Espectador, de Natalia Herrera, se valen de la entrevista en profundidad como metodología principal para la consecución de información.

En el caso de Chávez, la consulta de fuentes secundarias de información también es vital para el desarrollo de su trabajo. Los constantes cuestionamientos y el contraste de los testimonios de la población con las cifras e información que aporta la revisión literaria, le dan la envergadura al reportaje periodístico que construye a partir del análisis contextual de la región y del contraste de fuentes.

El propósito principal de este trabajo, que se realizó durante de la crisis de la baja de precios del petróleo, es destacar que al ser un país petrolero casi por naturaleza, Colombia debe dar una mirada a los efectos que tiene esta actividad en la dinámica de vida de la población.

Es por esto que Chávez se concentra en las veredas de San Isidro de Chichimene y La Esmeralda (entre otras, conforman la cuenca del río Orotoy) en el departamento del Meta, las cuales, según cita el trabajo, “han debido soportar y enfrentar las consecuencias negativas de la extracción de petróleo. Entre muchas de ellas se encuentran la contaminación del aire con un eterno olor de naftalina, la contaminación del agua con metales pesados y la afectación de las especies de las cuales dependen muchos pobladores. Ello sin mencionar los cambios socio culturales que han sufrido las dos poblaciones por la llegada de las petroleras” (2014, p. 12).

Podría decirse que el trabajo de periodismo investigativo realizado por Chávez se concentra en visibilizar los testimonios y percepciones de los habitantes de la zona, mostrando las consecuencias directas que tiene la explotación de crudo, particularmente cuando es cerca a asentamientos humanos. De igual manera, esta investigación sienta un precedente sobre las manifestaciones de los conflictos socioambientales y de orden público en la cotidianidad de los habitantes de una región por consecuencia exclusiva de la actividad petrolera. De hecho, ahonda en el caso de una líder de la vereda de Chichimene, quien el 29 de agosto de 2014 fue asesinada bajo circunstancias aún no del todo establecidas.

No obstante, el trabajo de contraste de fuentes que se logra en esta investigación está basado en dos fuentes de información complementarias pero de diferente naturaleza: las testimoniales directas y las fuentes primarias y secundarias; lo cual no afecta necesariamente el rigor periodístico, pero si deja un vacío en la investigación, pues el contraste de fuentes y argumentos no resulta tan evidente y termina por tomar partido y generar sesgos muy evidentes que ocultan a lo que bien podría considerarse la contraparte. Es decir, se concentra únicamente en la comunidad y no consulta directamente con Ecopetrol.

Pese a lo anterior, resulta muy valioso el riguroso trabajo de diagnóstico realizado, el cual es punto de partida para entender el territorio, las dinámicas que allí suceden y las manifestaciones cotidianas de los conflictos socioambientales.

Por su parte, Natalia Herrera en la serie de reportajes del diario El Espectador se pone de manifiesto situaciones particulares de contaminación de las aguas por la actividad petrolera en los ríos Orottoy, Guayuriba, Acacias y Meta. Además, contextualiza los proyectos de explotación que están ejecutándose en la región y, de forma particular, se enfoca en las omisiones y ausencias por parte de las autoridades locales y ambientales para hacer frente a las situaciones que se presentan en la región.

Al igual que el trabajo de Chávez, Herrera se vale de los testimonios de los pobladores de la zona para consolidar un diagnóstico claro sobre las afectaciones que sufren como consecuencia de la

actividad petrolera en la zona, evidenciadas principalmente en la imposibilidad para pescar y consumir agua proveniente de los ríos, y los olores que expiden los pozos ubicados en la región.

Esta serie de dos reportajes escritos, uno gráfico y una entrevista, abarca con amplitud las denuncias que hace la comunidad sobre la contaminación de los diferentes afluentes y contrasta las fuentes de forma directa. Es decir, contrapone los argumentos de las partes involucradas para –con un sustento relevante- presentar análisis concluyentes.

Si bien también se enfoca únicamente en los efectos de la actividad petrolera y el vertimiento de aguas residuales en los ríos en cuestión, da una mirada compleja e integral a la situación y busca demostrar cómo se reparten las responsabilidades de actores principales que no son únicamente la empresa petrolera como Ecopetrol, sino también las entidades institucionales con injerencia en la zona como Cormacarena, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entre otras.

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?

Este trabajo se desarrollará a partir del abordaje de las categorías biodiversidad y servicios ecosistémicos, conflictos ambientales, modelo económico extractivista, cambio climático y periodismo ambiental.

B. FUNDAMENTACION METODOLOGICA

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?

Teniendo en cuenta que esta propuesta de investigación está sustentada en los resultados iniciales del proyecto de *Fortalecimiento de las capacidades de adaptación social y ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Orotoy, Colombia*, es importante destacar que tengo acceso a informes técnicos resultado del proceso de investigación liderado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Dicha información se empleará para establecer el contexto general que dé cuenta de la situación en la cuenca del río Orottoy, y servirá como el sustento teórico base para el abordaje transversal de los conflictos socioambientales, las transformaciones del territorio, las actividades productivas y sus impactos. Además, servirá para relacionar las problemáticas con las manifestaciones cotidianas del cambio climático en la región.

Posteriormente, para complementar el trabajo, se realizarán entrevistas en profundidad estructuradas a líderes comunitarios, habitantes de la cuenca, representantes de sectores productivos, funcionarios institucionales y expertos o académicos que tengan un conocimiento sobre la situación de la región.

Una vez concluida la etapa de revisión literaria para el desarrollo del marco teórico basado en las categorías de análisis mencionadas anteriormente, el abordaje de los insumos técnicos y el trabajo periodístico, se procederá con a la redacción de un gran reportaje integrador que se realizará bajo preceptos del emergente género periodístico ambiental en Colombia, contemplados principalmente en la Guía periodística Agenda Verde, diseñada por el Consejo de Redacción y la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung.

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia?

Fecha	Actividad
Noviembre	Entrevistas comunidad, gremios y sectores productivos.
Diciembre	Diseño de marco teórico
Enero	Entrevistas funcionarios y expertos
Febrero	Redacción de reportaje
Marzo	Redacción de reportaje
Abril	Diseño y edición de producto multimedia
Mayo	Introducción y conclusiones
Junio	Entrega final del proyecto de investigación

3. Bibliografía básica

- Ángel, A. (2015). Análisis de sostenibilidad de los sistemas productivos de la cuenca hidrográfica del río Orotoy frente al cambio climático a escala local y regional. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).
- Ariza, J. (2016). Valoración económica de los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Orotoy. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).
- Cárdenas, M. y Rodríguez-Becerra, M. (2013). *Desarrollo económico y adaptación al cambio climático*. Bogotá, Colombia. Fescol y Foro Nacional Ambiental.
- Camacho, A. (2015). Análisis de política del Proyecto de adaptación social y ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Orotoy, Colombia. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).
- Guber, R. (2001). *La etnografía, método, campo y reflexividad*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
- Rincón, A., Lara, D., Zambrano, D. y Rojas, C. (2015). *Fases de preparación y caracterización: Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos – VIBSE. Cuenca del río Orotoy-Meta*. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).
- Martín-Barbero (2011). Los oficios del Comunicador. *Signo y Pensamiento* 31(59), 18-40.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). *Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos* (PNGIBSE).
- Victorino, I. (2015). Análisis de gobernanza y gestión del agua y ecosistemas asociados en la cuenca del río Orotoy, departamento del Meta, Colombia. Proyecto Orotoy Instituto Humboldt (documento inédito).

Valencia, M. (2015). Guía periodística agenda verde: una mirada a la problemática del medio ambiente y el cambio climático en las regiones de Colombia. Bogotá, Colombia: Opciones Gráficas Editores.

Bogotá, noviembre de 2016.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE COMUNICACION Y LENGUAJE
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN

RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO

1. Autor (es):

Silvia Estefanía Gamba Sánchez

2. Título del Trabajo:

OROTOY, HISTORIAS DE UN RÍO MÁS ALLÁ DEL AGUA

Conflictos socioambientales en torno a un río de la Orinoquia colombiana.

3. Tema central:

Actores, causas y manifestaciones de los conflictos socioambientales en la cuenca del río Orotoy, Meta, Colombia.

4. Subtemas afines:

Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la cuenca del río Orotoy, Meta, Colombia.

Conflictos socioambientales en la cuenca del río Orotoy, Meta, Colombia.

Modelo económico extractivista en la cuenca del río Orotoy, Meta, Colombia.

Cambio climático en la cuenca del río Orotoy, Meta, Colombia.

Periodismo ambiental.

5. Asesor del Trabajo:

Maryluz Vallejo Mejía

6. Fecha de presentación: Mes: Junio (6) **Año:** 2017 **Páginas:** 145

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO

1. Objetivo o propósito central del Trabajo:

Presentar –mediante un ejercicio de periodismo ambiental– las causas, actores involucrados y manifestaciones de los conflictos socioambientales asociados a las actividades productivas en la cuenca del río Orotoy, al igual que los impactos que estas tienen en los ecosistemas y recursos naturales.

2. Contenido

1. Introducción

2. Capítulo I

2.1 La cuestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

2.2 ¿Qué se considera un conflicto ambiental?

2.3 El Meta y sus conflictos socioambientales

2.4 El modelo primario exportador

2.5 Impulso al modelo extractivista y agroindustrial en Colombia

2.6 Continuidad, la política de Juan Manuel Santos

2.7 Un modelo extractivista ‘conflictivo’ 2.8 Desarrollo sostenible, concepto en disputa

2.9 La coyuntura del cambio climático y la necesidad de adaptación a partir de la comunicación

3. Capítulo II

3.1 El *comunicador mediador* y el *Otro*, protagonistas de la investigación

3.2 Pretextos sobre la unidad de análisis

3.3 Etnografía y la necesidad de construir relaciones de confianza

3.4 Los métodos complementarios

3.5 Una aproximación desde el periodismo ambiental

4. Capítulo III

4.1 Historia de un ‘incidente’

4.2 Orotoy: siete décadas de petróleo

4.2.1 La llama inagotable

4.3 Un motor de cambios llamado petróleo

4.3.1 Lógica de la probabilidad: la estrategia de Ecopetrol

4.3.2 Las ‘gafas’ del petróleo

4.3.3 Agua, petróleo y trabajo: vínculo inquebrantable

4.3.4 Migrantes y los conflictos entre iguales

4.3.5 Petróleo, ¿“caballito de batalla” de la comunidad?

4.3.6 Mientras haya petróleo

4.3 Cultivos de palma, como el agua y el aceite

4.3.1 Conflictos ambientales asociados con la palma

4.4 Del hato ganadero al pozo petrolero

4.4.1 Bajón en la ganadería, ¿alivio para el territorio?

4.5 Arroz en bajo

4.6 Un territorio pionero en iniciativas de adaptación

4.6.1 Compensación, la estrategia inmediata de Ecopetrol

4.6.2 La apuesta del Instituto Humboldt por el fortalecimiento comunitario

4.6.3 Guardianes del Orotoy, los superhéroes de la cuenca

5. Conclusiones

5.1 Orotoy, una ventana hacia la Orinoquia

5.2 Conocimiento a escala local, aprendizajes desde lo metodológico

5.3 Cuando el río suena

5.4 Los *Otros* y Yo

5. Autores principales

Germán Andrade Pérez

Oscar Yesid Céspedes

Clara Inés Caro Caro

Julio Carrizosa

Clifford James Geertz

Rossana Guber

Jesús Martín-Barbero

Manuel Rodríguez Becerra

6. Conceptos clave

Río Orotoy

Ríos de la Orinoquia colombiana

Explotación de hidrocarburos

Extracción de aceite de palma

Ganadería en el Meta

Cultivos de arroz en el Meta

Modelo económico extractivista

Cambio climático

Cambio global

Conflictos socioambientales en Colombia

Biodiversidad

Servicios ecosistémicos

Acacias

San Carlos de Guaroa

Guamal

Castilla la Nueva

Orinoquia

Conflictos ambientales

5. Proceso metodológico

El enfoque metodológico de este trabajo es cualitativo. Las herramientas seleccionadas para la recolección y análisis de información y datos fueron la etnografía, las entrevistas en profundidad semi-estructuradas y la revisión bibliográfica de fuentes de información primarias.

7. Reseña del Trabajo

Orotoy, historias de un río más allá del Agua. Conflictos socioambientales en torno a un río de la Orinoquia colombiana es un trabajo que retrata la realidad de la cuenca del río Orotoy, un

afluente en el departamento del Meta que baña a los municipios Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa. En este pequeño territorio, pero significativo en el contexto de la Orinoquia colombiana, confluyen grandes proyectos económicos, como explotación de hidrocarburos y de aceite de palma; además, tiene un amplio historial relacionado con el auge arrocero y ganadero del Meta.

Desde la perspectiva del periodismo ambiental, este trabajo pone en contexto las actividades industriales que se llevan a cabo en el territorio, su desarrollo y los impactos que tienen en la vida de los pobladores de la región y sobre los sistemas naturales y la biodiversidad. De igual manera, se conjugan los testimonios de los habitantes, representantes de proyectos productivos, funcionarios y expertos con información técnica-científica resultante del Proyecto Orotoy, liderado por el Instituto Humboldt y la Universidad de los Llanos.

III. PRODUCCIONES TECNICAS O MULTIMEDIALES

1. Formato :

Plataforma multimedia en internet: <http://www.historiasdelorotoy.com/>